



**UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRIA EN DERECHO**



**EL DERECHO A LA IGUALDAD E IMPUGNACIÓN
EN JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y
ESPECIALIZADOS**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO
EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD**

AUTOR:

MILAGROS LIZBETH ROJAS FLORES

ASESOR:

MG. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ

LAMBAYEQUE – PERÚ

2018



**UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRIA EN DERECHO**



**MAESTRIA EN DERECHO CON MENCIÓN EN
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

**EL DERECHO A LA IGUALDAD E
IMPUGNACIÓN EN JUZGADOS DE PAZ
LETRADOS Y ESPECIALIZADOS**

Tesis presentada para optar el Grado Académico de
Maestro en Derecho con mención en Constitucional
Y Gobernabilidad

PRESENTADA POR:

MILAGROS LIZBETH ROJAS FLORES

LAMBAYEQUE – PERÚ
2018

**EL DERECHO A LA IGUALDAD E IMPUGNACIÓN EN JUZGADOS DE PAZ
LETRADOS Y ESPECIALIZADOS**

AUTORA

Abog. Milagros Lizbeth Rojas Flores

ASESOR

Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernández

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para
optar el Grado de: MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD

APROBADO POR:

PRESIDENTE DEL JURADO:
DR. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

SECRETARIO DEL JURADO:
DR. CARLOS SILVA MUÑOZ

VOCAL DEL JURADO:
DR. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO

MARZO, 2018

DEDICATORIA

A Dios, por su bondad y amor infinito manifestado en cada paso de mi vida personal, profesional y laboral.

A mis queridos padres Segundo Salomón Rojas Herrera y Rosa Emilia Flores Caballero por ayudarme e inspirarme en mejorar día a día.

A mis pequeñas hermanas Varinia y Judith por su cariño y apoyo incondicional.

Milagros.

AGRADECIMIENTO

A mis padres y hermanas, por apoyarme y motivarme para realizar este trabajo de tesis.

De igual modo a mis maestros y amigos con quienes compartí toda esta aventura académica, especialmente al Dr. Héctor Huaranga Navarro por su tiempo y paciencia para la elaboración de esta tesis.

Finalmente, a mi compañero incondicional Luis Alvin, por su ayuda desinteresada para la culminación de esta investigación.

INDICE

DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
INDICE	vi
RESUMEN	12
ABSTRACT	14
INTRODUCCIÓN	16
CAPITULO I: <u>ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO</u>	
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	19
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	21
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	23
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO	23
1.4.1. JUSTIFICACIÓN	23
1.4.2. IMPORTANCIA	24
1.5. OBJETIVOS	26
1.5.1. GENERAL	26
1.5.2. ESPECIFICOS	26
1.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES	27
1.6.1. HIPÓTESIS	27
1.6.2. VARIABLES	28
1.6.2.1. INDEPENDIENTE	28
1.6.2.2. DEPENDIENTE	28
1.7. MARCO METODOLÓGICO	28
1.7.1. DISEÑO DE CONTRATACIÓN DE LA HIPÓTESIS	28
1.7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA	29

1.7.2.1. POBLACIÓN	29
1.7.2.2. MUESTRA	30
1.7.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	30
1.7.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS	31
1.7.5. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	32
1.7.6. METODOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS	32
CAPITULO II: <u>MARCO TEÓRICO</u>	
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION	35
2.2. BASE TEÓRICA	36
2.2.1. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO	36
A. UNIDAD DEL ORDENAMIENTO	36
B. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMO UN SISTEMA COHERENTE	38
C. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMO UN SISTEMA COMPLETO	39
2.2.2. DERECHOS FUNDAMENTALES	42
2.2.2.1. DEFINICIÓN	42
2.2.2.2. TEORÍAS SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	47
2.2.2.3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS	50
2.2.2.4. CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	51
2.2.2.5. FINALIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	53

2.2.2.6. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	54
2.2.2.7. EL DOBLE CARÁCTER DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	54
2.2.3. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA	59
2.2.4. EL PRINCIPIO-DERECHO A UN DEBIDO PROCESO	63
2.2.4.1. DIMENSIONES DEL DEBIDO PROCESO	66
2.2.4.1.1. EL DEBIDO PROCESO FORMAL	66
2.2.4.1.2. DEBIDO PROCESO MATERIAL	67
2.2.5. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD	68
2.2.5.1. CONCEPCIÓN DUAL DE LA IGUALDAD: PRINCIPIO Y DERECHO	71
2.2.5.1.1. COMO PRINCIPIO	71
2.2.5.1.2. COMO DERECHO	74
2.2.5.2. LA IGUALDAD EN RELACIÓN AL SISTEMA JURÍDICO	75
2.2.5.2.1. LA IGUALDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA LEY	75
2.2.5.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN TRATO DISCRIMINATORIO	78
2.2.5.4. LA IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY	79
2.2.5.5. LA IGUALDAD Y LA OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN	80
2.2.6. EL VALOR SUPREMO DE JUSTICIA	82
2.2.7. LA PLURALIDAD DE INSTANCIA	84

CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA EN LOS PROCESOS INICIADOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO	88
3.1.1. EL DERECHO COMO INSTRUMENTO REGULADOR DE LA CONDUCTA HUMANA	89
3.1.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE IMPUGNACIONES	91
3.1.3. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL Y SUSTENTO DEL DERECHO A LA IMPUGNACIÓN	92
3.1.4. LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS	92
3.1.4.1. LOS REMEDIOS	93
3.1.4.2. LOS RECURSOS	95
3.1.4.2.1. RECURSOS ORDINARIOS	95
3.1.4.2.1.1. APELACIÓN	95
3.1.4.2.1.2. QUEJA	95
3.1.4.2.1.3. REPOSICIÓN	96
3.1.4.2.2 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	96
3.1.4.2.2.1. CASACIÓN	96
3.1.5. LA PLURALIDAD DE INSTANCIA Y SU REGULACIÓN EN NUESTRA CÓDIGO NORMATIVIDAD LEGAL	96
3.1.5.1. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL	96
3.1.5.2. EL PROCESAL CIVIL	99

3.1.6.	LIMITACIONES DOCTRINARIAS	101
3.2.	ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA RECURSIVA EN LOS PROCESOS INICIADOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO CON RELACIÓN A LOS PROCESOS INICIADOS EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS /O MIXTOS	102
3.2.1.	DERECHO A LA IGUALDAD	102
3.2.2.	COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO	106
3.2.2.1.	LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL	106
3.2.2.2.	NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	109
3.2.2.4.	NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO	110
3.2.3.	COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS O MIXTOS	110
3.2.3.1	LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL	110
3.2.3.2.	CÓDIGO PROCESAL CIVIL	112
3.2.3.3.	NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	112
3.2.3.4.	NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO	113
3.3.	ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS PRACTICADAS	114
3.4.	ANÁLISIS DE SENTENCIAS	119
3.5.	PRUEBA DE HIPÓTESIS	126
3.6.	PROPUESTA LEGISLATIVA	128
	CONCLUSIONES	130
	RECOMENDACIONES	132
	BIBLIOGRAFÍA	134
	LINKOGRAFÍA	137
	ANEXOS	139

RESUMEN

Se ha elegido como título de la investigación *“El derecho a la igualdad e, impugnación en juzgados de paz letrados y especializados”*, por cuanto es el idóneo para denotar el núcleo del actual trabajo, y que luego del desarrollo respectivo se ha verificado que es de suma importancia y necesidad contar con un mecanismo legal para que los procesos iniciados en los juzgados de paz letrado puedan ser revisados por un tercer órgano jurisdiccional, que en este caso sería por la Sala del distrito judicial correspondiente, así como sucede con los procesos iniciados en los juzgados especializados o mixtos, los cuales pueden ser revisados por tercera vez ante la Corte Suprema.

Se ha logrado demostrar la hipótesis planteada, pues se cumplió con los objetivos generales y específicos y se ha evidenciado que nuestra normatividad procesal sin justificación objetiva hace diferenciación en materia recursiva, atentando contra la Constitución Política; asimismo, resultó interesante tener a la vista procesos iniciados en juzgados de paz letrado y en juzgados especializados y se evidenció que no hay diferencia mayor como para contemplar una regulación recursiva diferente, por ejemplo en ambos juzgados se tramitan las mismas pretensiones (pago de beneficios sociales, indemnización por daños y perjuicios, etc.) y solo por cuestión de una diferencia en el monto (que puede ser de una suma mínima) el proceso puede ser revisado por tercera vez ante la Corte Suprema. Con todo ello se ha obtenido una respuesta afirmativa a la interrogante planteada ¿Debe regularse un medio impugnatorio extraordinario para que la Sala Superior del Distrito Judicial respectivo revise los procesos iniciados en los Juzgados de

Paz Letrados, en idéntica función al recurso de casación que procede cuando el proceso se inicia en juzgados especializados?

Palabras claves: Derechos, igualdad, impugnación, juzgado de paz letrado y juzgado especializado y/o mixto.

ABSTRACT

It has been chosen as the title of the research *"The right to equality and, challenge in courts of peace lawyers and specialized"*, as it is the ideal to denote the core of the current work, and after the respective development has been verified to be It is extremely important and necessary to have a legal mechanism so that the processes initiated in the magistrates courts can be reviewed by a third jurisdictional body, which in this case would be by the corresponding judicial district court, as well as with the processes initiated in specialized and / or mixed courts, which may be reviewed for the third time before the Supreme Court.

The hypothesis has been demonstrated, since the general and specific objectives were met and it has been demonstrated that our procedural norms without objective justification differentiates in recursive matter, attacking the Political Constitution; likewise, it was interesting to have in view processes initiated in magistrates' courts and in specialized courts and it was evident that there is no greater difference to contemplate a different recursive regulation, for example in both courts the same claims are processed (payment of social benefits , compensation for damages, etc.) and only because of a difference in the amount (which can be a minimum amount) the process can be reviewed for the third time before the Supreme Court. With all this, an affirmative response has been obtained to the question posed. Should an extraordinary means of challenge be regulated so that the Superior Court of the respective Judicial District reviews the proceedings initiated in the Courts of Law Courts,

in identical function to the cassation appeal that proceeds when the process starts in specialized courts?

Keywords: Rights, equality, challenge, magistrate court and specialized court and / or mixed.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación está destinada a demostrar si se vulnera o no, el derecho a la igualdad cuando legalmente no se permite que los procesos iniciados en juzgados de paz letrado puedan ser revisados por un tercer órgano jurisdiccional imparcial. Resultando de suma importancia la evaluación de este tema por la realidad judicial, la cual nos ha generado esa inquietud y preocupación de saber por qué no se contempla ese tercer recurso o si su no regulación tiene justificación objetiva. Todos estos asuntos nos obligarán a estudiar a fondo el derecho a la igualdad y el derecho a la impugnación a la pluralidad de instancia, entre otras categorías jurídicas relevantes para el tema, de tal manera que al final de la investigación se cuente con fundamentos sólidos y jurídicos para dar respuesta a las hipótesis planteadas. Asimismo, nos agenciaremos de datos objetivos como encuestas, expedientes, etc., sobre todo de las personas involucradas con el asunto judicial, para tener una justificación real y palpable y no solo doctrinaria al término del presente trabajo.

Así pues, se ha empezado por precisar la realidad problemática, para luego plantearnos el problema en sí y llegar a su formulación mediante una interrogante precisa. Entonces, hemos partido por evacuar la siguiente hipótesis: la no regulación de un medio impugnatorio extraordinario, para que la Sala Superior respectiva revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, vulnera el derecho a la igualdad, en relación a la posibilidad que se tiene cuando –vía casación- se puede controlar un proceso originado en un

Juzgado Especializado; en torno a ello se efectuará el desarrollo de la investigación, previo cumplimiento de los objetivos generales y específicos.

En cuanto a la estructura de este trabajo, debemos indicar que tiene los siguientes capítulos: **a)** en el capítulo I se hace referencia a los aspectos de la problemática; **b)** en el capítulo II se hace el desarrollo del marco teórico; **c)** en el capítulo III nos ocupamos de los resultados de la investigación; **d)** en el capítulo IV se realiza el análisis y discusión de los resultados, con la debida demostración de la hipótesis; y finalmente se detallarán las conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO I:

ANÁLISIS DEL OBJETO DE

ESTUDIO

I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:

En principio debemos indicar que el acceso a la justicia (como una manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva) constituye uno de los pilares fundamentales de un Estado Constitucional de Derecho; como tal, el derecho de acceso a la justicia obliga a los Estados a poner a disposición de sus ciudadanos mecanismos de la tutela efectiva para la defensa de sus derechos y solución de sus conflictos de relevancia jurídica, como puede ser a través de recursos judiciales accesibles y adecuados.

Si bien nuestro ordenamiento jurídico contempla mecanismos legales para dar cumplimiento a las normas internacionales y constitucionales, a través de un debido proceso y/o procedimiento, revestido de las garantías mínimas y necesarias como lo es el derecho a la tutela, a la contradicción, a la pluralidad de instancia, entre otros; sin embargo, estos resultarían ser insuficientes, pues existe un gran porcentaje de la población que encuentra distinción en el propio ordenamiento jurídico, lo cual genera un malestar, que puede verse plasmado en insatisfacción de los justiciables; quienes, a pesar de resultar vencidos en el proceso, seguramente esperan obtener una respuesta satisfactoria por parte de la administración de justicia (Poder Judicial); es decir, sería necesario que este aparato del Estado les otorgue los mecanismos suficientes para quedar conformes con las decisiones del órgano jurisdiccional, como por

ejemplo, que sus casos sean revisados por el mayor número de instancias que nuestro ordenamiento jurídico procesal contempla.

De esta manera el Estado estaría cumpliendo con efectivizar uno de los servicios primordiales en la vida conflictiva de la población en general, que de una u otra manera se ven implicadas en sendos procesos judiciales, nos referimos a un servicio de administración de justicia efectiva.

De igual manera, es importante resaltar que lo indicado, no significa que el Estado conceda herramientas legales que tengan como resultado ganadoras a ambas partes procesales, pues lógicamente ello es jurídicamente casi imposible, dado que inevitablemente habrá una parte vencida; sin embargo, lo que se puede exigir al Estado es que brinde respuestas que a ambas partes mantenga satisfechas.

Solo así encuentra justificación ese pacto social que alguna vez aconteció (obviamente se trata de una ficción jurídica, pues en el plano real no sucedió) entre el pueblo y el Estado, a través del cual el primero concedió al segundo el poder para que este último lo gobierne y de solución a sus necesidades elementales, dentro de las cuales encontramos a una administración de justicia adecuada.

En esta senda, cada decisión del Estado (nos referimos al Poder Judicial) debe ser la más satisfactoria para los justiciables, para lograr que sientan que sus conflictos han sido resueltos de acuerdo a derecho y que se le ha dado la razón en juicio a la parte que le corresponde;

entonces, la estructura procesal para el conocimiento de los litigios debe ser diseñada con dicho propósito, de tal manera que la comunidad tenga la seguridad y tranquilidad de que sus derechos serán garantizados en un proceso justo.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico los procesos que se inician en juzgados especializados o mixtos, tienen la posibilidad de ser revisados no sólo por una segunda instancia, sino que inclusive pueden ser revisados de manera extraordinaria por la Corte Suprema de Justicia, mediante el recurso de casación contemplado en los artículos 384° y siguientes del Código Procesal Civil. No obstante, en cuanto a los casos iniciados en los juzgados de paz letrado, su revisión se agota con la decisión de un órgano de segunda instancia (juzgado especializado o mixto), existiendo de ese modo un tratamiento diferenciado y desigual para los justiciables, escenario que *a priori* se detecta iría contra la igualdad que pregonan nuestra Constitución y normas infraconstitucionales. Esta situación genera incertidumbre en los justiciables debido a que, a diferencia del caso anterior, sólo tienen dos tesis, la del juzgado de paz y la del juzgado especializado o mixto; esto es, no tienen ese tercer mecanismo (recurso extraordinario) que defina cuál de las dos anteriores es la correcta.

Si bien es verdad, la doble instancia en los procesos iniciados en juzgados de paz letrado estaría siendo garantizada con la revisión

efectuado por el juez especializado o mixto, lo es también que en la realidad sería necesario la revisión por parte de un tercer órgano jurisdiccional, así como ocurre en el caso descrito anteriormente, ofreciendo a todos por igual los mismos mecanismos y herramientas en la solución del conflicto e incertidumbre legal.

La casuística judicial peruana nos ha enseñado que de por sí existen sendas contradicciones en las decisiones jurisdiccionales de las salas de la Corte Suprema de Justicia (que actúan como instancia extraordinaria revisando recursos de casaciones), de las salas de las Cortes Superiores (en su condición de colegiado de segunda instancia) y dentro de estas últimas los juzgados especializados (cuando intervienen también como segunda instancia), por tanto, sería razonable que por lo menos en los procesos iniciados en juzgados de paz letrado concluyan su tramitación con un pronunciamiento de un tercero (sala superior), claro está no mediante recurso de casación pero sí con algún mecanismo o recurso similar, con tal medida los justiciables sentirán menos desazón de la administración de justicia y a la par se generaría predictibilidad de las resoluciones judiciales emitidas por los jueces de paz letrado.

Este razonamiento no iría contra el ordenamiento jurídico, antes bien, se encontraría dentro de los parámetros que prevé nuestra constitución política, pues en ella no se prohíbe la existencia de una instancia extraordinaria para el caso que estamos planteando, por el contrario nos habilita a contar con este tercer mecanismo de revisión, en tanto, solo

dispone como uno de los principios-derechos de la función jurisdiccional, la pluralidad de instancia y no la doble instancia.

Siguiendo con este derrotero, nadie encontraría satisfacción plena si únicamente recibiría dos respuestas a sus conflictos, un tercer punto de vista sería lo idóneo para definir cuál de las dos decisiones anteriores es la que se ajusta a derecho, recuérdese que en los procesos tramitados ante un juzgado de paz letrado igualmente se están discutiendo derechos con trascendencia legal y constitucional.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Debe regularse un medio impugnatorio extraordinario para que la Sala Superior del Distrito Judicial respectivo revise los procesos iniciados en los Juzgados de Paz Letrados, en idéntica función al recurso de casación que procede cuando el proceso se inicia en juzgados especializados?

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.

1.4.1. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica desde dos planos: una dimensión práctica y otra, jurídica. En cuanto a la primera, por cuanto analizando el caso sujeto a investigación se puede señalar que es evidente que los derechos que se discuten en un proceso tramitado ante un juzgado de paz letrado no tienen menos relevancia jurídica que los debatidos en los caso presentados ante un juzgado especializado y/o mixto, dado que en los primeros también está en juego o en riesgo de naturaleza

constitucional, como por ejemplo, la propiedad, derechos laborales, asuntos de familia, etc.; por tanto merecen ser resguardados en la misma medida que los derechos ventilados en los juzgado especializados y/o mixtos, brindando un examen o análisis por este tercer órgano revisor; en tal sentido, con el presente trabajo se pretende dar solución o brindar esa garantía a los justiciables desde el mundo real, no solo jurídico o ideal, de tal modo que puedan apreciar objetivamente la satisfacción de sus derechos aunque no resulten ser ganadoras.

Desde la segunda perspectiva (dimensión jurídica), debido a que, la actual normatividad legal referida a la sustanciación de los procesos judiciales en el tema de revisión por instancias superiores no guardan relación ni semejanza entre todos los casos posibles lo que hace entrever una contravención al derecho a la igualdad.

1.4.2. IMPORTANCIA

El presente trabajo tiene el carácter de relevante en la medida de que, se pretende brindar una alternativa para lograr un trato igualitario a los justiciables, entre las pretensiones iniciadas en juzgados especializados o mixtos y los sustanciados ante juzgados de paz letrado, en el entendido de que lo justo y razonable sería habilitar legalmente esa posibilidad recursiva en todos los casos, ello por motivos de unificación y predictibilidad de criterios por lo menos en cada distrito judicial, garantizando la seguridad jurídica; lo que, de antemano generaría no

solo una configuración integral del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (en sus diversas manifestaciones) sino también, una satisfacción en los justiciables y una aceptación a la labor del aparato judicial.

Del mismo modo, resulta de suma importancia este trabajo en la medida de que a su finalización, se propondrá un cambio o adición jurídica a la codificación legal, a fin de eliminar esa sugerente desigualdad (sin justificación razonable) que, inicialmente, existe en la sustanciación de los procesos judiciales (juzgado de paz letrado y juzgados especializados) cuyo alcance es a nivel nacional; vale decir, se busca proporcionar una fórmula legal positivizada de aplicación y observancia obligatoria por parte de los operadores judiciales, y que además, resulte ser compatible con el texto de la norma constitucional.

Asimismo, al término de la investigación, y por ser nuestra preocupación, propondremos un diseño legal a fin de eliminar esa limitación del derecho a la igualdad. De lo que se advierte una justificación práctica, en tanto se busca que el acceso a la justicia en procesos judiciales iniciados en juzgados de paz letrado tengan las mismas posibilidades y garantías que un proceso iniciado en un juzgado especializado y/o mixto; y, jurídica, por cuanto, elaboraremos un marco legal de alcance nacional para evitar esa limitación.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. GENERAL

Determinar si la no regulación de un medio impugnatorio extraordinario, para que la Sala Superior respectiva revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, vulnera el derecho a la igualdad, en relación a la posibilidad que se tiene cuando –vía casación- se puede controlar un proceso originado en un Juzgado Especializado y/o mixto.

1.5.2. ESPECIFICOS

- Analizar el contenido de los Derechos Fundamentales a la igualdad, tutela jurisdiccional efectiva y pluralidad de instancia.
- Explicar los alcances de los principios de seguridad jurídica y de justicia.
- Analizar la jurisprudencia y legislación del Derecho Comparado sobre los Derechos Fundamentales a la igualdad, tutela jurisdiccional efectiva y pluralidad de instancia.
- Diseñar una propuesta legislativa sobre la denominación y regulación del medio impugnatorio extraordinario en casos de los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrados.

1.6. HIPOTESIS Y VARIABLES

1.6.1. HIPOTESIS:

Hi: La no regulación de un medio impugnatorio extraordinario, para que la Sala Superior respectiva revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, vulnera el derecho a la igualdad, en relación a la posibilidad que se tiene cuando –vía casación- se puede controlar un proceso originado en un Juzgado Especializado.

Ho: La no regulación de un medio impugnatorio extraordinario, para que la Sala Superior respectiva revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, no vulnera el derecho a la igualdad, en relación a la posibilidad que se tiene cuando –vía casación- se puede controlar un proceso originado en un Juzgado Especializado.

Ha: La no regulación de un medio impugnatorio extraordinario, para que la Sala Superior respectiva revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, podría vulnerar el derecho a la igualdad, en relación a la posibilidad que se tiene cuando –vía casación- se puede controlar un proceso originado en un Juzgado Especializado.

1.6.2. VARIABLES

1.6.2.1. INDEPENDIENTE

Limitaciones al derecho de impugnación extraordinaria en los procesos iniciados en el juzgado de paz letrado.

1.6.2.2. DEPENDIENTE

Vulneración del derecho a la igualdad con relación a los procesos iniciados en los Juzgados Especializados y/ mixtos.

1.7. MARCO METODOLOGICO

1.7.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS

La abstracción científica se realizara siguiendo las reglas del método científico de tal manera que el objeto investigado será analizado en su relación causa y efecto, a fin de determinar qué es lo viene originando el problema, y de este modo se descubrirá las leyes que gobiernan el problema cuyo manejo nos permite plantear alternativas a efectos de superar la problemática.

Por otro lado, teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro objeto de estudio, para la obtención de mejores resultados en la investigación, se ha hará uso de una combinación de métodos, tal como sigue:

- **Métodos generales:** Utilizaremos el siguiente método:

- **Analítico:** Mediante este método estudiaremos cada figura jurídica, disgregándola para llegar a conocer su verdadera naturaleza.
- **Deductivo:** A través de este método podremos estudiar conceptos generales para luego aplicarlos al caso concreto.
- **Sintético:** Con este método vamos a llegar a obtener un consenso entre tantos conceptos, logrando obtener un concepto óptimo para la investigación.
- **Métodos específicos:** Utilizaremos los siguientes métodos:
 - Exegético:** Nos servirá para estudiar la norma en sí, para comprender su sentido.
 - Sistemático:** Con este método podremos tener una mejor comprensión de la norma, no de manera aislada, sino, en consonancia con todo el ordenamiento jurídico.
 - Argumentativo:** Nos servirá para explicar y entender con lógica nuestras propuestas

1.7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

1.7.2.1. POBLACIÓN:

En este caso, la población estará compuesta por los sendos procesos que se tramitan día a día en los juzgados de paz letrado así como en los juzgados especializados y/o mixtos del Distrito Judicial de

Cajamarca, indistintamente su materia. Asimismo, se ha considerado como población a los operadores judiciales (jueces, auxiliar jurisdiccional), abogados y litigantes que desarrollan funciones en la ciudad de Cajamarca.

1.7.2.2. MUESTRA

La muestra que se recogió respecto a los expedientes judiciales fue la de criterio intencional, un proceso por materia; asimismo, en cuanto a las encuestas se recogió los datos de aquellos que cumplieran el perfil de ser operador judicial o que de modo alguno tenga relación con la administración de justicia, así se encuestó a 25 magistrados (jueces y fiscales), 25 servidores jurisdiccionales (secretarios, asistentes, técnicos), 25 abogados (de oficio y libres) y 25 litigantes.

1.7.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1.7.3.1. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS:

1.7.3.2. ANALISIS DOCUMENTAL:

- Para localizar las fuentes utilizaremos las bibliográficas (Libro: por autor, por tema; artículo periodístico y artículo de reseña de libro).
- Para recoger el dato de fuentes documentales utilizaremos indistintamente las documentales (textuales, resumen, síntesis).
- Se utilizará fichas de trabajo de campo para registrar las observaciones y vaciar los datos de las entrevistas.

1.7.3.3. OBSERVACION:

Será la observación directa no participante, porque el investigador no es parte del problema.

1.7.3.4. ENTREVISTA:

El tema es conocido por especialistas y personas involucradas con el problema, y una forma de conocer y obtener información es a través de un dialogo estructurado.

1.7.3.5. ENCUESTA:

Se recogerá información dispersa por medio de una encuesta y cuyos datos van hacer cuantificados siguiendo los procedimientos estadísticos. No es un tema que deba solucionarse porque los encuestados lo decidan sino que se trata de un asunto de puro derecho a ser estudiado desde el plano teórico.

1.7.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS:

- a) En la recolección de datos se utiliza: La ficha, pueden ser Bibliográficas y de Investigación.
- b) En la observación se utiliza la guía de observación: es la observación del investigador.
- c) En la entrevista se utiliza la guía de entrevista: son las preguntas del entrevistador.

- d) En la encuesta se utiliza el cuestionario.

1.7.5. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS:

- **Crítica.-** Consiste en verificar si el dato tiene deficiencia en la toma de datos, significa evaluar los datos, de tal manera que pueda rectificarse los datos mal tomados.
- **Discriminación de datos.-** Consiste en separar los datos confiables y separar los datos que no los son, y que a nuestro juicio resultan útiles para nuestra investigación.
- **Tabulación de datos.-** Consiste en dar un código a cada dato.
- **Análisis de datos.-** Se realiza mediante abstracción científica aplicando el método, en función a la ubicación del dato en el informe final.

1.7.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

1.9.1. TRABAJO DE CAMPO: Consistirá en la aplicación de la guía de observación y guía de entrevista conforme al cuestionario, de igual forma se recogerá en fichas información documental.

1.9.2. TRABAJO DE GABINETE: Los resultados obtenidos por medio de la observación y la entrevista serán vaciados en fichas de investigación, también se va a procesar el resultado del cuestionario y la encuesta siguiendo los procedimientos estadísticos, de igual

forma, los libros, revistas y periódicos que tengan relación con el tema investigado serán fichados, ya sean fichas textuales, resumen y de síntesis.

CAPITULO II:

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

No se han encontrado investigaciones similares y con el mismo propósito del presente trabajo, por lo menos hasta la fecha en que se inicia esta investigación; aunque existen tesis sobre temas de pluralidad de instancia y recurso extraordinario de casación, pero que se diferencian de este trabajo en cuanto al enfoque que se le ha da al presente trabajo.

Por ejemplo, se ha encontrado un trabajo de investigación relacionado a los recursos de apelación y casación civil en el estado constitucional: el cual aborda la problemática derivada de los recursos existentes en el proceso civil y su forma de sustanciación, que dista mucho de las disposiciones constitucionales, específicamente en lo que tiene que ver a los derechos de tutela judicial, debido proceso, defensa y seguridad jurídica.¹

Por otro lado, existe la investigación del análisis económico de la doble instancia en el proceso civil peruano, el mismo que trata sobre una investigación que busca desterrar la institución jurídica de la doble instancia de nuestro ordenamiento jurídico, en mérito al costo beneficio que se obtiene².

Del mismo modo, se ha revisado la tesis denominada “La Racionalidad Funcional de la Garantía de la Doble Instancia”, la misma que indaga

¹ SALINAS PACHECO, Jorge Darío (2013), “Los recursos de apelación y casación en el estado de derecho constitucional: la constitucionalidad del proceso civil”.

²NÚÑEZ DEL PRADO CHAVES, Fabio (2015), “*Desmitificando Mitos: Análisis Económico De La Doble Instancia En El Proceso Civil Peruano*”, PUCP.

sobre la racionalidad funcional de la doble instancia dentro de una perspectiva procesal diseñada bajo las exigencias del Estado Constitucional de Derecho. Desde tal perspectiva se pretende buscar tanto más allá de la letra de la Constitución como más acá de los lejanos orígenes históricos de la doble instancia y preguntarnos sobre la funcionalidad de la doble instancia hoy.³

Sin embargo, el presente trabajo, a diferencia de cualquier otro tiene el carácter de relevante en la medida de que, se pretende brindar una alternativa para lograr un trato igualitario a los justiciables (respecto a los procesos que inician en los juzgados de paz letrado y juzgado especializado y/o mixtos), obteniéndose de ese modo la unificación y predictibilidad de criterios por lo menos en cada distrito judicial, garantizando la seguridad jurídica; lo que, de antemano generaría no solo una configuración integral del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (en sus diversas manifestaciones), sino, también, una satisfacción en los justiciables y una aceptación a la labor del aparato judicial.

2.2. BASE TEÓRICA

2.2.1. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

A. Unidad del Ordenamiento.

³ TUESTA SILVA, Wilder (2010), *“La Racionalidad Funcional de la Garantía de la Doble Instancia”*

En todo ordenamiento digno de tal nombre tiene que haber un punto de referencia último de todas las normas, tiene que haber un *poder originario* por encima del cual no existe otro y en el que todas las normas tienen que encontrar, directa o indirectamente, su justificación. Si el ordenamiento jurídico del Estado fuera un ordenamiento simple, en el que el número de normas fuera reducido y únicamente hubiera una fuente para la producción de las mismas, no se plantearía ningún tipo de problema. La unidad del ordenamiento se impondría de manera inmediata sin más. Pero los ordenamientos estatales son siempre ordenamientos extraordinariamente complejos, es decir, ordenamientos en los que coexisten infinidad de normas y en los que las fuentes del derecho son múltiples. En consecuencia, la unidad no se presenta como algo evidente, sino todo lo contrario, como algo que debe ser explicado. Pues la complejidad no excluye la unidad, pero exige que se la justifique y demuestre. Con esto rozamos uno de los temas básicos del ordenamiento jurídico en general y del Derecho Constitucional en particular: el tema de las fuentes del derecho y su forma de organización en el ordenamiento estatal. Por fuentes del derecho se entiende aquellos hechos o actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas. Es decir, el ordenamiento no sólo regula el comportamiento de las personas, sino que regula además -y ésta es la esencia del Derecho Constitucional, unánimemente reconocida –*el modo en que se deben producir las normas jurídicas*. Dicho en otras palabras: regula la propia producción normativa.

En los ordenamientos estatales hay un principio que es el que permite llegar a tal explicación: *el principio de jerarquía*. Las normas de un ordenamiento estatal no están todas en el mismo plano, sino que las normas forman una *pirámide*, en la que cada una ocupa un lugar igual al de otras, subordinada a otras y supra ordenada a otras. Todas ellas, además, tienen que estar vinculadas a una *norma fundamental o suprema*, que constituye el punto de partida de todo el ordenamiento. Todo ordenamiento jurídico propiamente dicho tiene una norma fundamental que da unidad a todas las demás. Por numerosas que sean las fuentes del derecho en un ordenamiento complejo, este ordenamiento constituye una unidad por el hecho de que, directa o indirectamente, todas las fuentes del derecho pueden ser referidas a una norma única. El ordenamiento jurídico tiene, pues, una *estructura jerárquica*, constituye una pirámide en la que las normas inferiores van encontrando su fundamento en las normas superiores hasta llegar a la norma suprema o fundamental⁴.

B. El Ordenamiento Jurídico como un Sistema Coherente

De algo se dice que es un sistema o unidad sistemática cuando es una totalidad ordenada, en la que no existen elementos incompatibles entre sí. En consecuencia, las normas jurídicas de un ordenamiento estatal constituirán un sistema, si no existen normas incompatibles en su seno. Ahora bien, los ordenamientos jurídicos estatales no son solamente

⁴⁴ PÉREZ ROYO, Javier. 2000, Pág. 51-53

ordenamientos complejos sino además ordenamientos dinámicos, en los que se están produciendo normas jurídicas constantemente y por muchas fuentes diversas. En consecuencia, en un tal ordenamiento es posible que, por la causa que sea que aquí no interesa, coexistan normas que son incompatibles. Cuando esto ocurre, se habla de *antinomia jurídica*. Por tal hay que entender aquella situación que se da entre dos normas incompatibles que pertenecen al mismo ordenamiento y tienen el mismo ámbito de validez. No hay ningún ordenamiento jurídico estatal que pueda evitar *a priori* la posibilidad de antinomias jurídicas. Por ello, si quiere ser una unidad sistemática, tiene que disponer de *criterios* para resolver esas antinomias *a posteriori*. Todos los ordenamientos estatales disponen de ellos. Son los tres siguientes: 1º El criterio jerárquico. 2º El criterio cronológico. 3º El criterio de especialidad. Con esto ya sabemos por qué el Derecho del estado es un sistema complejo y dinámico, pero coherente *o de entrada*, porque no hay antinomias, *o a la salida*, porque dispone de criterios para resolverlas⁵.

c. El Ordenamiento Jurídico como un Sistema Completo

Un ordenamiento es un sistema completo cuando un Juez puede encontrar en él una norma para decidir cualquier caso que se someta a su consideración o, mejor dicho, cuando no hay caso que no pueda ser resuelto con base en una norma extraída del sistema. Como puede

⁵ PÉREZ ROYO, Javier. 2000, Pág. 54-55

verse, la diferencia con respecto a la característica de coherencia del sistema que acabamos de ver es clara. La coherencia del sistema significaba la exclusión de toda situación en la que pertenecen al sistema dos normas que se contradicen. El carácter completo o principio de totalidad del ordenamiento significa la exclusión de toda situación en la que no pertenecen al sistema ninguna de las dos normas. O por decirlo con palabras de Carnelutti, un sistema puede ser incompleto por exceso o por defecto, por exuberancia o por deficiencias. En el primer caso nos encontramos ante un sistema con antinomias. En el segundo, ante un sistema con lagunas. El método para resolver el problema es en el primer caso la purga del ordenamiento, en el segundo, la integración. Junto a ésta, hay otra diferencia entre el principio de coherencia y el de totalidad o carácter completo del ordenamiento. Es la siguiente: el principio de coherencia es una exigencia del ordenamiento jurídico, pero no es una necesidad. Un ordenamiento puede existir con normas incompatibles en su seno. Basta con que disponga de criterios para resolver las antinomias. No necesita más. Por el contrario, el principio de totalidad o de carácter completo del ordenamiento es más que una exigencia, es una necesidad. Es una condición sin la cual el sistema en su conjunto no podría funcionar. Y es una condición necesaria, porque todos los ordenamientos estatales operan como base en las dos siguientes premisas:

1ª Que un juez tiene que dar respuesta a todas las controversias que se sometan a su consideración, sin que, en ningún caso, pueda inhibirse y

no fallar pretextando que no encuentra una norma en el ordenamiento con base en la cual tomar una decisión.

2ª Que el juez tiene que tomar una decisión con base en una norma que pertenezca al ordenamiento. El juez no puede “inventar” la norma. Tiene que “encontrarla” en el ordenamiento.

Ahora bien, ¿Cuáles son las técnicas que utiliza el ordenamiento jurídico para colmar las lagunas que puedan producirse? O formulado de manera más precisa: puesto que se da por supuesto que el ordenamiento no tolera la existencia de lagunas, ¿de qué técnica hace uso el ordenamiento para evitar que aparezca una laguna? Tras lo expuesto, creo que estará claro que se tiene que tratar de técnicas de *auto integración*, es decir, inmanentes al propio ordenamiento. Son dos:

1ª La *analogía*. Se entiende aquel procedimiento por el cual se atribuye a un caso no regulado la misma disciplina de un caso similar. Es un procedimiento interpretativo típico del ordenamiento estatal de una gran importancia práctica. A través de él se explica la tendencia a la expansión del ordenamiento más allá de sus propias presiones expresas.

2ª Los *principio generales del derecho* no son más que las normas fundamentales o generalísimas del sistema, a partir de las cuales se puede deducir la solución de un problema no regulado expresamente en

las diferentes normas que coexisten en un momento dado en el ordenamiento jurídico⁶.

Estas tres notas son las que caracterizan al Derecho del estado en el sentido del Derecho producido por el Estado Constitucional. Al Estado en cuanto poder político, ordenado jurídicamente por la Constitución, corresponde un derecho unitario, coherente y completo, esto es, un ordenamiento jurídico⁷.

2.2.2. DERECHOS FUNDAMENTALES

2.2.2.1. DEFINICIÓN

No cabe duda que los derechos fundamentales constituyen el pilar y sustento de todo nuestro ordenamiento jurídico, ellos le dan fuerza y vigor, determinando su estructura y alcance; son por tanto, atributos inherentes a la naturaleza de la persona humana, cuyo reconocimiento puede ser expreso o estar implícito en alguna cláusula constitucional que pueden derivarse de la calidad de dignidad de la persona, encontrando respaldo jurídico tanto nacional como supranacional. Si bien la doctrina no encuentra un punto común acerca de una definición certera sobre los derechos fundamentales, lo importante es entender su trascendencia en el quehacer diario de la sociedad, y vivir constantemente observándolos; de allí que, BUSTAMANTE ALARCÓN, con justa razón señala: “En efecto, lo importante no es dar la definición absoluta y definitiva de los

⁶ PÉREZ ROYO, Javier. 2000, Pág. 56-57.

⁷ PÉREZ ROYO, Javier. 2000, Pág. 56-57.

derechos fundamentales, de tal manera que cubran todos los ámbitos de su existencia, sino de tener una concepción abierta que permita la recepción de nuevos derechos, conforme a las necesidades de los tiempos, así como el aseguramiento de su eficacia y el desarrollo de su contenido. Se trata de elaborar una definición que rescate los principales atributos que distinguen a este tipo de derechos, con el propósito de evitar su uso arbitrario o contradictorio en un mismo sistema y, sobre todo, que reivindique su utilidad social, sea para el caso concreto, para un momento histórico determinado o para proyectar un sistema jurídico que sea parte básica de la estructura de una mejor sociedad.”⁸

GUZMÁN NAPURÍ⁹ señala que: *“Los derechos fundamentales son categorías básicas del ordenamiento constitucional. En primer lugar, justifica dicho ordenamiento, puesto que es necesario asegurar que el poder del Estado no se salga de cause, vulnerando dichos derechos, lo cual solo ocurre en un Estado de Derecho.”* Por su lado, CEA EGAÑA¹⁰ nos ilustra que los derechos fundamentales *“(…) son aquellos derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades que, desde la concepción, fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la naturaleza singularísima del titular de esa dignidad. Tales atributos, facultades o derechos públicos subjetivos son, y deben ser siempre, reconocidos y*

⁸ Bustamante Alarcón, R., 2015, *Derechos Fundamentales y Proceso Justo*, Lima, Perú: Ara Editores.

⁹ Guzmán Napurí, C., 2015, *La Constitución Política: Un Análisis Funcional*, Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

¹⁰ Autor citado por Rosas Alcántara, J., 2015, *El Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en sus Conceptos Claves*, Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo al titular exigir su cumplimiento con los demás deberes correlativos.”

Por su lado, PÉREZ LUÑO¹¹, refiriéndose a los derechos humanos, sostiene que: *“Son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”*. Sobre esta definición PAZO PINEDA¹² resalta algunos puntos relevantes, relacionados por ejemplo, al contenido de los derechos fundamentales, la satisfacción de necesidades elementales pero no superfluas, sino más bien en prevalencia de la dignidad humana, así como su trascendencia territorial; pues precisa: *“Esta definición recoge algunas características distintivas. En primer lugar, menciona que el contenido de los derechos fundamentales no es indeterminado en el ámbito temporal. En efecto, esta definición pretende demostrar que la garantía o protección brindada por estos derechos depende de las necesidades históricas de una sociedad determinada. Pero, al mismo tiempo, no se trataría de cualquier necesidad, sino que debería ser una que, motivada por la importancia del reconocimiento de la persona humana, impulse el desarrollo de su dignidad. Finalmente, precisa que deben ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, lo cual implica que los Estados pueden reconocer estos*

¹¹ Citado por Pazo Pineda, O. A., 2014, *Los Derechos Fundamentales y el Tribunal Constitucional*, Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

¹² Pazo Pineda, O. A., *Op. Cit.*

derechos ya sea en sus textos constitucionales o ya sea a través de la ratificación de tratados internacionales.”

En tal sentido encontramos una definición satisfactoria en el siguiente sentido: “...se podría definir el derecho fundamental como aquel ámbito de la personalidad y/o de la actuación humana que la Constitución reconoce como digno de protección, y al que otorga, en consecuencia, una protección de alto nivel, consistente al menos en que el respeto de dicho ámbito se configura en un principio básico del ordenamiento, legislador, y el particular ve reconocida una facultad procesal a que dicho ámbito le sea protegido judicialmente. Se desprende de esta definición que los derechos fundamentales son primariamente bienes jurídicos, y que las facultades de las que se disponga el titular para lograr la protección de dichos bienes, siendo importantes, ocupan un papel subordinado, en tanto su concreción dimana de los perfiles que se atribuya a tales bienes.

De todo lo indicado podemos identificar el rol importante que la dignidad desempeña en los derechos fundamentales, pues ella da origen a una diversidad de derechos fundamentales, que pueden estar contenidos explícitamente en un medio físico o no; inclusive, la dignidad humana tiene protección –no solo en el ordenamiento nacional- sino básicamente en el ámbito internacional; es por ello que se rescata el impacto que nace de la dignidad humana (fuente de origen de los derechos fundamentales) y que en su virtud se exige la protección de todos estos derechos ante una eventual vulneración por parte de los particulares (eficacia horizontal

de los derechos fundamentales) o del propio Estado (eficacia vertical de los derechos fundamentales).

Sobre el particular es preciso hacer mención a algunos instrumentos supranacionales como: **i) El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos** que establece en su primer considerado: “*La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la **dignidad***”; y en su quinto considerando, “*Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en la **dignidad** y el valor de la persona*”; **ii) Convención Americana de Derechos Humanos**, que en su artículo 11.1 preceptúa: “*Toda persona tiene derecho...al reconocimiento de su **dignidad***”; **iii) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre**, que dispone en su considerando 1°, “*Los pueblos americanos han **dignificado la persona humana***”; y en su considerando 2°, “*Los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los **atributos de la persona humana***”; **iv) Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**, en cuyo considerando 2° se establece que los derechos humanos emanan de la **dignidad** inherente de la persona humana.

Así pues, puede considerarse que los derechos fundamentales son atributos subjetivos reconocidos por la constitución y a la vez reconocidos universalmente, los cuales derivan de tres valores superiores: la dignidad, la libertad y la igualdad, contando además como

una faz objetiva o institucional, en la medida que el Estado tiene la obligación de respetarlos y promover las condiciones necesarias para su plena vigencia y cabal ejercicio.

2.2.2.2. TEORÍAS SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El profesor de Derecho Constitucional César Landa Arroyo, desarrolla este tema de la siguiente manera:

-Teoría de los valores

El Estado se desarrolla en un proceso dinámico de integración nacional de una comunidad cultural de valores. Por ello, los derechos fundamentales están condicionados históricamente y otorgan legitimidad al ordenamiento jurídico positivo. En este sentido, se busca evitar los formalismos del positivismo jurídico, prescindiendo del texto literal de la norma jurídica a favor del contenido material, es decir que se busca el sentido esencial del derecho fundamental en cuestión y se relaciona o integra el derecho fundamental con la totalidad del orden de vida y los valores constitucionales vigentes. En tal sentido, los derechos fundamentales son concebidos como normas éticas objetivas, fiel expresión del orden valorativo de la sociedad, que se va expresando en normas legales y sentencias.

-Teoría institucional

A la luz del pensamiento institucional de los derechos fundamentales, es posible identificar el contenido esencial de los mismos, a partir de la idea

de la libertad como instituto, es decir como un dato objetivo que se realiza y despliega en la sociedad abierta; pero, que encuentra en los conceptos jurídicos diversos elementos que inciden directa o indirectamente en la formación, proceso y resultado de la norma constitucional.

En ese sentido, el contenido y los límites de los derechos fundamentales deben determinarse partiendo de la totalidad del sistema constitucional de los valores al que hace en su esencia, referencia todo derecho fundamental. Esto significa que el ejercicio de los derechos fundamentales sólo adquieren visos de realidad como libertades sociales, cuando el bien común como objetivo humano reclama de la acción del Estado acciones concretas. En ese sentido, “los derechos fundamentales no son únicamente algo dado, organizado, institucional, y de tal modo objetivados como *status*; sino que ellos en cuanto institutos, justamente a consecuencia del obrar humano devienen en realidad vital, y como tal se entiende el Derecho como género”.

En consecuencia, la ley en el sentido institucional, está orientada concretamente a la realización del objetivo de la libertad como instituto; es decir que, la garantía institucional de la libertad tiende a penetrar en la realidad que se halla detrás del concepto jurídico de libertad. En ese sentido, los derechos fundamentales son institutos, sólo cuando pueden ser efectivamente reivindicados por los titulares –cambiar el hecho por la norma-, es decir cuando son regla.

El rico desarrollo de la doctrina institucional de los derechos fundamentales ha dado lugar a dos subteorías institucionales: la teoría sistemática y la teoría multifuncional, pues al respecto sólo desarrollaremos la última por significar un aporte a nuestra investigación.

-Teoría multifuncional

Busca superar la unilateralidad de las distintas teorías sobre los derechos fundamentales, dada la pluralidad de fines y de intereses sociales que abarca el Estado Constitucional. Así las demandas para democratizar la sociedad sobre la base de la participación ciudadana, así como para cumplir con los objetivos del Estado social de derecho, delimitando la libertad con las fronteras de la igualdad, son factibles de realizar mediante la articulación práctica de las distintas funciones de los derechos fundamentales. Así, se puede decir que la diversidad de funciones constitucionales de los derechos fundamentales, está en relación directa con las funciones de la propia Constitución que la doctrina constitucional suiza ha aportado al desarrollo constitucional.

En ese sentido, se puede señalar que no sólo la Constitución, sino también los derechos fundamentales participan de las funciones: racionalizadora, ordenadora, estabilizadora, unificadora, controladora de poder; así como, del aseguramiento de la libertad, la autodeterminación y la protección jurídica de la persona, el establecimiento de la estructura organizativa básica del estado y del desarrollo de los contenidos materiales básicos del estado.

2.2.2.3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

Como nota introductoria mencionaremos que, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, declara en su preámbulo “que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho”. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre de 1969, establece en su preámbulo que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos”. En este mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra en su Preámbulo que “la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana”.

En ese sentido, esta filosofía se condice con la ideología de nuestra Constitución Política, que también fundamenta todo el sistema de

derechos y garantías en la dignidad de la persona humana; en torno a ello, cabe recordar algunos derechos que han sido tomados de estos instrumentos internacionales tenemos: el derecho a la vida, derecho de igualdad ante la ley, derecho a la inviolabilidad de domicilio, derecho a la educación, entre otros.

2.2.2.4. CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Todo derecho fundamental tiene un contenido jurídicamente determinado, el cual es inmodificable, en caso sea necesario llevar a cabo una regulación infraconstitucional para posibilitar su goce y ejercicio en la vida comunitaria. Esta nota sustancial de la norma hace que esta tenga en relación a las restantes una peculiaridad privativa y específica. En ese orden de ideas, el contenido esencial se convierte en la parte indispensable e indisponible que permite al titular del derecho a gozar de los atributos, facultades o beneficios que esta declara. Su afectación - a través de la actividad legislativa de desarrollo o reglamentación – conlleva a la transformación del derecho contenido en un precepto en otra categoría jurídica distinta; amén de generar la imposibilidad o dificultad extrema para hacer efectivo el goce de un derecho¹³.

En la STC N° 1417-2005-AA, fundamento jurídico 20 el máximo intérprete de la Constitución ha precisado: *“Tal como refiere Manuel*

¹³ García Toma, V., 2008, *Los Derechos Fundamentales en el Perú*, Lima, Perú: Jurista Editores.

Medina Guerrero, “en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales” (La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41)”.

Llegando a determinar que, todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho fundamental sólo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga incólume. Considerando luego, que la determinación del contenido esencial de los derechos fundamentales no puede efectuarse *a priori*, es decir, al margen de los principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes constitucionales, en el que adquiere participación medular el

principio-derecho de dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, todos los derechos fundamentales de la persona.

Así pues, el contenido esencial de los derechos fundamentales no solamente resalta por mostrarnos la parte sustancial de un derecho sino que también funciona como límite a las actuaciones de los poderes públicos que intenten vulnerarlos, cuando se presenta por ejemplo en labor legislativa. Es por ello que el contenido esencial "...constituye un pilar básico del neoconstitucionalismo, cuya característica más notable es el reconocimiento de que la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales representan el núcleo del bien común en una comunidad política, al cual debe orientarse de manera definitiva, y no meramente programática, toda la acción de los poderes públicos."

Siendo así, es innegable que el contenido esencial del que hablamos no puede estar sujeto a modificaciones ni alteraciones por el legislador, pues este contenido es el que le da vigencia funda su naturaleza jurídica. Pues bien, ese contenido de los derechos fundamentales se erige como un límite absoluto a la actuación de los poderes públicos, que nunca pueden vulnerar, limitar restringir los derechos, de esta limitación impuesta por los derechos fundamentales a poderes públicos es un efecto inmediato en nuestro ordenamiento jurídico.

2.2.2.5. FINALIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Los derechos fundamentales de la persona tienen como finalidad la protección unitaria e integral de la persona en cuanto es un ser que

posee dignidad. Es esta dignidad la que justifica y explica los derechos fundamentales de la persona y le sirve de fundamento. De ahí que el artículo 3 de la Constitución establezca que los derechos de la persona no se circunscriben a solo aquellos expresamente normados por el ordenamiento jurídico sino que su protección alcanza a aquellos que, sin encontrarse en esta situación, "se fundan en la dignidad del hombre...".

2.2.2.6. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Entre las principales características de los derechos fundamentales podemos citar su fuerza normativa, su posición preferente en el conjunto ordinamental, su carácter inspirador y director de la producción, interpretación y aplicación de las normas jurídicas y demás actos jurídicos en general, así como la especial protección de la que son objeto, tanto a nivel normativo (por ejemplo, a través de las normas que explícitamente dan cuenta de su fuerza vinculante), jurisdiccional (como los procesos constitucionales de habeas corpus y amparo) e institucional (a través de organismos especiales como la Defensoría del Pueblo)¹⁴.

2.2.2.7. EL DOBLE CARÁCTER DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Originariamente los derechos fundamentales aparecieron como derechos públicos subjetivos del individuo, derechos de defensa y de libertad frente al

¹⁴ Bustamante Alarcón, R., 2015, *Derechos Fundamentales y Proceso Justo*, Lima, Perú: Ara Editores.

Estado que aseguraban su status jurídico en tanto no podían ser vulnerados por este. Se consideraba entonces que los derechos fundamentales no tenían razón de ser en las relaciones entre particulares y que no implicaban obligación alguna para el Estado a no ser aquella que le imponía abstenerse de realizar actos contrarios a su eficacia o contenido. Posteriormente, el reconocimiento de la supremacía de la dignidad humana (que constituye su último fundamento) así como el desarrollo y complejidad de las relaciones sociales (por factores económicos, políticos, culturales, tecnológicos, etc.) llevaron a la doctrina, a los tribunales constitucionales y a las cartas fundamentales a otorgar plena efectividad a los derechos fundamentales reconociéndolos como elementos esenciales del ordenamiento jurídico político, es decir, como elementos objetivos con propia fuerza normativa de la mayor jerarquía, que irradian su eficacia no sólo a las relaciones individuo-Estado, sino a las diversas esferas y relaciones de la vida social. Tal reconocimiento permitió advertir que los derechos fundamentales presentan un doble carácter, por un lado son derechos subjetivos de los sujetos de derecho en general (según el derecho fundamental de que se trate) que aseguran su status jurídico y la libertad en todos los ámbitos de su existencia, y, por otro lado, son elementos objetivos básicos del ordenamiento jurídico político por lo que cuentan con propia fuerza normativa de la mayor jerarquía¹⁵.

Es así que puede considerarse a los derechos fundamentales, además de derechos subjetivos, como institutos que se realizan en la realidad social a

¹⁵ Bustamante Alarcón, R., *Op. Cit.*

través de una serie de conjuntos normativos que desarrollan o configuran su contenido.

Los derechos fundamentales no sólo son **derechos subjetivos** de los sujetos de derecho en general, sino también **elementos objetivos** básicos del ordenamiento jurídico político por lo que cuentan con propia fuerza normativa de la mayor jerarquía. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español ha señalado: "En primer lugar, [dice el Tribunal], los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto esta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado Social de Derecho o el Estado Social y Democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución (art. 1,1)."¹⁶

El **carácter subjetivo** de los derechos fundamentales es el que atribuye a sus titulares el poder de ejercitarlos, exigir su respeto y su adecuada protección, así como el cumplimiento por parte del Estado y de los particulares -según corresponda- de aquellas prestaciones necesarias para su concreción efectiva. El **carácter objetivo**, por su parte, otorga a los derechos fundamentales propia fuerza normativa de la mayor jerarquía, lo cual implica que vinculan en forma directa e inmediata a los órganos y organismos del

¹⁶ Bustamante Alarcón, R., *Op. Cit.*

Estado, e incluso a los particulares, aunque no haya una pretensión concreta postulada por sus titulares que se relacione con su goce, su protección o su ejercicio.

De esta manera, los alcances e impacto de los derechos fundamentales no resultan ser un asunto zanjado de manera inmediata, por el contrario ellos pueden irradiar –atendiendo a su eficacia horizontal y vertical– distintos matices, *verbigracia*, nos muestran dos grandes impactos (esfera jurídico subjetiva y objetiva), sobre el particular PAZO PINEDA¹⁷ nos enseña que: “(...) estos derechos representan, por un lado, atribuciones subjetivas de unos sujetos, derechos determinados (dimensión subjetiva), mientras que, por el otro, refleja la existencia de una serie de principios y valores que deben inspirar la vida en sociedad (dimensión objetiva).” Siguiendo con el estudio, el autor en mención detalla el contenido de estas dimensiones señalando que la vertiente subjetiva del derecho fundamental, importa una doble obligación en manos de los Estados y de los particulares, por un lado, implica que el derecho fundamental se active con el propósito de exigir una abstención; sin embargo, también es viable demandar que primordialmente los Estados realicen determinadas prestaciones para dar cumplimiento a un determinado derecho fundamental. Mientras que, en relación al aspecto objetivo consigna que los derechos fundamentales no solo representan atributos que la persona pueda demandar ante un tribunal de justicia;

¹⁷ Pazo Pineda, O. A.: *Op. Cit.*

pues como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, los procesos constitucionales gozan de una dimensión objetiva orientada a preservar el orden constitucional como una suma de valores institucionales; y por tanto, en todos los procesos constitucionales subyace una defensa del orden público constitucional, es así que los derechos fundamentales ostentan autonomía por su configuración como principios y valores presentes en todo el ordenamiento jurídico.

Por su parte, el máximo intérprete de la Constitución establece que: *“La realización del Estado constitucional y democrático de derecho solo es posible a partir del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas. Es que estos derechos poseen un doble carácter: son, por un lado, **derechos subjetivos**; pero, por otro lado, también **instituciones objetivas** valorativas, lo cual merece toda la salvaguarda posible. En su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no solo protegen a las personas de las intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultan al ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas a su favor o defensa; es decir, este debe realizar todos los actos que sean necesarios a fin de garantizar la realización y eficacia plena de los derechos fundamentales. El carácter objetivo de dichos derechos radica en que ellos son elementos constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en tanto que comportan*

valores materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad democrática y el Estado constitucional.”¹⁸

En esa misma orientación, se ha indicado que los derechos fundamentales tienen una naturaleza dual, en tanto por un lado desarrollan una función en el plano subjetivo, actuando como garantía de la persona; y por otro, desarrolla una función en el plano objetivo, asumiendo una dimensión institucional a partir de la cual su contenido debe estar en función a la consecución de los fines y valores constitucionalmente proclamados.¹⁹

2.2.3. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

La historia nos remonta a la autotutela del derecho, donde el más fuerte hace valer sus razones ante el más débil, dando con el correr del tiempo nacimiento a la función jurisdiccional que ha evolucionado encontrándonos hoy con la llamada tutela jurisdiccional efectiva. Esta se manifiesta interviniendo el Estado por medio de los Jueces, con la función de ser un tercero imparcial en los conflictos intersubjetivos de intereses, dirigiendo un proceso y eventualmente una sentenciando. Al buscar sus orígenes encontramos en la obra de Víctor Ticona Postigo que la tutela jurisdiccional se ha positivizado en la Constitución Italiana de 1974 en su Artículo 24, posteriormente la encontramos en la Ley Fundamental de Bonn (Alemania) en 1949 en su artículo 19.4, y en la

¹⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 3330-2004-AA/TC, caso Ludesminio Loja Mori, fundamento jurídico 9.

¹⁹ Priori posada, G., 2009, *Los Fundamentos del Proceso Contencioso-Administrativo*, Lima, Perú: Ara Editores.

Constitución Española de 1978 en su artículo 24. Hoy en día también esta tutela se contempla en la Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 10, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 14 y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 inc.1.²⁰

Este derecho constitucional garantiza el acceso al órgano jurisdiccional para ser atendido en sus peticiones, bajo los parámetros de un debido proceso y logrando efectivizar lo plasmado en las resoluciones judiciales. Para PRIORI POSADA, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que tiene todo sujeto de derechos de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de una situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o amenazada. A través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en derecho, que debe tener vigencia en el ámbito de la realidad.

La tutela jurisdiccional es un derecho constitucional, derecho fundamental, derecho humano (y no un mero derecho procesal), que en un proceso le corresponde al que pretende (actor, demandante, etc). Se hace efectivo el otorgamiento de la tutela jurisdiccional cuando el Estado resuelve un conflicto de intereses a través del proceso; esta decisión debe ser el resultado de la concesión de garantías mínimas para las partes. Consideramos que al momento de resolver el conflicto de

²⁰ Melgarejo Allegretto, J., 2014, *Efectividad y Ejecución de las Resoluciones Judiciales*, Lima, Perú: Palestra Editores.

intereses y dar la oportunidad para la ejecución de la resolución final, es cuando el Estado convierte esta tutela en efectiva²¹.

La doctrina entiende este derecho como “(...) *aquel derecho fundamental que posibilita que el marco legal vigente otorgue efectiva tutela judicial a cualquier persona, por el mero hecho de serlo, frente a cualquier actuación proveniente de otra persona o entidad, bastando simplemente la afirmación de una necesidad de tutela jurídica, y la invocación de un derecho o interés efectivamente violado por una actuación de otra persona*”.²²

Así pues, debe señalarse que se trata de un derecho fundamental de índole procesal a través del cual toda persona (que alcanza también a las personas jurídicas) busca acceder a los órganos jurisdiccionales para lograr la satisfacción de sus pretensiones, o por lo menos para ser escuchado y atendido por el aparato estatal ante cualquier pedido con relevancia jurídica, esperando como contrapartida la solución al conflicto trasladado al campo procesal (finalidad concreta o inmediata) y lograr la convivencia en sociedad sobre los cánones de justicia (finalidad abstracta o mediata), sobre este tema el Tribunal Constitucional no ha sido indiferente y ha dejado sentado que: *“El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella deba ser atendida por un órgano*

²¹ Autor citado por Melgarejo Allegretto, J., *Op. Cit.*

²² Huapaya Tapia, R., 2006, *Tratado del Proceso Contencioso Administrativo*, Lima, Perú: Jurista Editores.

*jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Como tal, constituye un derecho, por decirlo de algún modo, "genérico" que se descompone en un conjunto de derechos específicos enumerados, principalmente, en el mencionado artículo, o deducidos implícitamente de él. (...)."*²³

Con mayor precisión, HUAPAYA TAPIA²⁴, pregona que el derecho en estudio comprende tres marcadas manifestaciones: acceso a la justicia, debido proceso y efectividad de lo decidido, pues considera que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es aquel derecho fundamental consistente en el derecho que tiene toda persona a que se le permita el acceso a los órganos jurisdiccionales, para proponer sus pretensiones, las que deben ser sustanciadas con todas las garantías y una vez culminado el proceso, se cumpla con lo resuelto. Es más, aclara el autor que estos tres aspectos del derecho citado constituyen su contenido esencial.

Ahondando con el estudio, se manifiesta que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho constitucional que ostenta todo sujeto de acceder a un órgano jurisdiccional para buscar tutela en defensa de una situación jurídica que se alega está siendo afectada a través de un proceso dotado de las garantías mínimas, luego del cual se expedirá una decisión amparada en el derecho, que desplegará efectos de cumplimiento obligatorio.

²³ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 004-2006-AI/TC, fundamento jurídico 22.

²⁴ Huapaya Tapia, R.: *Op. Cit.*

2.2.4. EL PRINCIPIO-DERECHO A UN DEBIDO PROCESO

En busca de tutela los justiciables en ejercicio de su derecho de acción, acuden al Poder Judicial planteando diversas pretensiones, y luego de haberse desencadenado una serie de actos, obtendrán respuesta; sin embargo, el proceso iniciado no puede limitarse al cumplimiento de ciertas formalidades y reglas frías, por el contrario debe regirse por determinados valores, principios y reglas esenciales que finalmente desemboquen en una decisión judicial conforme a los fines que se busca concretar. El proceso entendido como un mecanismo o instrumento capaz de dar solución a un conflicto de intereses, no puede iniciarse y desenvolverse de cualquier forma, sino que su esencia radica en que debe contener las garantías mínimas para garantizar los derechos de las partes y generar confianza en la sociedad en general. En ese sentido, nuestra Constitución ha establecido como uno de los principios-derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso (artículo 139° cardinal 3).

Asimismo, el debido proceso no solamente debe ser entendido como un derecho de naturaleza procesal, en el cual se respeten derechos y reglas procesales, sino que también alcanza una dimensión sustantiva, en mérito al cual el juzgador debe tomar sus decisiones dotadas de justicia y en defensa de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que: “[...] las dimensiones del debido proceso no solo responden a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos de connotación sustantiva o

material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc.) sino que también, y con mayor rigor, se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.).”²⁵

Y además ahora diciendo: “Ahora bien, el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido desde una perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede ser reducida al mero cumplimiento de las garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva –que está referida a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales–, sino también en una dimensión sustantiva –que protege los derechos fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona particular–. En consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales, sino también

²⁵ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 3075-2006-PA/TC, fundamento jurídico 4

cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario o persona no devienen en arbitrarios.”²⁶

Es así que, el debido proceso no solo opera como un instrumento, sino que fundamentalmente es una finalidad. En observancia a esto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8° consagra los lineamientos generales del debido proceso, donde se explica certeramente los derechos sustantivos y adjetivos. De esta manera, los jueces al ser depositarios del poder-deber de la jurisdicción, y en virtud a ella y en atención al principio o control de convencionalidad, deben respetar los principios que sintetizan los derechos humanos. Es decir, la realización de los derechos humanos y el tratamiento que al titular de ellos (el hombre) corresponde frente a la labor de los magistrados. Ello impediría la existencia de fallos que, no obstante respetar el debido procedo adjetivo –formal–, no observan el debido proceso sustantivo, deviniendo por tanto en “injustamente correctos”; lo que permite concluir que el debido proceso requiere tanto de un aspecto formal y uno sustancial que fundamenta una verdadera jurisdicción garantista.

Corresponde ahora puntualizar sobre el contenido de este derecho fundamental, el cual encierra al menos dos presupuestos claves, a saber: **a)** la controversia debe ser resuelta no con la fuerza sino a través de la razón implícita en el Derecho; y, **b)** el procedimiento mismo se

²⁶ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 3421-2005-PHC/TC, fundamento jurídico 5.

ajuste a una serie de exigencias destinadas a conseguir, en lo posible, una decisión justa.²⁷

2.2.4.1. DIMENSIONES DEL DEBIDO PROCESO

Otro asunto de gran relevancia versa sobre la doble dimensión del debido proceso (formal y material), la primera tiene que ver con las formalidades impuestas por la normatividad en la tramitación el proceso, y por ende, implica no pasar por alto las reglas preestablecidas (derecho de defensa, derecho a probar, instancia plural, cosa juzgada, etc.); mientras que, la segunda, está referida –independientemente si se han respetado las reglas o no- a que la decisión final se enmarque con tintes de razonabilidad y justicia; puesto que el hecho de haberse respetado el procedimiento nada asegura que la decisión final sea justa.

2.2.4.1.1. EL DEBIDO PROCESO FORMAL

En relación a este punto el Tribunal Constitucional ha sostenido de manera reiterada que esta dimensión significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos fundamentales²⁸; asimismo refiere que este derecho puede entenderse como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a

²⁷ *La Constitución Comentada*, 2013, Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

²⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 09518-2005-PHC/TC, fundamento jurídico 2.

fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.²⁹

2.2.4.1.2. DEBIDO PROCESO MATERIAL

La dimensión sustancial del debido proceso abre las puertas para un control no solo formal del proceso judicial, sino que incide y controla también los contenidos de la decisión en el marco del Estado Constitucional, es decir la posibilidad de la corrección no solo formal de la decisión judicial, sino también la razonabilidad y proporcionalidad con que debe actuar todo juez en el marco de la Constitución y las leyes. El tribunal constitucional ha expresado que a partir del debido proceso también es posible un control que no solo es procesal o formal, sino también material o sustancial, respecto de la actuación jurisdiccional vinculado esta vez con la proporcionalidad y razonabilidad de las decisiones que emite en el marco de sus potestades y competencias; en tal sentido, aclara que el debido proceso no solo es un derecho de connotación procesal, que se traduce en el respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja, que no alude solo a un proceso intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las modalidades de su tránsito, sino también como un proceso capaz de

²⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0090-2004-AA/TC, fundamento jurídico 24.

consentir la consecución de resultados esperados, en el sentido de oportunidad y eficacia.³⁰

2.2.5. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD

La igualdad como derecho fundamental está consagrado por el artículo 2º de la Constitución de 1993, según el cual toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y por tanto, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. No obstante de una interpretación literal, se trataría de un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratada del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación.

Asimismo, el derecho a la igualdad puede ser entendido en sus dos aspectos: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

³⁰ Eto Cruz, Gerardo: "Las Sentencias Básicas del Tribunal Constitucional Peruano",

Sin embargo, la igualdad no sólo puede ser concebido como un derecho fundamental, sino, también, como un principio rector del Estado Constitucional de Derecho y dentro del cual deben desarrollar sus funciones todos los poderes públicos. En ese sentido, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribiera todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. Entendiéndose que, la aplicación del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, por ello no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.

Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, se está frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable.

En suma, la igualdad es un principio-derecho que instala a las personas, situadas en idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza,

circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones. (STC N° 0261-2003-AA/TC, STC N° 010-2002-AI/TC, acumulados N°s STC 0001/0003-2003-AI/TC).

De otro lado, conforme lo sostiene García Toma, la igualdad no puede ser considerada como un derecho autónomo sino relacional, el cual opera en cuanto se vincula con el goce de los restantes derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales.³¹

Entonces, se puede afirmar que la igualdad es la armonía, proporción y reciprocidad entre los elementos que conforman un todo, trato paritario, ausencia de privilegios, carencia de preferencia, reciprocidad de derechos antes similares situaciones³².

Es así que, todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en esencia el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y de poseer la propiedad de perseguir y obtener la seguridad.³³

³¹ García Toma, V., 2008, *Los Derechos Fundamentales en el Perú*, Lima, Perú: Jurista Editores.

³² Chanamé Orbe, R., *Comentarios a la Constitución*, Lima, Perú: Jurista Editores.

³³ Declaración de Derechos de Virginia, de fecha 20 de junio de 1976, Artículo I.

De ahí que, la igualdad como derecho debe ceñirse al reconocimiento de una identidad esencial entre los hombres y a ofrecer a cada uno de ellos las mismas oportunidades para el desenvolvimiento de su personalidad eliminado todo privilegio que no esté fundado en el mérito y la capacidad de cada uno³⁴.

Ahonda más Raúl Chanamé, respecto a este derecho, al señalar que consiste en que toda ley, al tener carácter general, debe aplicarse por igual a todos. La ley debe ser igual para idénticos hechos, independientemente del sujeto que los lleva a cabo. Sin embargo, la igualdad ante la ley no significa que las personas sean iguales, sino que deben ser tratadas por igual ante la ley. Todas las personas deben tener iguales derechos, a pesar que cada persona por su propia naturaleza es distinta a las demás.³⁵

2.2.5.1. CONCEPCIÓN DUAL DE LA IGUALDAD: PRINCIPIO Y DERECHO

2.2.5.1.1. COMO PRINCIPIO

Según lo indica García Toma, la noción de igualdad sirve de pauta básica para examinar la afectación o no afectación de diversos derechos y bienes constitucionales. La igualdad como principio se constituye en la pauta rectora de la organización y actuación del Estado. Por ende, deviene en la regla básica que el cuerpo político debe garantizar,

³⁴ Capillo Sainz, J., *Derechos Fundamentales de la Persona Humana*, México: Editorial Jus.

³⁵ Chanamé Orbe, R., *Conocimientos Básicos de la Constitución*, Lima, Perú: Jurista Editores.

preservar y dar contenido a través de la dación de políticas públicas, leyes, actos administrativos y resoluciones judiciales.

En puridad, cumple simultáneamente una función orientadora en cuanto se constituye en una columna para la constitución y sostenimiento del Estado Democrático y Social de Derecho; una función orientadora en cuanto sirve de marco de referencia para las tareas de legislación, administración de los servicios públicos e imputación de justicia; y como función de comparación crítica en cuanto parámetro de valoración de las políticas públicas, actos de autoridad y conductas ciudadanas.

Dicho principio debe ser asumido como un mandato de optimización que apunta a su verificación jurídica y social. El principio de igualdad exige del Estado simultánea y sincrónicamente una vinculación negativa o abstencionista y otra positiva o intervencionista. La vinculación negativa o abstencionista está referida a tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes, quedando vedada la posibilidad que a través de la ley (expresión de regla general y abstracta) se pueda auspiciar situaciones discriminatorias de cualquier índole.

La vinculación positiva o intervencionista está referida a tratar deferentemente a un sector de la población por un lapso determinado, mediante la denominada acción afirmativa o discriminación a la inversa.

El Tribunal Constitucional en los casos Cámara Peruana de la Construcción y Máximo Yauri (Expedientes N° 00261-2003-AA/TC y N°

00018-2003-AI/TC) ha precisado los alcances de la igualdad como principio, a saber:

- a) La igualdad como límite para la actuación estatal (ámbito legislativo, administrativo y jurisdiccional). Por ende, comprende aspectos vinculados con la elaboración, interpretación, aplicación y ejecución de las leyes en sentido lato.
- b) La igualdad como mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético caso de arbitrariedad en el ejercicio del poder.
- c) La igualdad como valladar impeditivo para el establecimiento de situaciones basadas en criterios prohibidos (diferenciación atentatoria a la dignidad de la persona).
- d) La igualdad como pauta basilar al accionar del Estado, para que remueva los obstáculos políticos o sociales, que restringen de hecho la igualdad de oportunidades entre los seres humanos.

La noción de igualdad de oportunidades conlleva a conceptualizar y distinguir la igualdad formal de la igualdad material. La igualdad formal se presenta como una exigencia al legislador o al juzgador de no establecer diferencias injustificadas o irrazonables en la ley o en una resolución administrativa o judicial. La igualdad material se presenta como una exigencia de adopción de políticas públicas destinadas a promover la equiparación respecto al acceso de la cobertura de necesidades básicas (agua, luz, alimentación, educación, transporte). Ello a efectos de asegurar el libre desarrollo de la personalidad de todos

los miembros de la comunidad; para lo cual debe generarse la igualdad de oportunidades.

2.2.5.1.2. COMO DERECHO

La noción de igualdad es percibida como una facultad o atribución exigible individual o colectivamente, por medio de la cual las personas deben ser tratadas simétrica y homológamente ídem, tanto en el contenido de las leyes como en las aplicaciones de las mismas; siempre que no existan razones fundadas para un tratamiento distinto. En tal sentido, el derecho a la igualdad se constituye, prima facie, en aquello que obliga tanto a los poderes públicos como los particulares a actuar uniformemente respecto a las personas que se encuentren en las mismas condiciones o situaciones; así como tratar de manera desigual a las personas que se encuentren en circunstancias disímiles, debiendo tener dicho trato dispar un fin legítimo; el mismo que debe ser conseguido mediante la adopción de la medida más idónea, necesaria y proporcional. En consecuencia se erige como un derecho fundamental de la persona oponible en todos los ámbitos de la vida coexistencial.

En resumen, la igualdad como principio implica un postulado o proposición con sentido y proyección normativa o deontológica que, como tal, constituye parte del núcleo del sistema constitucional de fundamento democrático. Como derecho comparte el reconocimiento de la existencia de una facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de la persona y derivado de su naturaleza, que consiste en ser

tratado igual que los demás en función de hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes; por tal, deviene en el derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los privilegios y las desigualdades.

2.2.5.2. LA IGUALDAD EN RELACIÓN AL SISTEMA JURÍDICO

La igualdad es observada como condicionadora vital de los procesos de elaboración, interpretación, aplicación y ejecución de la ley. En ese contexto, la igualdad aparece para consolidar la seguridad jurídica, ya que obliga al sistema a generar un marco de estabilidad y certeza. Para tal efecto, dicho principio-derecho, se vislumbra a través de las nociones de igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la ley.

2.2.5.2.1. LA IGUALDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA LEY

Ello se refiere a la exigencia de contenidos normativos generales y abstractos; vale decir, preceptivamente impersonal e indeterminada en relación con sus destinatarios, así como una proposición en términos de un supuesto que apunta a un debe ser, en el que queda encuadrada cualquier citación que pudiera darse en la realidad.

En ese contexto, opera como un límite a la discrecionalidad del legislador. Así, supone que este se encuentre impedido de configurar pautas preceptivas diferentes cuando no existen situaciones de hecho relevantes para ello. De allí que el legislador se encuentra vedado de establecer distinciones artificiosas o arbitrarias ante hechos, sucesos o acontecimientos que involucren a personas ubicadas en un plano de identidad absoluta, o que en caso de no existir dicha homología, estas

careciesen de relevancia para fijar una regla de diferenciación. Implica la posibilidad de que toda persona pueda defenderse frente a normas estatales que contengan diferencias irrazonables y que afecten su situación jurídica o sus legítimas expectativas.

Por ello la igualdad debe ser el paradigma del legislador al momento de la dación de las leyes, no podría quedar a su albedrío elaborar normas sin detenerse a evaluar los efectos en su aplicación, si pretende dar una ley diferente aplicables solo a ciertos supuestos y no a otros de la misma naturaleza o análogos, tendrá que hacerlo sobre la base de razones objetivas que lo justifique, pues si bien la igualdad no implica tratar por igual a todos sin excepción y por el contrario significa también tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pero este trato diferenciado no debe realizarse al antojo o capricho del legislador sino sobre razones constitucionalmente válidas y objetivas. De allí que, no todo trato diferenciado implica una discriminación o una afectación del derecho a la igualdad ante la ley, por lo que es permisible un trato desigual en forma diferenciada cuando las circunstancias de uno y otro caso lo justifique.

Sobre el tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica "[...] por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, a la dignidad humana. [...] Existen, en efecto, ciertas desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia." Mientras que, el Comité de

Derechos Humanos ha señalado: "El derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad de protección de la ley sin discriminación alguna no hace discriminatoria todas las diferencias de trato. Una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no constituye la discriminación prohibida en el sentido del artículo 26"³⁶.

No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón, o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parte de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresan de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que en alguna manera repugnan a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.

Por tal motivo hay que distinguir entre diferenciación de trato y discriminación o la afectación del derecho a la igualdad ante la ley.

³⁶ Bustamante Alarcón, R., *Op. Cit.*

2.2.5.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN TRATO DISCRIMINATORIO

Según el Tribunal Europeo, para sostener si estamos ante un caso de discriminación o un supuesto de diferenciación, se deben evaluar los siguientes criterios:

1º) la igualdad de trato queda violada cuando, entre casos comparables, la distinción carece de justificación objetiva.

2º) la existencia de una justificación semejante debe apreciarse en relación con la finalidad de los efectos de la medida examinada en atención a los principios que generalmente prevalecen en las sociedades democráticas.

3º) el artículo 14 del Convenio también se ve violado cuando resulta claramente que no existe una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.³⁷

Resumiendo, se puede afirmar que que el trato desigual no es contrario a la justicia cuando concurren los siguientes requisitos:

1º) los sujetos se encuentran en distintas situaciones objetivas o la situación fáctica es distinta.

2º) el fin perseguido con el trato desigual es compatible con la justicia.

³⁷ Bustamante Alarcón, R., *Op. Cit.*

3º) el trato desigual es razonable y existe proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Por consiguiente, habrá trato discriminatorio allí donde se niegue a unos lo que se reconoce o concede a otros, a pesar de que se encuentran en situaciones idénticas.

2.2.5.4. LA IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

Ella se refiere a la eficacia de las normas y la adecuación de los operadores jurisdiccionales con las normas, principios y valores constitucionales. Por ende, opera como un límite a la actuación del aplicador de la ley; el cual no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente. En consecuencia, el respeto a la igualdad es la expresión de imparcialidad por parte del ente administrativo o jurisdiccional. Ello supone la obligación de aplicar la ley de manera efectivamente semejante a todas las personas que se encuentran en la misma condición o circunstancia, o que en caso de inexistencia de homología, esta careciese de relevancia para fijar una regla de diferenciación.

El Tribunal Constitucional en el caso Instituto Superior Tecnológico No Estatal Peruano de Sistemas SISE (Expediente N° 01279-2002-AA/TC) ha señalado que la aplicación uniforme de la ley es una regla general que opera cuando existe una identidad sustancial entre los supuestos de hechos confrontados, que no necesariamente deber ser plena; en tal sentido, basta con que se verifiquen suficientes elementos comunes que

permitan considerar que los supuestos de hecho analizados son jurídicamente iguales, y merecer una aplicación isonómica de la norma.

Dicha expresión de igualdad en la aplicación de la ley supone lo siguiente:

- ❖ El órgano jurisdiccional debe ser el mismo en todas las circunstancias.
- ❖ Los supuestos de hecho descritos en los procesos o procedimientos deben ser sustancialmente idénticos.
- ❖ La existencia de una jurisprudencia o precedente vinculante sobre la materia.
- ❖ Existencia de un trato homólogo y simétrico.

2.2.5.5. LA IGUALDAD Y LA OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN

Las Naciones Unidas han definido la discriminación como toda “distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”³⁸.

³⁸ Comité de Derechos Humanos de la ONU. Observación General N° 18: No discriminación, párrafo 7.

Al respecto cabe precisar, que la obligación de no discriminación es distinta al derecho de igual tratamiento ante la ley, tanto en la formación de la norma como en su interpretación o aplicación. A la vez son complementarias: el reconocimiento de la igualdad es el fundamento del trato no discriminatorio. Más aún, la igualdad de las personas incluye: a) el principio de no discriminación, mediante el cual se prohíben diferencias que no se puedan justificar con criterios razonables y objetivos, y b) el principio de protección, que se satisface mediante acciones especiales dirigidas a la consecución de la igualdad real o positiva. Consecuentemente, "(...) *El derecho a la igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o todos los destinatarios de las normas tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, no todo trato desigual constituye una discriminación constitucionalmente prohibida, sino sólo aquella que no está razonablemente justificada*"³⁹.

En definitiva, la correcta aplicación del derecho exige *dar a cada quien lo que le corresponde*. Por tanto, no equivale a *uniformar* sino a *discriminar adecuadamente con criterios de proporcionalidad*.⁴⁰ De allí que la igualdad -exigida por la justicia- imponga tratar "igual a los iguales" y "desigual a los desiguales".

La igualdad, en tanto principio, es uno de los pilares del orden constitucional que permite la convivencia armónica en sociedad y es

³⁹ STC del 6 de noviembre de 2008, expediente N° 05652-2007-PA/TC, fundamento 19.

⁴⁰ "Lo justo es tratar a todos por igual en lo que son iguales y de modo diferente -pero *proporcional*, ésta es la clave- en lo que son diferentes". Hervada, Javier y Andrés Muñoz, Juan. *Guía de los estudios universitarios. Derecho, ciencias de la educación. Guías de los estudios universitarios*, Ediciones Universidad de Navarra-EUNSA, Pamplona, 1984, p. 46

también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos y de los particulares. En tanto derecho implica una exigencia de ser tratado de igual modo respecto a quienes se encuentran en una idéntica situación, debido a que los derechos a la igualdad y a la no discriminación se desprenden de la dignidad y naturaleza de la persona humana.

Teniendo en cuenta lo señalado, puede concluirse que no todo trato desigual ante la ley es una discriminación constitucionalmente prohibida, puesto que no basta con que la norma establezca una desigualdad, sino que ésta no debe ser justificada objetivamente. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”⁴¹.

2.2.6. EL VALOR SUPREMO DE JUSTICIA

Se sabe que para regular las conductas humanas existen normas que obligatoriamente deben ser cumplidas por todos (*erga omnes*). A este conjunto de normas, a la que se añaden principios y categorías jurídicas, suele denominarse derecho. Pero el derecho no puede concebirse como un simple catálogo de normas sino que alcanza una dimensión extensa, pues su horizonte es la justicia; vale decir, en este afán de regular

⁴¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84, del 19 de enero de 1984. Serie A, N° 4, párr. 56.

conductas, el derecho no puede desvincularse del fin primordial que persigue: la justicia. En este punto, se resalta lo manifestado por TORRES VÁSQUEZ: “Los mandatos contenidos en el Derecho no son fórmulas puramente convencionales, productos del azar o del capricho, sino ajustados a unos principios de justicia que deben ser acatados por los sujetos y puestos en práctica por la comunidad en las variadas relaciones de la vida social. El Derecho positivo es el instrumento para la aplicación de la justicia. El Derecho no establece un orden cualquiera sino un orden justo. No puede existir Derecho desprovisto de todo contenido ético, pues, la tarea constante del Derecho ha sido, es y será siempre la búsqueda de la justicia.”⁴²

Por su parte, en el V Pleno Casatorio Civil (Casación N° 3189-2012-Lima Norte) se ha desarrollado minuciosamente este valor supremo (justicia) considerado como uno de los valores jurídicos trascendentales que informan todo el ordenamiento jurídico; así, en el fundamento jurídico 235 se establece: “En suma, es indudable que la justicia irradia a todo nuestro ordenamiento jurídico, más allá de los desarrollos teóricos; podemos apreciar que nuestra norma fundamental se pronuncia una y otra vez sobre este valor supremo, como es el caso del artículo 44 de la Constitución de 1993 cuando establece que “(...) son deberes del Estado (...) promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, el artículo 138 de la norma fundamental establece

⁴² Torres Vásquez, A., *Introducción al Derecho*, Lima, Perú: Palestra Editores.

taxativamente que “(...) la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y la leyes”. Adicionalmente se puede señalar que este valor supremo se encuentra presente de manera ineludible en el artículo 139 de la Constitución, referido a los principios y derechos de la función jurisdiccional, en especial en los numerales 08 y 16, así como también en diversos extremos de la norma fundamental. Por ende, la aplicación de este valor supremo a nuestro ordenamiento no puede ser dejado de lado ni tampoco soslayado.”

Se destaca que el valor justicia como aspiración final del derecho –fin del derecho–, no puede estar sujeto a limitaciones, pues qué más puede esperar la sociedad sino la justicia, por el contrario cualquier otro derecho que resulte incompatible con este valor debe relativizarse, dado que es lógico que su ejercicio no debe desviarse de la justicia, tal como ya lo sostenía Kelsen al indicar: “(...) en su sentido propio la idea de justicia es un valor absoluto, un principio que pretende ser válido siempre y en todas partes, independientemente del espacio y el tiempo: es eterna e inmutable (...)”⁴³.

2.2.7. LA PLURALIDAD DE INSTANCIA

La titularidad de derechos constitucionales, sobre el cual se busca su protección o el restablecimiento en su ejercicio, le viene dado a las personas en función de su dignidad, integrada por dones naturales de

⁴³ V Pleno Casatorio Civil, considerando 232.

inteligencia y voluntad, de este modo, el poder público (Estado), le reconoce una serie de derechos, los cuales se encuentran positivizados en una carta fundamental de cada país, además los que se desprenden de la dignidad del hombre. La ausencia de estos derechos imposibilitaría a ser humano desarrollarse a plenitud. Entre tales derechos encontramos el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad física, al honor y a la buena reputación, a la libertad de expresión, a la educación pública, etc.; no obstante, otros derechos constitucionales, por el contrario, su titularidad no necesariamente nace de la condición inherente de persona humana, ni de un reconocimiento por parte del Estado, sino de la derivación de estos y a consecuencia de la realización de actos humanos revestidos de inteligencia y voluntad, a través de los cuales se obtiene la titularidad sobre ellos; es decir, para obtener la titularidad sobre dichos derechos, la persona ha tenido que transformar, adecuar u orientar sus circunstancias de vida con fines de conseguir preciados bienes, como ocurre por ejemplo con el derecho a la propiedad que se logra sobre un determinado inmueble adquirido; el derecho a la pensión previa acreditación de los requisitos para percibirla; a la herencia derivada de la condición de heredero, entre otros.

Por otro lado, la titularidad sobre otros derechos constitucionales le son otorgados a las personas a consecuencia de desenvolverse esta, con inteligencia y voluntad, en un escenario jurídico en particular, lugar en el cual acuden a resolver sus controversias jurídicas surgidas en la convivencia diaria con los demás (tráfico de derecho privado) o con el

Estado (tráfico de derecho público) en sedes judicial, administrativa, arbitral, militar, corporativa o comunal; entre ellos se destacan, los derechos que componen el debido proceso (formal y material) integrados por los derechos al libre acceso al órgano jurisdiccional; a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso; a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por ley; la obtención de una resolución fundada en derecho; a acceder a los medios impugnatorios regulados, etc.; aunque toda esta gama de derechos no tendría sentido si no van acompañados de un mecanismo legal de protección.

Así pues, resulta ser relevante el derecho de acceso a los medios impugnatorios o pluralidad de instancia que también constituye un derecho para la realización de la persona humana que coadyuvará en la solución de conflictos o controversias en justicia.

Se tiene así que, ningún proceso desarrollado ante los órganos jurisdiccionales, puede desenvolverse en una sola instancia sin posibilidad de ser revisado por un tribunal superior, lo contrario implicaría desconocer el valor superior de justicia que debe reinar en todo proceso, para hacer efectivo sus fines inmediato y mediato. Este derecho, logra su efectividad a través de los medios impugnatorios, específicamente con los recursos.

CAPITULO III:

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

DE LOS RESULTADOS DE

LA INVESTIGACIÓN

3.1. ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA EN LOS PROCESOS INICIADOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO

En el presente capítulo analizaremos las limitaciones al derecho de impugnación que se dan en los procesos ventilados tanto en los juzgados de paz letrado como en los especializados y/o mixtos, a partir de los resultados obtenidos en la encuesta que se practicó a cien personas, entre ellas, magistrados, abogados litigantes y justiciables, quienes en su conjunto constituyen una muestra real y suficiente para el sustento de la presente investigación.

De igual modo, se va a comparar la opinión de los encuestados con lo que estipula la ley respecto a la materia de recursos, Ley Orgánica, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, Constitución; así como la naturaleza de los procesos iniciados en paz letrado con los tramitados en los juzgados especializados y/o mixtos. Por lo que para mayor ilustración se ha procedido a realizar gráficos porcentuales que contienen los resultados de las encuestas realizadas. Asimismo, se aclara que todo el análisis de los resultados de las encuestas se realiza para tener datos netamente referenciales con el propósito de demostración de la hipótesis, puesto que la presente investigación es puramente argumentativa y dogmática, pero se ha creído conveniente llevar a cabo este trabajo de campo para reforzar y una mejor ilustración; pero antes se realizará un pequeño esbozo de algunas figuras jurídicas afines.

De igual modo, se analizará sentencias emitidas por Juzgados de Paz Letrado y Especializados o Mixtos, para verificar el grado de importancia de las materias discutidas en estos procesos, y con ello verificar si existe vulneración al derecho a la igualdad.

3.1.1. EL DERECHO COMO INSTRUMENTO REGULADOR DE LA CONDUCTA HUMANA

Desde que el hombre se hizo un ser social (su naturaleza es así) fue inevitable que se interrelacione con los demás hombres de la sociedad, lo que originalmente generó conflictos y no solo relaciones armoniosas, entonces con el paso de tiempo fue necesario buscar los mecanismos para lograr la solución a todos los intereses reclamados, lo que generó que la colectividad busque una forma de organización superior de tal manera que sus muchas necesidades le fueran satisfechas; es así, que surgió el conocido contrato social (ficción jurídica, pero necesaria) mediante el cual, se entiende, que la sociedad se organizó y concedió poder al Estado para que éste diera solución y vele por los intereses de la colectividad; es decir, se depositó en dicha forma de organización muchas potestades dentro de las cuales se destaca la de dar solución a los intereses con relevancia jurídica, nos referimos a la administración de justicia.

Es así que entra a tallar el conjunto de normas y reglas creadas para regular conductas humanas; eso es, El Derecho, cual es la esencia pura de regulación del comportamiento humano, y que puede ser entendido como todo es contenido jurídico compuesto por normas, directrices, principios, postulados,

leyes, que tienen como propósito dar solución a los intereses con relevancia jurídica de la población; con una sola finalidad absoluta: hacer justicia. Pues bien, en este afán, nació la idea del “proceso”, dentro del cual se supone se aplica todas las herramientas jurídicas para resolver los conflictos propuestos por las partes; quienes no tienen otra opción que aceptar las decisiones (en este caso judiciales) sea cual fuere el resultado.

Sin embargo, para que esta aceptación sea convincente y mantenga conformes a los justiciables, debe premunirse de los mecanismos suficientes para que la decisión final sea catalogada de justa; pues qué más da si todos esperan del órgano jurisdiccional una respuesta acorde a las garantías procesales mínimas y que se obtenga como resultado una decisión direccionada por la justicia, cuyo valor supremo es absoluto y perpetuo; nótese que la justicia es pilar y la aspiración de todo el ordenamiento jurídico. Una de esas tantas garantías procesales consiste en la revisión de la primera decisión judicial por las instancias suficientes que prevé nuestra normatividad: Derecho de Impugnación, pero no de una impugnación aparente o meramente por “un cumplido”, sino una que garantice en la población que la decisión final es la más concordante con el derecho; por tanto, esta garantía impugnativa debe ser aplicada en la misma medida en todos los procesos, indistintamente del juzgado en que se inician.

3.1.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE IMPUGNACIONES

La gran mayoría de ordenamientos no cuentan con una cláusula constitucional expresa referido a las impugnaciones procesales, por lo que, sobre todo, a nivel doctrinario, aquellos que las consideran una garantía, se ven precisados a adscribirlas o al derecho de defensa, o al derecho de acción, o al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, o al derecho a un proceso con todas las garantías (o, sí se prefiere, al “debido proceso”), etc. Sin embargo, en nuestro caso e tema sobre impugnación lo encontramos regulado de manera expresa en el inciso 6 del artículo 139° de la Constitución, que contempla como un principio-derecho de la función jurisdiccional la pluralidad de la instancia. Siendo así, al estar previsto en nuestra Constitución este derecho, no queda más al legislador hacer que ese medio impugnatorio exista, caso contrario, de no cobrar existencia el ordenamiento procesal estaría incurso en evidente inconstitucionalidad.

Del mismo modo, que el ordenamiento procesal deba diseñar un proceso con instancia plural es un derecho subjetivo del justiciable, no una objetiva exigencia del sistema procesal; empero, también es cierto que el ordenamiento debe prever de forma igualitaria todos los medios impugnatorios y será la parte quien haciendo uso de su potestad privada si se somete o no a cada uno de dichas impugnaciones.

3.1.3. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL Y SUSTENTO DEL DERECHO A LA IMPUGNACIÓN

Como bien se ha dejado dicho en el desarrollo de la presente investigación, nuestra Constitución Política prevé como uno de los principios-derechos de la función jurisdiccional el de pluralidad de instancia, y es que ningún proceso desarrollado ante los órganos jurisdiccionales, puede desenvolverse en una sola instancia sin posibilidad de ser revisado por un tribunal superior, lo contrario implicaría desconocer el valor superior de justicia que debe reinar en todo proceso, para hacer efectivo sus fines inmediato y mediato; de ahí que nuestro Código Procesal Civil regule distintos medios impugnatorios como la apelación, queja, casación, etc. Como es de verse, nuestra Constitución no ha sido ajena a este derecho (impugnación) sino que lo contempla dentro del derecho a la pluralidad de instancia, y que no ha hecho diferencia alguna en su aplicación. Siendo así, no se comprende entonces, en términos constitucionales, por qué aparece esa diferencia predominante que en materia recursiva contempla nuestras dos normas legales madres: Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil.

3.1.4. LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS

La impugnación se sustenta en la necesidad de disminuir la posibilidad de injusticia basada, principalmente, en el error judicial, el mismo que si no es denunciado, origina una situación irregular e ilegal, que causa agravio al interesado. La revisión de los actos que se encuentran afectados de vicio o error aparece a consecuencia de un perjuicio inferido al impugnante surgido

como consecuencia de la inobservancia de las reglas procesales o de una errónea apreciación al resolver así como en el caso que exista una decisión arbitraria o una conducta dolosa. En tal sentido y con la finalidad de garantizar una resolución justa y la estricta aplicación de la ley resulta indiscutiblemente necesaria la impugnación de los actos procesales y la instancia plural.

Se sabe que a través de los medios impugnatorios (remedios y recursos) se busca anular o revocar, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. Conforme a esta noción general, los medios de impugnación tienden a cuestionar cualquier acto procesal (como por ejemplo las resoluciones judiciales).

3.1.4.1. LOS REMEDIOS

Los remedios se formulan por quien se considera agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. El profesor Juan MONROY señala que *“Los remedios son aquellos a través de los cuales la parte o el tercero legitimado pide se reexamine todo un proceso a través de uno nuevo o, por lo menos, el pedido de reexamen está referido a un acto procesal. El rasgo distintivo está dado porque el remedio está destinado a atacar toda suerte de actos procesales, salvo aquellos que están contenidos en resoluciones”*⁴⁴.

En tal sentido los remedios son aquellos medios impugnatorios encaminados a lograr que se anule o revoque, ya sea en manera parcial o total determinados actos procesales que no se encuentran contenidos en

⁴⁴ MONROY GALVEZ, Juan, “Los medios impugnatorios en el Código procesal Civil” en [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/15354-60953-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/15354-60953-1-PB%20(1).pdf)

resoluciones. Se interpone ante el mismo Juez que conoció del acto procesal materia de impugnación, a fin de que este proceda a reexaminarlo y en su oportunidad lo modifique, revise o revoque, en su totalidad o en parte de ella.

Así, los remedios pueden ser dirigidos contra el acto de notificación, la actuación de un medio de prueba, una diligencia externa realizada por el secretario, etc. es decir cualquier acto procesal que no se encuentran comprendidos en una resolución.

- a) Oposición:** Medio impugnatorio destinado a cuestionar determinados medios probatorios que han sido propuestos por las partes en el proceso, con la finalidad de que estos no sean incorporados al proceso y por ende evitar su correspondiente actuación y eficacia probatoria al momento de emitir la resolución final. La oposición además de constituirse en un remedio a su vez es, una cuestión probatoria.
- b) Tacha:** Acto procesal destinado a que se invalide o reste eficacia determinado medio de prueba por cuanto existe un defecto o impedimento en el mismo. Esta figura además de constituir un remedio, representa una cuestión probatoria.
- c) Nulidad:** Implica la inaplicación o aplicación errónea de la norma, lo que da origen a su invalidez de sus efectos siempre que dicha causal se encuentre expresamente señalada por la norma o que el acto no reúna los requisitos necesarios para la obtención de su finalidad. En tal sentido la nulidad de un acto procesal significa la declaración de su invalidez o ineficacia a consecuencia de determinados vicios o

irregularidades que lo afectan, estos pueden originarse de una conducta culposa o dolosa.

3.1.4.2. LOS RECURSOS

En cambio, los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para luego de un nuevo examen de ésta, se subsane el vicio o error alegado. Estos están destinados a lograr la revisión de una resolución que se encuentra afectada por vicio o error sea esta de forma o de fondo, con la finalidad que sea anulada o revocada total o parcialmente por el propio órgano o por el superior jerárquico que emitió el acto cuestionado.

3.1.4.2.1. RECURSOS ORDINARIOS:

3.1.4.2.1.1. APELACIÓN

El recurso de apelación está concebido para afectar a través de él autos o sentencias, es decir, resoluciones en las cuales haya una decisión del juez originada en un análisis lógico-jurídico del hecho, o de la norma aplicable al hecho.

3.1.4.2.1.2. QUEJA

Este recurso tiene supuestos de aplicación muy específicos. Puede ser intentado por una parte sólo cuando se ha declarado inadmisibile o improcedente el recurso de apelación o el de casación, y también cuando se ha concedido un recurso de apelación en un efecto distinto al solicitado o correspondiente.

3.1.4.2.1.3. REPOSICIÓN

Mediante el recurso de reposición se puede solicitar un nuevo examen únicamente de los decretos, es decir, de las resoluciones de mero trámite o impulso procesal.

3.1.4.2.2 RECURSOS EXTRAORDINARIOS

3.1.4.2.2.1. CASACIÓN

El recurso de casación es, en la actualidad, el recurso que en todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y laboral) permite el acceso a la Corte Suprema, cual “tercer juez” de un determinado asunto, y cuya competencia es exclusiva de la Corte Suprema. Ahora la propia constitución le deja al legislador ordinario la tarea de establecer cuándo la Corte Suprema actúa como tercer juez (limitándolo a que lo sea como “juez de casación”), o como segundo juez de instancia (cuándo las causas inician ante las cortes superiores e inclusive como primer y último juez de instancia.

3.1.5. LA PLURALIDAD DE INSTANCIA Y SU REGULACIÓN EN NUESTRA NORMATIVIDAD LEGAL

3.1.5.1. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Mediante el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuyo objeto, según su artículo 3°, es determinar la estructura del Poder Judicial, definir los derechos y

deberes de los Magistrados, los justiciables y los auxiliares jurisdiccionales, para asegurar el cumplimiento y pleno respeto de las garantías constitucionales de la administración de justicia. Como puede apreciarse, este cuerpo normativo está encargado, entre otros aspectos, regular las competencias de los órganos jurisdiccionales en todos sus niveles, por ejemplo la competencia por razón de grado o función. Así pues, en materia recursiva y regulando el derecho a la pluralidad de instancia, ha contemplado como recursos la apelación, la queja de derecho y la casación. En cuanto a este último recurso, según se infiere de su artículo 32°, inciso a, la Corte Suprema conoce como última instancia (en realidad tercera) los recursos de apelación según la ley correspondiente; es decir, ya sea en materia, civil, laboral, familia o penal, se entiende cuando el proceso es iniciado en un juzgado especializado o mixto, y procede contra las decisiones de la Sala de la Corte Superior de Justicia respectiva; pero allí no está la peculiaridad, sino que ésta nace de la regulación impugnativa cuando el proceso se instaura ante un juzgado de paz letrado, para cuyo caso no se permite un tercer recurso como el de casación; así se tiene pues que, cuando el proceso se inicia en un juzgado de paz letrado, el juzgado especializado o mixto conoce el proceso como órgano de segunda y última instancia, tal como se desprende del artículo 49°, numeral 5, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que los Juzgados Civiles conocen en grado de apelación los asuntos de su competencia que resuelven los Juzgados de Paz Letrados, de acuerdo a ello se estaría cumpliendo con el principio de doble instancia. Sobre el particular y a manera de ilustración, en una resolución emitida por el Tercer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca,

dentro del expediente N° 01294-2009-0601-JR-CI-03 (resolución número veintidós, del 11 de abril de 2012), se declaró improcedente (por imposibilidad jurídica) un segundo recurso (en este caso la parte lo propuso como apelación) sustentando que dicho Juzgado Civil ha conocido el proceso como órgano de segunda y última instancia; parte del texto de dicha resolución expresa:

“AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el presente expediente y escrito que antecede; **Y CONSIDERANDO: PRIMERO:** Mediante escrito que se provee, el apoderado del demandante interpone recurso impugnatorio de apelación contra la sentencia de vista de fojas doscientos veintisiete a doscientos treinta y tres en mérito a los fundamentos que expone. **SEGUNDO:** Nuestra Constitución Política del Estado reconoce como principio y derecho de la función jurisdiccional la pluralidad de instancias, esto es, la posibilidad de recurrir ante el órgano jerárquico superior, con la finalidad que se revise la resolución que causa agravio; principio desarrollado por el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual prescribe “*El proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta*”. **TERCERO:** En principio debemos tener en cuenta que este Juzgado se ha pronunciado en el presente proceso como órgano de segunda y última instancia, tal como se infiere del numeral 5) del artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que los Juzgados Civiles conocen en grado de apelación los asuntos de su

competencia que resuelven los Juzgados de Paz Letrados; toda vez que, ha emitido sentencia de vista dentro del expediente originado en el Primer Juzgado de Paz Letrado de Cajamarca, cumpliéndose así con el principio de doble instancia; resultando ser un imposible jurídico lo solicitado por el recurrente, en la medida de que en nuestro sistema jurídico procesal no existe la figura de tercera instancia, con las peculiaridades del recurso extraordinario de casación; por lo que, el recurso de apelación debe ser declarado improcedente. Por tales consideraciones y normas invocadas; **SE RESUELVE:** Declarar **IMPROCEDENTE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante contra la sentencia de vista emitida en este proceso...”

Pues bien, con ello queda claro que la Ley Orgánica del Poder Judicial quita esa posibilidad impugnatoria extraordinaria cuando un proceso nace en un Juzgado de Paz Letrado, a diferencia de los procesos que se originan en un Juzgado Especializado o Mixto que cuentan con esa posibilidad recursiva adicional (recurso de casación).

3.1.5.2. EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

El Código Procesal Civil se redactó estando vigente la Constitución del 1979, carta que prescribía, en su artículo 233 como garantía de la administración de justicia a la instancia plural (inciso 118 del artículo en mención); sin embargo,

en nuestro actual código adjetivo, el artículo X del Título Preliminar delimita el dictado constitucional, pues únicamente habla de doble instancia.

Ahora bien, durante la vigencia de la Constitución de 1993, el Tribunal Constitucional no se ha cansado de repetirnos que: “[...] *el problema relativo a cuales y cuántas deben ser esas instancias jurisdiccionales no ha sido precisado por la disposición constitucional que reconoce tal derecho, por lo que, en base a las exigencias que se derivan del principio de legalidad en la regulación de los derechos fundamentales, artículo 2°, inciso 24, cardinal “a”, de la Ley Fundamental, el laconismo constitucional de su formulación lingüística debe entenderse en el sentido de que su determinación es una tarea que compete al legislador. En tal sentido, hemos sostenido que el derecho a la pluralidad de instancias es un derecho de configuración legal. Sin embargo, al mismo tiempo, hemos advertido que la condición de derecho de configuración legal no quiere decir que el legislador pueda decidir si prevé (o no) tales instancias. Dado que el inciso 6) del artículo 139° no precisa cuántas deben ser esas instancias, pero sí que debe establecerse una instancia plural, el contenido constitucionalmente garantizado demanda que el legislador prevea, como mínimo, la doble instancia*”⁴⁵.

El Código Procesal Civil, se constituye como una norma procesal matriz y base, el cual regula toda la actividad procedimental para la gran gama de procesos que nuestro ordenamiento jurídico prevé (competencia, comparecencia, representación judicial, actividad procesal de las partes, del

⁴⁵ Fundamento 3 de la RTC N° 03261-2005-PA/TC

juez, terceros, requisitos de postulación, vías procedimentales, impugnación, entre otros). Este cuerpo de leyes ya de manera expresa dispone en su artículo X del Título Preliminar, que el proceso tiene dos instancias; empero, en la parte correspondiente a medios impugnatorios contempla el recurso de casación como un medio impugnatorio, obviamente a ser conocido no en segunda instancia, sino como un recurso extraordinario de competencia de la Corte Suprema, pues su artículo 387° prescribe que la casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; y aunque con sus propias características y exigencias taxativas, en estricto se configura como un tercer mecanismo recursivo para la revisión de los procesos judiciales, claro está, siempre que se originen en un juzgado especializado o mixto.

Ahora, al disponer este cuerpo de leyes que el proceso tiene dos instancias, entonces niega esa posibilidad de que un justiciable (cuyo proceso se inicia en Juzgado de Paz Letrado) pueda acceder a un recurso extraordinario – similar al de casación- cuando no está de acuerdo con la decisión del juzgado especializado que interviene como segunda instancia.

3.1.6. LIMITACIONES DOCTRINARIAS

No ha sido posible encontrar -a pesar de esta notoria limitación al derecho recursivo- un estudio –aunque superficial- sobre este recorte al tema impugnatorio; al parecer se le ha restado importancia porque la norma (Código Procesal Civil y Ley Orgánica del Poder Judicial) ha predeterminado que así sea, pero debe recordarse que el mundo jurídico es cambiante y también la

doctrina como fuente derecho debiera ocuparse un poco más por evaluar temas como el presente.

3.2. ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA RECURSIVA EN LOS PROCESOS INICIADOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO CON RELACIÓN A LOS PROCESOS INICIADOS EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS /O MIXTOS

3.2.1. DERECHO A LA IGUALDAD

Se sostuvo con antelación que el derecho a la igualdad puede ser entendido en sus dos aspectos: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

Para el caso que nos atañe, nos referiremos al primer supuesto (igualdad ante la ley); en el entendido de que no podría ser posible que una situación con las mismas características que la otra, sea tratada de manera diferenciada sin justificación. Es por ello que, resulta necesario contar con un término de comparación para evaluar dicha vulneración o no. Para tal efecto y como bien lo ha señalado el Tribunal Constitucional En lo que respecta a la vulneración al derecho de igualdad ante la ley; es preciso señalar que, el derecho a la igualdad

ante la ley se encuentra regulado en el artículo 2.2 de la Constitución Política del Estado, conforme al cual: *“Toda persona tiene derecho: (...) A la igualdad ante la ley. (...)”*. El Tribunal Constitucional lo ha desarrollado ampliamente en la STC N° 0020-2012-PI/TC –caso Ley de Reforma Magisterial–, estableciendo en su fundamento 86 que: *“Este Tribunal en constante jurisprudencia tiene afirmado que la igualdad “(...) ostenta una doble condición, de principio y de derecho fundamental. En cuanto **principio**, constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto **derecho** fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) **o por otras** ('motivo', 'de cualquier otra índole') que, jurídicamente, resulten relevantes” (fundamento 20 de la STC 0045-2004-AI/TC; fundamento 7 de la STC 0019-2010- PUTC, entre otras).*” Pero al mismo tiempo en esta sentencia expresa: *“Igualmente, el Tribunal en diversas oportunidades ha recordado que el principio de igualdad **no supone necesariamente un tratamiento homogéneo** pues de hecho es constitucionalmente lícito el trato diferenciado **cuando éste se encuentra justificado**, precisándose que existirá una discriminación cuando para supuestos iguales se hayan previsto consecuencias jurídicas distintas, o cuando se haya realizado un trato semejante a situaciones desiguales y siempre que, para cualquiera de los dos casos, se carezca de justificación*

(fundamento 10 de la STC 0007-2003-AI/TC; fundamento 43 de la STC 0015-2011-P1/TC, entre otras).” [Negrita nuestra].

Es así que, el máximo intérprete de la Constitución refiere que la identificación del tratamiento diferenciado debe realizarse **mediante comparación entre el objeto, el sujeto, la situación o la relación que se cuestiona y/o otro identificable** desde el punto de vista fáctico o jurídico pero al que se le asigna diferente consecuencia, que viene a constituir lo que se denomina “**término de comparación**” [*tertium comparationis*] (fundamento 90 de la STC N° 0020-2012-PI/TC). De igual manera se precisa que: “**Este término de comparación debe presentar una situación jurídica o fáctica que comparta una esencial identidad, en sus propiedades relevantes, con el trato que se denuncia.** Al respecto, este Tribunal en anteriores oportunidades ha dejado establecido que “entre lo que se compara y aquello con lo cual éste es comparado, han de existir cualidades, caracteres, rasgos o atributos comunes. La inexistencia de caracteres comunes entre el trato que se cuestiona y la situación que se ha propuesto como término de comparación, impide que se pueda determinar una intervención sobre el principio-derecho de igualdad (...). Por ello, **es tarea de quien cuestiona** una infracción a dicho derecho **proceder con su identificación, así como con la aportación de razones y argumentos por las que éste debería considerarse como un tertium comparationis válido e idóneo** (...). Y puesto que de la validez e idoneidad del término de comparación depende la determinación (o no) de una intervención al mandato de prohibición de discriminación, su análisis se presenta como un *prius* a la determinación de su lesividad” (fundamento 32 de la STC 0035-

2010-PI/TC).” [fundamento 91 de la STC N° 0020-2012-PI/TC – lineado y negrita agregados]. De todo ello se desprende que, para tener la certeza que una acción u omisión, ha infringido este derecho (igualdad), necesariamente se tiene que contar con ese término de comparación.

Así también, siendo la igualdad un principio, éste cumple las siguientes características y finalidades.

CARACTERÍSTICAS

- Son enunciativos
- Constituyen el espíritu del Derecho
- Sustentan la esencia del proceso
- Gobiernan los actos de los sujetos procesales.
- Son abstractos
- Son subjetivos

FINALIDADES

- ✓ Orientan la actividad de los administradores de justicia.
- ✓ Orientan la aplicación e interpretación de la ley.
- ✓ Inspiran la labor legislativa.
- ✓ Señalan el marco dentro del cual se va a desenvolver la actividad procesal.

- ✓ Buscan que las resoluciones emitidas sean justas.

3.2.2. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO

De acuerdo a nuestras normas procesales (Código Procesal Civil, Nuevo Código Procesal Penal, Nueva Ley Procesal del Trabajo y parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial), los juzgados de paz letrados conocen distintas materias, las que se detallarán para una mejor comprensión:

3.2.2.1. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.

De acuerdo al artículo 57° de este cuerpo normativo, los Juzgados de Paz Letrados conocen:

En materia Civil:

1. De las acciones derivadas de actos o contratos civiles o comerciales, inclusive las acciones interdictales, posesorias o de propiedad de bienes muebles o inmuebles, siempre que estén dentro de la cuantía señalada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
2. De las acciones de desahucio y de aviso de despedida conforme a la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
3. De los procedimientos de jurisdicción voluntaria que establezca la Ley, diligencias preparatorias y legalización de libros contables y otros.
4. De las acciones relativas al Derecho Alimentario, con la cuantía y los requisitos señalados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

5. De las tercerías excluyentes de propiedad, derivadas de los procesos de su conocimiento. Si en éstas no se dispone el levantamiento del embargo, el Juez de Paz Letrado remite lo actuado al Juez Especializado que corresponda, para la continuación del trámite.
6. De los asuntos relativos a indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito, siempre que estén dentro de la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
7. De los procesos ejecutivos hasta la cuantía que señale el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
8. De las acciones de filiación extramatrimonial previstas en el artículo 402 inciso 6) del Código Civil.
9. De los demás que señala la ley."

En materia Penal:

- 1.- De los procesos por faltas, expidiendo fallo apelable ante el Juez Penal o Juez de apelación.
- 2.- De los demás asuntos que señala la ley.

En materia Laboral:

- a) De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

- b) De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).
- c) De las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador.
- d) De los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.

En materia de familia:

- a) De las acciones relativas al derecho alimentario y el ofrecimiento de pago y consignación de alimentos, siempre que exista prueba indubitable del vínculo familiar y no estén acumuladas a otras pretensiones en la demanda; en caso contrario, son competentes los Juzgados de Familia.
- b) De la oposición al matrimonio, de la confirmación del matrimonio anulable del impúber y de la conformación y funcionamiento del consejo de familia para un incapaz, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil; las que se tramitan en la vía procedimental que corresponda según su naturaleza.

3.2.2.2 CÓDIGO PROCESAL CIVIL

- En el proceso abreviado son competentes para conocer demandas con una cuantía mayor de cien y hasta quinientas Unidades de Referencia Procesal (Artículo 488°).
- Son competentes para en los procesos sumarísimos el proceso de alimentos, asimismo, conocen de los procesos de desalojos cuando la renta mensual es hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal (Artículo 547°).

- Conocen de los procesos con título ejecutivo de naturaleza extrajudicial cuando la cuantía de la pretensión no sea mayor de cien Unidades de Referencia Procesal (Artículo 690-B).
- Conocen de los procesos no contenciosos (Artículo 750°).

3.2.2.3. NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Según el su artículo 30°, los juzgados de paz letrado conocen de los procesos por faltas, y entre las faltas que regula nuestro código penal encontramos a las faltas contra la persona como por ejemplo la Lesión dolosa y lesión culposa, que según su artículo 441°: “El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera **hasta diez días de asistencia o descanso**, según prescripción facultativa, será reprimido con prestación de servicio comunitario de cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no concurren circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como delito. Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios a ochenta jornadas cuando la víctima sea menor de catorce años o la lesión se produzca como consecuencia de un hecho de violencia familiar, o el agente sea el tutor, guardador o responsable de aquel.”

O también las faltas contra el patrimonio, dentro de las cuales se destaca el hurto simple y el daño, y al decir de su artículo 444°: “El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185 y 205, cuando la acción recae sobre un bien **cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital**, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado.”

3.2.2.4. NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO – LEY N° 29497

Conforme a al artículo 1° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, los juzgados de paz letrados conocen:

1. En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.

2. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador, en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía.

3. Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.

3.2.3. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS O MIXTOS

3.2.3.1 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Según el artículo 49° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial los Juzgados Civiles conocen:

1.- De los asuntos en materia civil, que no sean de competencia de otros Juzgados Especializados.

Los Juzgados Penales conocen (artículo 50°):

1.- De los procesos penales de su competencia, con las facultades y los trámites señalados por ley;

Los Juzgados de Trabajo conocen (artículo 51°):

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño emergente, lucro cesante o daño moral incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.

c) Las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público.

d) Los títulos ejecutivos cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Mientras que los Juzgados de Familia conocen:

a) Las pretensiones relativas a las disposiciones generales del Derecho de Familia y a la sociedad conyugal, contenidas en las Secciones Primera y Segunda del Libro III del Código Civil y en el Capítulo X del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes.

b) Las pretensiones concernientes a la sociedad paterno-filial, con excepción de la adopción de niños adolescentes, contenidas en la Sección Tercera del Libro III del Código Civil, y en los Capítulos I, II, III, VIII y IX del Libro Tercero

del Código de los Niños y Adolescentes y de la filiación extramatrimonial prevista en el artículo 402 inciso 6) del Código Civil.

c) Las pretensiones referidas al derecho alimentario, contenidas en el Capítulo I del Título I de la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil y en el Capítulo IV del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes.

d) Los procesos no contenciosos de inventarios, administración judicial de bienes, declaración judicial de desaparición, ausencia o muerte presunta y la inscripción de partidas a que se refiere la Sección Sexta del Código Procesal Civil, si involucran a niños o adolescentes; así como la constitución de patrimonio familiar si el constituyente es un menor de edad.

3.2.3.2. CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Los juzgados civiles conocen en vía abreviada las demandas cuyo petitorio supera las quinientas unidades de referencia procesal (Artículo 488°); en vía sumarísima conoce sobre los procesos de desalojo (artículo 547°); también conoce los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supera las cien unidades de referencia procesal (artículo 690-B), y también es de su competencia el trámite de procesos no contenciosos (artículo 750°); entre otros.

3.2.3.3. NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

De acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal los juzgados especializados en materia penal son competentes para conocer los procesos por delitos, dentro de los que se puede nombrar al delito de lesiones, hurtos, etc.

3.2.3.4. NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

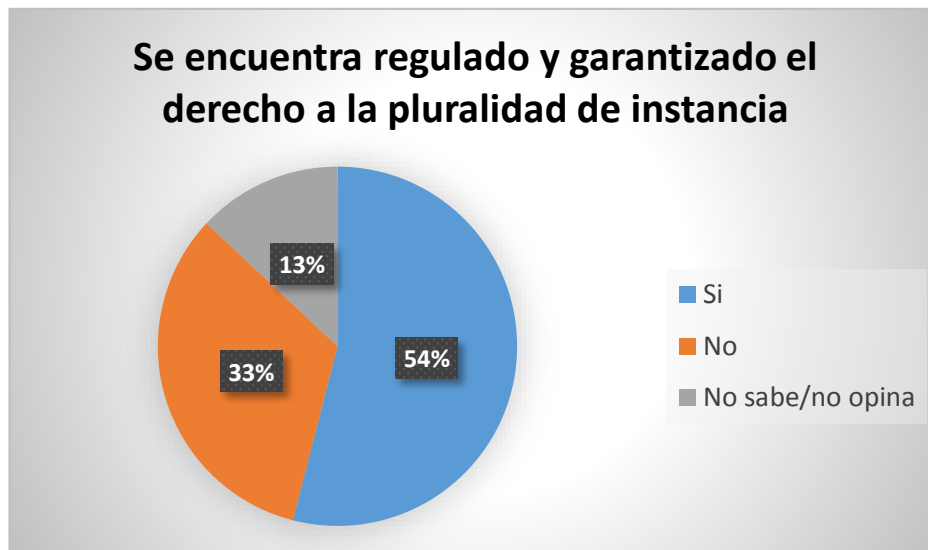
En interpretación de los artículos 1° y 2° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, los juzgados especializados de trabajo conocen de las pretensiones sobre obligaciones de dar o en procesos ejecutivos, cuando la cuantía es superior a cincuenta unidades de referencia procesal.

Como se puede advertir tanto en los juzgados de paz letrado como en los juzgados especializados y/o mixtos, se discuten pretensiones con relevancia jurídica dado que en ambos está en juego derechos de naturaleza constitucional, como por ejemplo, la propiedad, derechos laborales, asuntos de familia, etc.; por tanto merecen ser resguardados en la misma medida y oportunidades.

3.3. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS PRACTICADAS

Ahora bien, en el presente análisis se consignarán los resultados obtenidos a partir de las encuestas practicadas a cien personas, las mismas que por estar relacionadas al campo del derecho conocen en algo el tema.

Gráfico N° 01



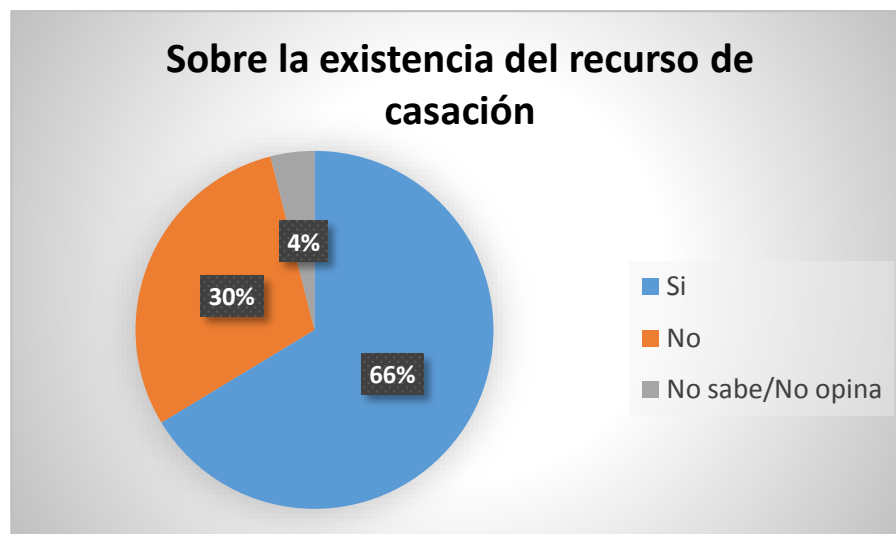
Fuente: Elaboración propia de la autora, julio 2017

En el presente gráfico se ha sometido a opinión de los encuestados si en nuestro sistema la pluralidad de instancia se encuentra regulado y garantizado.

Como podrá apreciarse un 54% de los encuestados, indico que el derecho en mención si se encuentra regulado y garantizado; sin embargo, se observa también que el 33% indica que nuestro sistema no regula y no garantiza este derecho, así como un 14% que no sabe/ no opina, lógicamente este última referencia porcentual en una interpretación en contrario, significa que para ellos no está bien regulado; por tanto, en realidad sería un 47% que no estaría conforme con la regulación normativa sobre pluralidad de instancia en nuestro

sistema. En todo caso, si solo tomamos ese 33% es evidente que es una muestra porcentual considerable frente al 54% que no debe pasar desapercibido, lo que quiere decir que para un gran sector la normatividad sobre el aspecto recursivo, no estaría resguardando íntegramente los derechos discutidos en los procesos judiciales.

Gráfico N° 02

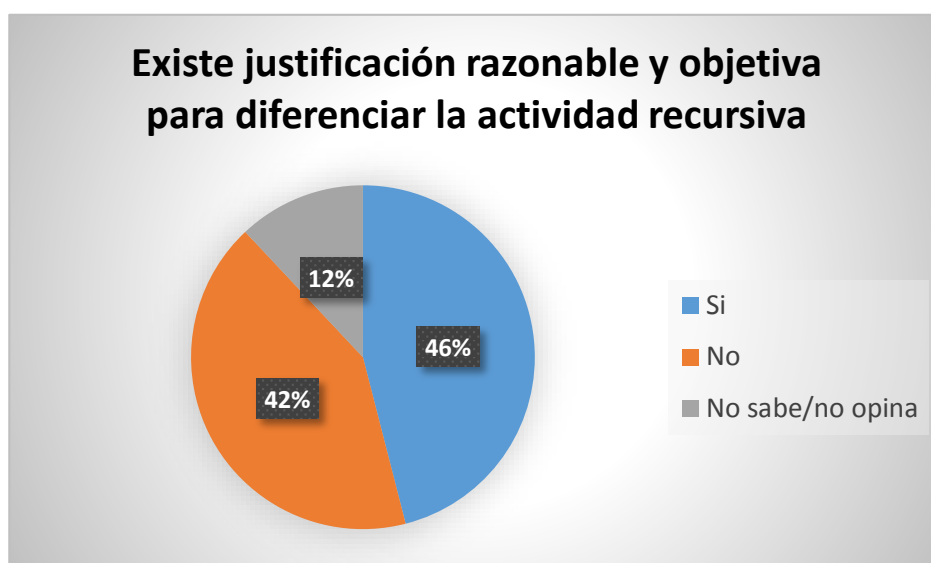


Fuente: Elaboración propia de la autora-julio 2017

A partir del presente gráfico podemos advertir que frente a la pregunta si está de acuerdo que en nuestro sistema siga existiendo el recurso extraordinario de casación, se obtuvo como resultado que un 66% está de acuerdo con que siga existiendo el recurso de casación, frente a un 33% que opina lo contrario, y finalmente un 4% que no sabe/no opina.

De acuerdo a este resultado se confirma que hay necesidad de que un tercer órgano jurisdiccional revise el proceso, brindando mayor seguridad a las decisiones judiciales. Y solo así, según el resultado obtenido los justiciables se sentirían conformes con la decisión final, sea a favor o en contra.

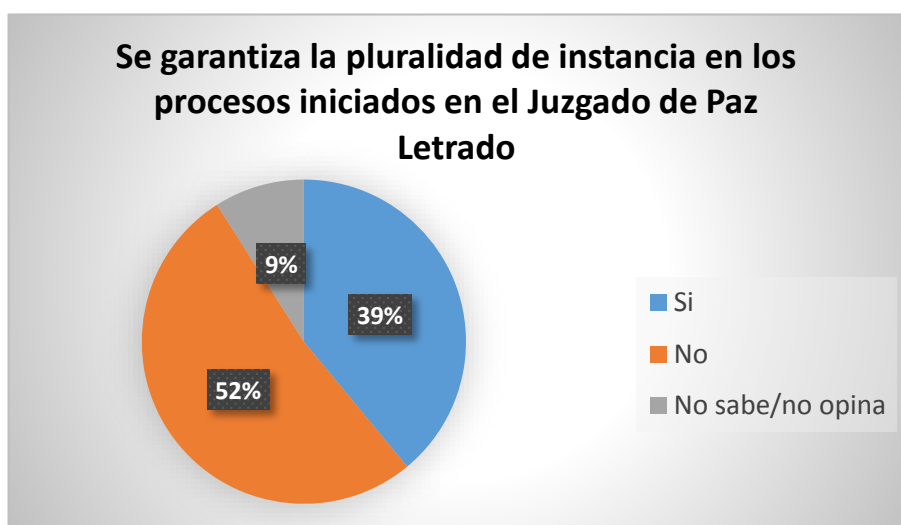
Gráfico N° 03



Fuente: Elaboración propia de la autora-julio 2017

Con el presente gráfico se ha querido establecer si existen razones para no permitir un tercer recurso en procesos iniciados en los Juzgados de Paz Letrado, y si para los iniciados en juzgados especializados y/o mixtos; aparentemente según lo obtenido un sector mayoritario ha señalado que si existen razones para hacer esa diferenciación frente a un 42% que no; no obstante, la brecha es muy corta y además un 42% es una cifra que tampoco quita la importancia de permitir un tercer recurso en procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado.

Gráfico N° 04

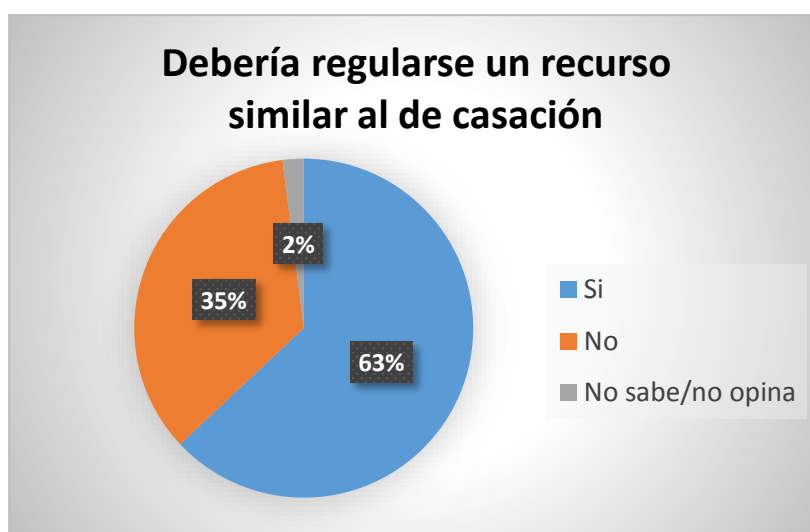


Fuente: Elaboración propia de la autora-julio 2017

En el presente gráfico podemos advertir que respecto a la pregunta de si la pluralidad de instancia en procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado se ve garantizado solamente con la doble instancia, a diferencia de los iniciados en Juzgados Especializados y/o Mixtos donde se puede promover el recurso de casación, un 52% indicó que no se encuentra garantizado demostrado con ello su disconformidad frente a la desigualdad que la misma Ley ha determinado; mientras que un 39% consideró que si se encuentra garantizado, y sólo un 9% no sabe/no opina.

Se puede indicar que sin entrar al análisis de los resultados, hay una exigencia hacia al Estado para reformular la legislación acerca de los medios impugnatorios con un tratamiento igual en todas las instancias.

Gráfico N° 05



Fuente: Elaboración propia de la autora-julio 2017

Este gráfico guarda bastante relación con el gráfico N° 04, pues frente a la pregunta de que si debe regularse un recurso extraordinario similar al recurso de casación para revisar procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, el 63% de los encuestados respondió que sí, lo cual demuestra la necesidad de regular un recurso extraordinario con la finalidad de dar un mismo tratamiento a los procesos que inician en los Juzgados Especializados y/o Mixtos.

En tanto que un 35% indicó que no es necesario y un 2% que no sabe/no opina, lo cual no enerva el sentir mayoritario de los encuestados.

Gráfico N° 06



Fuente: Elaboración propia de la autora-julio 2017

Con el siguiente gráfico, respecto a la pregunta de que si los procesos tramitados ante un Juzgado de Paz Letrado son menos importante que los procesos iniciados en los Juzgados Especializados y/o Mixtos, un rotundo 79% respondió que no, frente a un 14% que opinó que sí, situación que demuestra que al tratarse de procesos con la misma importancia y relevancia se le debería dar el mismo tratamiento y oportunidades en cuanto al tema de medios impugnatorios.

3.4. ANÁLISIS DE SENTENCIAS

En esta parte de la investigación, se analizará diferentes sentencias emitidas por Juzgados de Paz Letrado y Especializados o Mixtos, para verificar el grado de importancia de las materias discutidas en estos procesos, y con ello verificar si existe vulneración al derecho a la igualdad.

Siguiendo con el desarrollo de la presente investigación, se ha propuesto analizar sentencias sobre la misma materia tramitadas en los Juzgados de Paz Letrado y Especializado y/o Mixtos, con la finalidad de comparar el desarrollo que se les da.

Así en **materia civil** tenemos:

TABLA N° 01

	Juzgado de Paz Letrado	Juzgado Especializado y/o Mixto
Número de Expediente	02184-2011-0-0601-JP-CI-05	0769-2013-0-0601-JR-CI-02
Órgano Jurisdiccional	Quinto Juzgado de Paz Letrado de Cajamarca	Segundo Juzgado Especializado Civil de Cajamarca
Pretensión	Indemnización por responsabilidad civil extracontractual- accidente de tránsito	
Cuantía del petitorio	S/. 150,000.00 (ciento cincuenta mil soles), más el pago de intereses legales, costas y costos procesales.	S/. 308, 821.37 (trescientos ocho mil ochocientos veintiuno con 37/100 soles), más intereses legales, costas y costos procesales
Asunto evaluado en la sentencia	En ambos casos el Juez analiza los elementos de la responsabilidad civil extracontractual como son: antijuricidad, daño causado, nexo causal y los factores atribución.	

Fallo	El juzgador ordena a la entidad demandada la suma de s/. 85, 530.04 (ochenta y cinco mil quinientos treinta con 04/100 soles) por responsabilidad civil extracontractual a favor del demandante.	El juzgador ordena a la entidad demandada la suma de s/. 97, 915.08 (noventa y siete mil novecientos quince con 08/100 soles) por responsabilidad civil extracontractual a favor del demandante.
--------------	--	--

En **materia laboral** tenemos:

TABLA N° 02

	Juzgado de Paz Letrado	Juzgado Mixto
Número de Expediente	0741-2016-0-0601-JP-LA-01	0173-2010-0-0601-JR-LA-01
Órgano Jurisdiccional	Sétimo Juzgado de Paz Letrado de Cajamarca	Juzgado Mixto de Cajamarca
Pretensión	Pago de beneficios sociales	
Cuantía del petitorio	S/. 13, 857.54 (trece mil ochocientos cincuenta y siete mil con 54/100 soles), por conceptos de gratificación, vacaciones trucas y compensación por tiempo de servicios.	S/. 43, 626.50 (cuarenta y tres mil seiscientos veintiséis con 50/100 soles) por conceptos de gratificación, vacaciones trucas y compensación por tiempo de servicios.

Asunto evaluado en la sentencia	En ambos casos el Juez analiza la prestación personal de servicios, el vínculo laboral, remuneración computable y el cálculo de la remuneración y beneficios sociales.	
Fallo	El juzgador ordena a la entidad demandada la suma de s/. 6, 746.43 (seis mil setecientos cuarenta y seis con 43/100 soles) por beneficios sociales al demandante.	El juzgador ordena a la entidad demandada la suma de s/. 32, 213.72 (treinta y dos mil doscientos trece con 72/100 soles) por beneficios sociales al demandante.

En **materia familia**, tenemos:

TABLA N° 03

	Juzgado de Paz Letrado	Juzgado Mixto
Número de Expediente	0155-2016-0-JP-FC-02	0058-2015-0-0601-SP-FC-01
Órgano Jurisdiccional	Segundo Juzgado de Paz Letrado de Cajamarca	Juzgado Mixto de La Florida
Pretensión	Alimentos	
Cuantía del petitorio	S/. 500.00 soles	S/.300.00 soles

Asunto evaluado en la sentencia	En ambos casos el Juez analiza si le corresponde al menor que se le otorgue una pensión alimenticia.	
Fallo	El juzgador ha resuelto fundada en parte la demanda ordenando que el emplazado acuda con una pensión de doscientos ochenta soles (s/. 280.00) a su menor hijo de manera mensual y adelantada.	Se ha declarada fundada en parte la demanda ordenándose al emplazado cumpla con asistir a su menor hijo con ciento ochenta con 00/100 soles (S/.180.00) mensuales.

En **materia penal** se advierte:

TABLA N° 04

	Juzgado de Paz Letrado	Juzgado Mixto
Número de Expediente	00260-2014-0-0601-JP-PE-04	1596-2015-1-0601-JR-PE-01
Órgano Jurisdiccional	Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Cajamarca	Quinto Juzgado Penal Unipersonal
Pretensión	Faltas contra el patrimonio	Delito contra el patrimonio
Asunto evaluado en la sentencia	En ambos casos el Juez analiza la conducta típica, antijurídica y culpable, así como la tipicidad subjetiva y objetiva, y la sanción a imponer.	

<p>Fallo</p>	<p>Se condenó al acusado como autor de falta contra el patrimonio en la modalidad de daños, prevista en el primer párrafo del art. 444 del Código Penal, a cincuenta jornadas de prestación de servicio comunitario y al pago de setecientos soles por reparación civil a favor de la persona agraviada.</p>	<p>Se ha condenado al acusado como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto simple a cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida, en su ejecución por el periodo de un año con sujeción al cumplimiento de reglas de conducta. Así como al pago de una reparación civil de cincuenta mil soles.</p>
---------------------	--	---

Como se puede verificar de los cuadros, las pretensiones demandadas tanto en juzgado especializado como en juzgado de paz letrado son las mismas, por ejemplo en ambos juzgados se ventilan las pretensiones de indemnización por responsabilidad civil extracontractual, pago de beneficios sociales, alimentos, y en materia penal asuntos relativos al bien jurídico patrimonio.

Hasta aquí estimamos que a partir de lo señalado en los gráficos detallados precedentemente, se demuestra una gran necesidad y una demanda relativa a que también se prevea la revisión de los procesos iniciados en los Juzgados de Paz Letrado por un tercer órgano jurisdiccional lo cual es coherente con los principios que inspira la constitución, en tanto el Estado debe proveer de todos los mecanismos legales (recursivos) para brindar una eficiente y satisfactoria

administración de justicia, que en nuestros días y como lo seguirá siendo, es un servicio fundamental y básico con el que debe contar la sociedad.

Es importante señalar que hay sustento para regular un recurso extraordinario similar a la casación en los procesos iniciados en los Juzgados de Paz Letrado, pues de un análisis total de los gráficos la mayoría está de acuerdo con la propuesta que la investigadora propone, esto es, que se regule una tercera instancia a los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado en igual condición que los Juzgados Especializados y/o Mixtos.

Como es de observarse, nuestro término de comparación está constituido por las competencias atribuidas a los juzgados especializados; quienes según se indicó, conocen por ejemplo de pretensiones con contenido patrimonial (obligaciones de dar suma de dinero), no patrimonial (desalojos, no contenciosos, temas alimentarios, etc), penal (lesiones, hurto, etc.). Pretensiones cuya naturaleza son las mismas que se han atribuido a los Juzgados de Paz Letrado, pues la normatividad procesal dispone que estos juzgados son competentes para tramitar pretensiones de contenido patrimonial (obligación de dar suma de dinero), no patrimonial (no contenciosos, desalojos, asuntos alimentarios), penal (faltas como lesiones, hurtos, etc.).

En tal sentido, si ambos órganos jurisdiccionales (juzgado de paz letrado y juzgado especializado) asumen competencia para tramitar procesos de la misma naturaleza (nótese que en ciertos casos solo existe diferencia en el monto del petitorio) sería razonable y justo que el tratamiento en materia recursiva sea el mismo, por qué limitar este derecho cuando el proceso nace

en un Juzgado de Paz Letrado; la diferenciación que nuestra constitución acepta es la que se sustancia en bases razonables y objetivas, no cuando se produce al antojo del legislador, o porque se pretende conceder competencias supuestamente “lógicas y ordenadas”; a pesar, que ningún derecho es absoluto, la limitación detectada no es permitida por nuestra Norma Fundamental. Al ser así, no queda más que conceder a los justiciables ese tercer recurso (extraordinario) para que su proceso sea revisado por un tercer órgano jurisdiccional, como lo sería por ejemplo la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia respectiva.

3.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS

La hipótesis de la presente investigación, ha quedado comprobada plenamente en mérito al reconocimiento y verificación de cada una de las variables. Así pues, se ha demostrado que nuestra normatividad legal (normas procesales) atentan con el espíritu y sentido de la Constitución política, quien no contempla la figura de la “doble instancia” sino de la pluralidad de instancia, es decir, brinda una protección más amplia al justiciable, y no puede ser de otro modo, pues seguramente la Constitución ha previsto que siempre debe existir un tercer dirimente que decida como última instancia el resultado del proceso; y tal posibilidad no solo puede ser permitida cuando los procesos se inician en Juzgados Especializados sino también, en Juzgados de Paz Letrado. De esta manera y notorio que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la impugnación de resoluciones judiciales; más aún cuando –de manera referencial pero no por ello menos relevante- se ha extraído datos objetivos (encuestas y sentencias varias) relativos a la

investigación, según los cuales ambos juzgados conocen las mismas pretensiones y en su mayoría los encuestados han concluido que, en nuestro sistema, no está bien regulado el tema de medios impugnatorios, y que debe existir un tercer recurso para revisar los procesos iniciados en Juzgado de Paz Letrado.

Asimismo, se ha demostrado que no hay razón objetiva para diferenciar en materia recursiva, por cuanto en ciertos procesos y sobre la misma pretensión (obligación de dar suma dinero) a ser conocido por un juzgado de paz letrado y juzgado especializado, solamente se determinante la cuantía, y a veces es mínima la diferencia, *verbigracia*, en vía abreviada, si son quinientas unidades de referencia procesal se tramitarán en el juzgado de paz letrado juzgado y si son quinientas más un céntimo, se tramitarán ante un juzgado especializado; o sea, por solo un céntimo dicho proceso podría ser revisado vía tercer recurso (casación) a diferencia del anterior; estamos convencidos que ese hecho no puede ser determinante para recortar la posibilidad de acudir a una tercera instancia cuando el proceso es iniciado en un Juzgado de Paz Letrado.

De igual manera queda acreditado que tanto el juez de paz letrado como el juez especializado –al conocer pretensiones de la misma naturaleza- motivan sus decisiones (sentencias) de la misma manera, no por ser de inferior grado están relevados de su fundamentación, más bien lo deben hacer al igual que lo hace un Juez Especializado, una Sala Civil o la Corte Suprema.

Consecuentemente, atendiendo a nuestros objetivos planteados y a las hipótesis formuladas, no queda más que concluir que estas últimas se han demostrado en todos sus extremos.

3.6. PROPUESTA LEGISLATIVA

LEY QUE INCORPORA EL RECURSO DE REVOCACIÓN

Artículo 1°: Finalidad.

El recurso especial de revocación permite unificar los criterios jurisdiccionales en el Distrito Judicial respectivo, concerniente a los procesos iniciados en los Juzgados de Paz Letrados.

Artículo 2°: Competencia.

El recurso de revocación agota la vía judicial de los procesos iniciados en los Juzgados de Paz Letrados y su conocimiento es exclusiva de las Salas del Distrito Judicial correspondiente.

Artículo 3°: Requisitos de procedencia.

El recurso de revocación procede únicamente contra:

- a) Las sentencias que en segunda instancia emiten los juzgados especializados.
- b) Los autos que ponen fin al proceso emitidos por los juzgados especializados.
- c) Que el impugnante no haya consentido la resolución de primera instancia que le es desfavorable y que ha sido confirmada por el juzgado especializado.
- d) El plazo para formularlo es de cinco días hábiles si se trata de sentencias y tres días, en el caso de autos.

Artículo 4°: Requisitos de forma:

- a) Se interpone ante el mismo órgano jurisdiccional que emite la resolución impugnada, quien deberá calificar el recurso, sin perjuicio de hacerlo también el superior.

- b) Se debe adjuntar el arancel respectivo.
- c) Precisar la causal específica que sustenta el recurso y fundamentarla.
- d) Indicar en qué ha consistido la afectación al debido proceso.

Artículo 5°: Causales.

Se promueve el recurso de revocación en los siguientes supuestos:

- a) La interpretación indebida de la norma jurídica (sustantiva o procesal) o la no aplicación de los acuerdos distritales adoptados por juzgados especializados o las salas pertinentes.
- b) Contravención al debido proceso.

Artículo 6°: Inadmisibilidad.

Será declarado inadmisibile el recurso si no cumple con algún requisito contemplado en el artículo 4° de esta Ley, y la parte impugnante tendrá el plazo de tres días hábiles para subsanar el defecto, caso contrario su recurso será rechazado.

Artículo 7°: Vigencia.

La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial el peruano.

Artículo 8°: Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas todas las disposiciones normativas que se opongan a la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ley es de aplicación inmediata, por lo que se aplicará a los procesos en trámite que a la fecha de su entrada en vigencia aún se encuentren dentro de los plazos de impugnación previstos en el artículo 3° numeral d) de la presente Ley.

CONCLUSIONES

-En un Estado Constitucional de Derecho sí es permitido hacer diferencias pero siempre que esa diferenciación no resulte contrario a principios de carácter imperativo y cuando solos las razones sean necesarias y objetivas, no puede hacer diferencias cuando la naturaleza de las cosas pueden resultar afectadas.

-Hacer diferencias –en materia recursiva- entre procesos iniciados en juzgados de paz letrado y juzgados especializados, de algún modo implica quitarse relevancia jurídica a la labor trascendental de los primeros, pues debe comprenderse que sus decisiones judiciales tienen los mismos límites y deben ser dictadas dentro los mismos parámetros.

-Entre dos opciones: hacer diferenciación para recortar un derecho y preferir darle mayor protección, debe preferirse la segunda opción, en tal sentido, no debe privarse un tercer recurso en los procesos iniciados en juzgados de paz letrado.

-No se afecta al sistema jurídico normar este tercer recurso, más bien se estaría procediendo conforme lo manda la Constitución Política y que mejor permitiendo un tercero dirimente: garantizar la pluralidad de instancia.

-Existe una gran necesidad para que se prevea la revisión de los procesos iniciados en los Juzgados de Paz Letrado por un tercer órgano jurisdiccional, pues así lo exige la colectividad y un verdadero Estado Constitucional de Derecho.

-La regulación de un tercer recurso para revisar dichos procesos es coherente con los principios que inspira la Constitución, en tanto el Estado debe proveer de todos los mecanismos legales (recursivos) para brindar una eficiente y satisfactoria administración de justicia, que en nuestros días y como lo seguirá siendo, es un servicio fundamental y básico con el que debe contar la sociedad.

RECOMENDACIONES

-Sería razonable que el poder legislativo modifique la normatividad procesal disponiendo la regulación de un tercer recurso para que los procesos iniciados en juzgados de paz letrados sean revisados por un tercer órgano jurisdiccional.

-Los entes que por mandato constitucional tienen iniciativa legislativa deberían hacer llegar esta propuesta al legislativo para contar con este mecanismo legal en materia recursiva (tercer recurso).

-En general –antes de hacer diferencias en el quehacer jurídico- se debe evaluar con cuidado los impactos que puede generar en los justiciables.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bernalles Ballesteros, Enrique. (1999) *La Constitución de 1993*. Editorial RAO SRL; 5ta. Edición; Lima.
2. Bon Pierre. (2016). *Derecho Administrativo y justicia constitucional*. Lima: Palestra SAC.
3. Bustamante Alarcón, Reynaldo. (2015). *Derechos Fundamentales y Proceso Justo*. Lima: Aras Editores EIRL.
4. Castañeda Otsu, Susana Ynes. *Derecho Procesal Constitucional, Tomo I*. Jurista Editores EIRL. Segunda edición, Julio del 2004. Lima – Perú.
5. Castillo Córdova, Luis. *Elementos de una Teoría General de los Derechos Constitucionales*. Universidad de Piura. ARA Editores EIRL, 2003, Perú.
6. EL COMERCIO: *Libro de Estilo de El Comercio*. Lima, Empresa Editora El Comercio.1998.
7. Fernández Sessarego. Citado en la Revista de Investigación “AVANCES”, año V, N° 5, UPAGU; Editora Grijley Cajamarca, 2011.
8. García Belaunde, Domingo. *De La Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional* (2007). Grijley. Lima.
9. García Toma, Víctor. 2008. *Los Derechos Fundamentales en el Perú*. Primera Edición. Juristas Editores. 2005.
10. Huapaya Tapia, Ramón. (2006). *Tratado del Proceso Contencioso Administrativo*. Lima: Jurista Editores EIRL.
11. Landa Arroyo, César (2010). *Los Derechos Fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*.

12. Martínez-Puljate Antonio Luis, De Domingo Pérez Tomas. (2010). Los Derechos Fundamentales en el sistema constitucional- Teoría general implicaciones prácticas. Lima: Palestra Editores SAC.
13. Palacio Pimentel, H. Gustavo (1997); Manual de Derecho Civil, Tomo II – Volumen 2, Editorial Huallaga EIRL Segunda Edición, Lima Perú.
14. Priori Posada, Giovanni. (2009). Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Lima: Ara Editores EIRL.
15. Priori Posada, Giovanni. (2014). Efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales. Lima: Palestra SAC.
16. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*. Madrid, RAE, vol. I, vigésima segunda edición. 2001.
17. Rubio Correa, Marcial (2005) *La Interpretación de la Constitución Según el Tribunal Constitucional*. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú.
18. RUBIO CORREA, Marcial (1999) *Estudios de la Constitución Política de 1993*. Tomo I. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
19. Ugaz Sánchez-Moreno, José Carlos; Prensa juzgada, Treinta años de juicios a periodistas peruanos 1969-1999.

LINKOGRAFÍA

1. Espinoza Otiniano, Diómedes Hernando: “*Efectos de la Condena del Absuelto en Aplicación de los arts. 419 Inc.2 y 425 Inc. 3 literal B del Código Procesal Penal del 2004*”,
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/968/1/ESPINOLA_DIOMEDES_CONDENA_ABSUELTO_APLICACION_ART%20419_INC%202_Y_425_INC%203_LITERAL_B_DEL_2004.pdf
2. Enciclopedia libre Wikipedia. *El recurso de casación* en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_casacion
3. Huerta Guerrero, Luis Alberto. “*El derecho a la igualdad*” en:
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/7686-30153-1-PB.pdf>
4. Martel Chang, Rolando Alfonso. “*Tutela Jurisdiccional Efectiva*” en:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/martel_c_r/titulo2.pdf
5. Núñez del Prado Chaves, Fabio. “*Desmitificando Mitos: Análisis Económico de la Doble Instancia en el Proceso Civil Peruano*” en:
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-DesmitificandoMitos-5081173.pdf>
6. Sánchez López, Luis Alberto. *La Tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso* en:
https://historico.pj.gob.pe/%20..%5C.%5Ccortesuperior%5CPiura%5Cdocumentos%5CART_CSJ_PIURA_TUTELA_120907.pdf
7. Valcárcel Laredo, Lilia Judith. “*La Pluralidad de Instancia*” en:
<http://liliajudithvalcarcellaredo.blogspot.pe/2008/07/la-pluralidad-de-instancia.html>

ANEXOS

ENCUESTA – TESIS

Finalidad: Con la presente encuesta se pretende determinar si la regulación de los recursos impugnatorios en nuestro sistema jurídico cuenta con bases objetivas para hacer diferenciación en su aplicación a los procesos judiciales.

DESTINATARIO: MAGISTRADOS

-Marque con un aspa (X) la opción que crea conveniente.

1. **¿Creed usted que en nuestro sistema está bien regulado y garantizado el derecho a la pluralidad de instancia en todos los procesos?**

SI () NO ()

2. **¿Está de acuerdo que en nuestro sistema siga existiendo el recurso extraordinario de casación?**

SI () NO ()

3. **¿Según su criterio, cree que existe justificación razonable y objetiva para hacer diferencia –en materia recursiva- entre procesos iniciados en juzgados de paz letrado y juzgados especializados o mixtos?**

SI () NO ()

4. **¿Para usted, la pluralidad de instancia en procesos iniciados en juzgados de paz letrado se ve garantizado solamente con la doble instancia, a diferencia de los iniciados en juzgados especializados donde se puede promover recurso de casación?**

SI () NO ()

5. ¿Cree usted que debe regularse un recurso extraordinario similar al recurso de casación, para revisar procesos iniciados en juzgados de paz letrado?

SI () NO ()

6. ¿Según su experiencia en la casuística judicial ha notado descontento de los justiciables o ha tenido conocimiento de que ellos sienten descontento al no tener la posibilidad de que sus procesos promovidos en juzgados de paz letrado sean revisados por un tercero dirimente (vía recurso extraordinario)?

SI () NO ()

7. ¿Usted cree que los procesos tramitados ante un juzgado de paz letrado son menos importantes que los procesos iniciados en juzgados especializados o mixtos?

SI () NO ()

ENCUESTA – TESIS

Finalidad: Con la presente encuesta se pretende determinar si la regulación de los recursos impugnatorios en nuestro sistema jurídico cuenta con bases objetivas para hacer diferenciación en su aplicación a los procesos judiciales.

DESTINATARIO: ABOGADOS LITIGANTES

-Marque con un aspa (X) la opción que crea conveniente.

- 1. ¿Creed usted que en nuestro sistema está bien regulado y garantizado el derecho a la pluralidad de instancia en todos los procesos?**

SI () NO ()

- 2. ¿Está de acuerdo que en nuestro sistema siga existiendo el recurso extraordinario de casación?**

SI () NO ()

- 3. ¿Según su criterio, cree que existe justificación razonable y objetiva para hacer diferencia –en materia recursiva- entre procesos iniciados en juzgados de paz letrado y juzgados especializados o mixtos?**

SI () NO ()

- 4. ¿Para usted, la pluralidad de instancia en procesos iniciados en juzgados de paz letrado se ve garantizado solamente con la doble instancia, a diferencia de los iniciados en juzgados especializados donde se puede promover recurso de casación?**

SI () NO ()

- 5. ¿Creed usted que debe regularse un recurso extraordinario similar al recurso de casación, para revisar procesos iniciados en juzgados de paz letrado?**

SI ()

NO ()

6. ¿Según su experiencia profesional sus patrocinados sienten descontento al no tener la posibilidad de que sus procesos iniciados en juzgados de paz letrado sean revisados por un tercero dirimente (vía recurso extraordinario)?

SI ()

NO ()

7. ¿Usted cree que los procesos tramitados ante un juzgado de paz letrado son menos importantes que los procesos iniciados en juzgados especializados o mixtos?

SI ()

NO ()

8. ¿Cómo abogado, estaría de acuerdo que un proceso iniciado en juzgado de paz letrado tenga la posibilidad de ser revisado por un tercer órgano jurisdiccional vía un recurso extraordinario?

SI ()

NO ()

ENCUESTA – TESIS

Finalidad: Con la presente encuesta se pretende determinar si la regulación de los recursos impugnatorios en nuestro sistema jurídico cuenta con bases objetivas para hacer diferenciación en su aplicación a los procesos judiciales.

DESTINATARIO: JUSTICIABLES

-Marque con un aspa (X) la opción que crea conveniente.

Cuando un proceso se inicia en un juzgado civil o juzgado de familia, etc., usted tiene la posibilidad de apelar (esta apelación lo resuelve la sala civil) y si usted no está conforme con la decisión de la sala, puede interponer otro recurso (llamado casación) y su proceso se envía a la Corte Suprema de Justicia (Lima) para que decida su proceso como “última y tercera instancia”. Pero cuando usted inicia un proceso ante un juzgado de paz letrado, usted solamente puede interponer apelación y su proceso se envía al juzgado civil o al juzgado de familia, etc., y ya no tiene la posibilidad de interponer otro recurso, porque el juzgado civil o de familia son última instancia.

1. **¿Usted cree que está bien esa diferencia que hace ley, que cuando el proceso inicia en juzgado especializado existen “tres instancias”, pero cuando inicia su proceso en juzgado de paz letrado solo existen dos instancias?**

SI () NO ()

2. **¿Cree usted que debe existir una “tercera instancia” para los procesos iniciados en juzgado de paz letrado?**

SI () NO ()

3. **¿Usted se sentiría más seguro de que su proceso iniciado en juzgado de paz letrado sea revisado por un tercer órgano jurisdiccional?**

SI () NO ()

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Fecha:
Hora de inicio:
Hora de cierre:
Institución:
Nombre del observador:
Nombre de los asistentes:
Lugar de observación:
Descripción de la observación:
Observación:

TEMA: “EL DERECHO A LA IGUALDAD E IMPUGNACIÓN EN JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y ESPECIALIZADOS”

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología		
				Método	Técnica	Muestra
¿Debe regularse un medio impugnatorio extraordinario para que la Sala Superior del Distrito Judicial respectivo, revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrados, en idéntica función al recurso de casación que procede cuando	OBJETIVO GENERAL: Determinar si la no regulación de un medio impugnatorio extraordinario, para que la Sala Superior respectiva revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, vulnera el derecho a la	HIPOTESIS Hi: La no regulación de un medio impugnatorio extraordinario, para que la Sala Superior respectiva revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, vulnera el derecho a la igualdad, en	<u>Independiente(s):</u> Limitaciones al derecho de impugnación extraordinaria en los procesos iniciados en el juzgado de paz letrado <u>Dependiente(s):</u> Vulneración del derecho a la igualdad con relación a los procesos iniciados	<u>El tipo de investigación</u> es: Básica y Aplicada, Cualitativa, descriptiva- y analítica. Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron los siguientes métodos: Método Dialéctico <ul style="list-style-type: none">▪ Sus causas y sus efectos▪ Se analizará sus contradicciones internas.<ul style="list-style-type: none">▪ Sus	a) <u>Técnica de recolección de datos:</u> Análisis Documental: <ul style="list-style-type: none">▪ Ficha de libro por autor▪ Ficha de libro por tema▪ Ficha de reseña de libro▪ Ficha de artículo de revista▪ Ficha de artículo a periódico▪ Ficha textual	La muestra que se recogió respecto a los expedientes judiciales fue la de criterio intencional, un proceso por materia; asimismo, en cuanto a las encuestas se recogió los datos de aquellos que cumplieran el perfil de ser operador

el proceso se inicia en juzgados especializados?	<p>igualdad, en relación a la posibilidad que se tiene cuando –vía casación- se puede controlar un proceso originado en un Juzgado Especializado.</p> <p>ESPECÍFICO: Analizar el contenido de los Derechos Fundamentales a la igualdad, tutela jurisdiccional efectiva y pluralidad de instancia.</p> <p>Explicar los alcances de los principios de seguridad jurídica y de justicia.</p>	<p>relación a la posibilidad que se tiene cuando –vía casación- se puede controlar un proceso originado en un Juzgado Especializado.</p> <p>Ho: La no regulación de un medio impugnatorio extraordinario, para que la Sala Superior respectiva revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, no vulnera el derecho a la igualdad, en relación a la posibilidad que se tiene cuando –vía casación- se puede</p>	en los Juzgados Especializados	<p>Interrelaciones, sus interdependencias.</p> <p>Método de la Concreción</p> <ul style="list-style-type: none"> Lo abstracto debe conducirnos o lo concreto por medio del pensamiento. <p>Método Analítico</p> <ul style="list-style-type: none"> Descomponer el hecho objeto de investigación en sus elementos componentes, describirlos, examinarlos, enumerarlos y reintegrarlos. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de resumen o síntesis <p>b) Técnicas de procesamiento de Datos:</p> <p>Procesamiento de datos Cualitativos</p> <ul style="list-style-type: none"> Critica y Discriminación de datos: Consistirá en validar o rechazar la información recogida, a través de revisar dato por dato, verificarlo, evaluar su consistencia y grado de confiabilidad esta etapa es considerada como trabajo de gabinete que nos permitirá clasificar la información. <p>Procesamiento de datos Cuantitativos:</p>	judicial o que de modo alguno tenga relación con la administración de justicia, así se encuestó a 25 magistrados (jueces y fiscales), 25 servidores jurisdiccionales (secretarios, asistentes, técnicos), 25 abogados (de oficio y libres) y 25 litigantes.
--	--	---	--------------------------------	---	--	---

	<p>Analizar la jurisprudencia y legislación del Derecho Comparado sobre los Derechos Fundamentales a la igualdad, tutela jurisdiccional efectiva y pluralidad de instancia. Diseñar una propuesta legislativa sobre la denominación y regulación del medio impugnatorio extraordinario en casos de los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrados.</p>	<p>controlar un proceso originado en un Juzgado Especializado.</p> <p>Ha: La no regulación de un medio impugnatorio extraordinario, para que la Sala Superior respectiva revise los procesos iniciados en Juzgados de Paz Letrado, podría vulnerar el derecho a la igualdad, en relación a la posibilidad que se tiene cuando –vía casación- se puede controlar un proceso originado en un Juzgado Especializado.</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Crítica y Discriminación de Datos. ▪ Vaciado al Cuadro de Frecuencia. ▪ Procesamiento estadístico de Datos. <p>Presentación de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Datos cualitativos: 	
--	--	--	--	--	--	--

5° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Jr. Del Comercio 712

EXPEDIENTE: 02184-2011-0-0601-JP-CI-02

MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
ESPECIALISTA : MARIA Y. PAJARES RONCAL
DEMANDADO : EMP. SERV. GRALES LAGUNA EL PEROL S.R.L.
DEMANDANTE : RIOS SANCHEZ, LUZ ISABEL y otro.

SENTENCIA [0354 - 2012]

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ

Cajamarca, veintiséis de octubre

Del año dos mil doce.

I.- ANTECEDENTES:

1.-Mediante escrito de folios 23 a 26, **Vitelio Bustamante Quintana y Luz Ysabel Ríos Sánchez** en representación de su menor hijo **Luis Fernando Bustamante Ríos** interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito contra **Milton Marín Sánchez y La Empresa Servicios Generales Laguna el Perol SRL**, solicitando un monto de **Ochenta Mil Nuevos Soles**, por concepto de daño emergente la cantidad de **Veinte Mil Nuevos Soles**, lucro cesante la cantidad de **Diez Mil Nuevos Soles** y por daño a la persona la cantidad de **Cincuenta Mil Nuevos Soles**, además del pago de intereses legales respectivos con costas y costos.

Argumenta que el 18 de febrero del 2011, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, su menor hijo **Luis Fernando Bustamante Ríos** de 07 años de edad fue objeto de un accidente de tránsito, atropellado por parte del vehículo de placa rodaje N° PD-9874 Pick Up, conducido por el ahora demandado, hecho que ocurrió en la intersección de las calles Unión y Tarapacá. Como consecuencia del accidente el menor sufrió hematomas parenquimales frontales, hematoma laminar yuxtadural o cortical bifrontal, fisuras frontales, hematomas de parte blandas de la región frontal derecha según las conclusiones de las tomografías que se adjuntan agrega que desde ocurrido el accidente los demandados se desentendieron de su obligación, haciéndose cargo de todos los gastos irrogados los recurrentes [demandantes], ello ha ocasionado que se hayan quedado sin trabajo para atender la pronta recuperación de su menor hijo.

2.-Por resolución dos de fecha 09 de marzo del 2012, que obra de folios 33 a 35 fue admitida a trámite la demanda en la vía proceso abreviado, confiriéndose traslado a

los demandados para que la contesten dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes en caso de no hacerlo.

3.- Mediante escrito que obra de folios 75 a 86, el demandado **Milton Marín Sánchez**, contesta la demanda, solicitando que se declare infundada la demanda; argumentando, que como conductor de la camioneta de placa de rodaje N° PD-9874 el día que ocurrió el accidente se encontraba desplazándose por el Jirón Unión, circulando a una velocidad de 15Km/h velocidad prudente, cuando en forma inesperada aparecieron dos menores conduciendo bicicletas trasladándose en dirección contraria -al sentido de la vía- sin contar con casco de seguridad ni con la supervisión de un adulto responsable, motivo por el cual opere el claxon para que, los menores tomen sus precauciones, al no hacer caso detuvo la camioneta para que los menores puedan desplazarse, cuando transitaba el menor **Luis Fernando Bustamante Ríos** a bordo de su bicicleta perdió el equilibrio e impacto sobre la puerta lateral derecha de la camioneta.

4.- La empresa demandada Servicios Generales Laguna El Perol S.R.L. debidamente representada por su apoderado **Wilmer Sánchez Marín** cumple con contestar la demanda, solicitando se la declare infundada; argumentando, que es falso que el menor **Luis Fernando Bustamante Ríos** haya sido atropellado por la camioneta de propiedad de propiedad de su representada, pues tal como se ha determinado a través de la investigación realizada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Cajamarca el accidente no ha sido atropello sino un impacto por parte del menor y su bicicleta contra el costado derecho de la camioneta específicamente por topetazo, hecho que se produce por una serie de factores de negligencia humana [víctima]; en consecuencia debe declararse infundada la demanda.

5.- Con resolución número tres de fecha 02 de mayo del 2012, que obra en folios 137 a 138, se tiene por contestada la demanda por parte de los demandados, por ofrecidos los medios probatorios, se declara saneado el proceso y se requiere a las partes procesales para que dentro del tercer día propongan su puntos controvertidos, de conformidad con lo señalado en el artículo 468° del Código Procesal Civil. En la misma resolución se admite la ampliación de la cuantía de la pretensión, presentado por los demandantes mediante escrito que obra en folio 136.

6.- El demandado con escrito de folios 144 a 146, la empresa demandada deduce nulidad de la resolución número tres, únicamente en el extremo que dispone la ampliación de la cuantía; nulidad que fuese resuelta mediante resolución número seis de fecha 14 de agosto del 2012, que obra en folios 162 a 165, declarando fundada, es decir, se declarar nulo el extremo de dicha resolución que ampliaba la

cuantía de la pretensión, en la misma resolución se fijan los puntos controvertidos, se admitieron los medios probatorios de las partes, y apreciándose de los medios probatorios ofrecidos se limitaban a documentales se prescindió de la audiencia de pruebas y se dispuso el juzgamiento anticipado del proceso; habiendo las partes presentado sus alegatos, el estado del proceso es el de emitir sentencia, la que se hace del siguiente modo.

II.- CONSIDERACIONES:

PRIMERA: En la resolución seis de fecha 14 de agosto del 2012, que obra de folios 162 a 165, se fijan los puntos controvertidos siguientes:

1. Determinar la responsabilidad civil extracontractual de los demandados con los hechos que se le atribuyen.
2. Determinar la existencia del daño emergente, lucro cesante y daño a la persona como consecuencia del accidente vehicular que sufriera el menor Luis Fernando Bustamante Ríos por parte de los demandados, y si le corresponde a los demandados el pago de ochenta mil nuevos soles a favor de la parte demandante por concepto de indemnización.

SEGUNDA: Antes de entrar en el análisis concreto de los puntos controvertidos se analiza brevemente los elementos de la estructura de la responsabilidad civil⁴⁶.

La antijuricidad: para **Pantaleón** citado por **La Cruz Berdejo**⁴⁷, consiste en la violación de la norma jurídica que protege el derecho subjetivo o el bien jurídico lesionado; es decir, será antijurídica la conducta si atenta contra cualquier norma del sistema jurídico, o en valores o principios sobre los cuales ha sido construido, de allí que dicho elemento esté centrado en el desvalor del resultado, la mera causación del daño a menos que concurra una causa de justificación.

daño causado: para **Larenz** es el menoscabo, que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, ya sea en su propiedad o en su patrimonio. En ese mismo sentido **Walsmann** teniendo en cuenta el concepto real-concreto del daño, lo define como el perjuicio específico sufrido por la víctima en su persona o en su patrimonio en forma de pérdida o menoscabo de determinados bienes⁴⁸. El daño puede ser de carácter

⁴⁶ bajo la estructura unitaria de la responsabilidad civil extracontractual y contractual [inejecución de obligaciones]

⁴⁷ La Cruz Berdejo, José Luis. Elementos del derecho civil-derechos de obligaciones II. P. 468.

⁴⁸ Ambos autores son citados por La Cruz Berdejo, José Luis. En Elementos del derecho civil-derechos de obligaciones II. P. 477

patrimonial [daño emergente y lucro cesante], y extrapatrimonial [daño a la persona y moral]. El daño emergente -el daño demandado- es aquél que genera un egreso en el patrimonio de la víctima. El lucro cesante -concepto no demandado- es lo que la víctima deja de percibir por efecto del daño en determinado bien, es decir, que por efectos del daño no ha ingresado cierto bien a su patrimonio. El daño moral ⁴⁹ es la lesión a los sentimientos de la víctima y que le produce un gran dolor, aflicción o sufrimiento. Evidentemente con el daño moral se afecta la esfera subjetiva e íntima de la persona. Por su parte, el daño a la persona es aquél que recae sobre la persona del sujeto que le impide realizar su actividad habitual, que es la que efectuaba para proveerse de los bienes indispensables para su sustento, así como también en la que estaban plasmadas las metas que le permitirían su realización personal.

El nexo de causalidad: aquí opera la teoría de la causalidad adecuada, supone que el daño debe ser reconducido a aquellos antecedentes apropiados para producirlo, según el curso natural de las cosas, adecuada es la causa que, normalmente, lleva consigo un daño de la especie considerada; significa que el daño causado debe ser consecuencia de la conducta antijurídica del autor para que se configure el supuesto de la responsabilidad civil contractual, no habrá nexo causal si el daño es consecuencia de un evento extraño no imputable al demandado.

Los factores de atribución: En lo que respecta a éste elemento, en la responsabilidad extracontractual en el ámbito objetivo únicamente se analizará el riesgo creado, aquí se abstrae el análisis de los factores de atribución dolo y culpa.

TERCERA: Corresponde analizar la antijuricidad en la conducta del demandado, en el accidente de tránsito causado con un vehículo automotor; según el informe Técnico de accidente de tránsito N° 11-11-XIV- DITERPOL/RPMP-DIVTRAN-DEPIAT-C que obra de 61 a 72, el día 18 de febrero aproximadamente a las 11:00 am ocurrió un accidente de tránsito en el Jirón La Unión a la altura de la intersección con el Jirón Tarapacá de esta ciudad, donde el señor Milton Marín Sánchez -demandado- se encontraba conduciendo el vehículo de placa PD-9874 en dirección de norte a sur, donde se aparecieron dos menores de edad conduciendo bicicletas uno de ellos el menor Luis Fernando Bustamante Ríos -supuesto agraviado- el mismo que choco en la puerta derecha de la camioneta, cuya conclusión indica que fue la actitud negligente e imprudente del menor el cual causo el accidente; por lo tanto, se puede

⁴⁹ Sólo se define para efectos ilustrativos

concluir que el demandado no se encuentra enmarcado dentro de una conducta antijurídica.

La antijuricidad en la responsabilidad objetiva [como en el presente caso], se genera de modo específico si hay alguna afectación al artículo 1970° del Código Civil, es decir, si como consecuencia de la utilización de un bien riesgoso o peligroso o el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa se causa daño a otra persona, el daño concreto debe ser consecuencia directa de la utilización del bien riesgoso o peligroso, no cabe duda que un vehículo automotor -camioneta- tiene la naturaleza de un bien riesgoso o peligroso; sin embargo, tal y como se ha explicado en el párrafo anterior el daño ha sido consecuencia de una conducta antijurídica e imprudente de la propia víctima, al haber actuado de manera negligente, circulando en la vía contraria, sin los elementos de seguridad y más aún sin la supervisión de una persona mayor de edad. Conclusión que es arribada por la fiscalía en su disposición que obra en folios 50 a 55 y disposición del fiscal superior que obra en folios 56 a 60.

En consecuencia, no se puede afirmar que el demandado ha actuado de manera antijurídica, conducta que tampoco es atribuible a la empresa demandada -propietaria del vehículo-, únicamente se extenderían los elementos de la responsabilidad civil a responsable solidario, si los presupuestos [elementos] fuesen concurrentes al autor directo del daño.

CUARTA: Al no cumplirse con el primer presupuesto [antijuricidad], sería suficiente para desestimar la demandada; sin embargo, considero apropiado analizar otro presupuesto de la responsabilidad civil -**la relación causal**- que tampoco se presenta y que hace aún más evidente la ausencia de responsabilidad de los demandados, consecuentemente infundada la pretensión demandada.

En conceptos del profesor **Lizardo Taboada** por relación causal, se entiende que debe existir una relación de causa – efecto; es decir, antecedente – consecuente entre la conducta antijurídica del autor [conducta inicial] y el daño causado a la víctima.

Existen circunstancias, en las cuales el daño es causado por una causa ajena a la conducta antijurídica del demandado, es un mecanismo, para establecer que no existe responsabilidad civil a cargo del autor de la causa inicial [conducta jurídica del demandado], estos supuestos de fractura causal son: **Caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o de la propia víctima.**

En el caso en concreto, según se advierte del informe policial que obra de folios 61 a 72, -concretamente en folios 71-, en las conclusiones se determinó que el factor predominante en el accidente de tránsito fue:

[El operativo del conductor de la UT2⁵⁰ participante de dicho evento, al desplazarse con exceso de confianza, dado circular por una vía en sentido contrario, sin adoptar las medidas de seguridad y precaución en previsión de accidentes no teniendo en cuenta los riesgos presentes]

La actitud antes indicada fue identificada en la Disposición N° 400-2011-TFSP-C, que obra de folios 56 a 60 -ver fundamentación fáctica quinto-, que señala: [... que de manera negligente se encontraban manejando sus vehículos menores -bicicletas- sin contar con las medidas de seguridad, protección y cuidado debidos- no contaban con cascos reglamentarios, transitar en una vía designada para el tránsito automotor, transitar en sentido contrario a la dirección a la calle ...]

Lo dicho nos permite concluir, que no ha sido la causa inicial [antijurídica del demandado – que en el caso tampoco la haya] la que origino el daño, sino fue la propia conducta de la víctima -en el caso el menor *Luis Fernando Bustamante Ríos*- la que origino el propio accidente, debido a que utilizo la vía exclusiva para vehículos automotores y en sentido contrario, menos contaba con las medidas de seguridad y protección; además, que no contaba con la presencia de un adulto a su cuidado.

Como vemos, la conducta que originó el daño es el hecho propio de la víctima; por lo tanto, no puede atribuirse responsabilidad al demandado por un evento dañoso que fue causado por la propia víctima, tal y como lo establece el artículo 1972° del Código Civil:

[En los casos del artículo 1970°, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero de la imprudencia de quien padece el daño].

Siendo así, existen motivos fundados para desestimar la demanda, en todos sus extremos.

QUINTA: Finalmente, el suscrito considera prudente y equitativo exonerar a los demandantes del reembolso de costas y costos, al amparo del artículo 412° del Código adjetivo, debido a que sí bien es cierto la demanda es desestimada para ello ha requerido de un análisis exhaustivo y complejo.

⁵⁰ Vehículo no motorizado (bicicleta) conducido por el menor Luis Fernando Bustamante Ríos (víctima)

Por tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 121°, 122°, 188°, 196° y 197° y 200° del Código Procesal Civil, con la facultad concedida por el artículo 57° de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ADMINISTRANDO JUSTICIA A NOMBRE DEL PUEBLO:

III.-DECISIÓN:

DECLÁRESE INFUNDADA LA DEMANDA interpuesta por **Vitelio Bustamante Quintana y Luz Isabel Ríos Sánchez** en representación de su menor hijo *Luis Fernando Bustamante Ríos*, sobre **indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito**, contra **Milton Marín Sánchez y La Empresa Servicios Generales Laguna el Perol SRL**; en la vía del proceso abreviado; **CONSENTIDA O EJECUTORIADA** que sea el presente proceso **ARCHÍVESE** el proceso en forma definitiva. **Sin costas ni costos.**
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

5° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Jr. Del Comercio 712

EXPEDIENTE: 02184-2011-0-0601-JP-CI-02

MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
ESPECIALISTA : MARIA Y. PAJARES RONCAL
DEMANDADO : EMP. SERV. GRALES LAGUNA EL PEROL S.R.L.
DEMANDANTE : RIOS SANCHEZ, LUZ ISABEL y otro.

SENTENCIA [0354 - 2012]

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ

Cajamarca, veintiséis de octubre

Del año dos mil doce.

I.- ANTECEDENTES:

1.-Mediante escrito de folios 23 a 26, **Vitelio Bustamante Quintana y Luz Ysabel Ríos Sánchez** en representación de su menor hijo **Luis Fernando Bustamante Ríos** interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito contra **Milton Marín Sánchez y La Empresa Servicios Generales Laguna el Perol SRL**, solicitando un monto de **Ochenta Mil Nuevos Soles**, por concepto de daño emergente la cantidad de **Veinte Mil Nuevos Soles**, lucro cesante la cantidad de **Diez Mil Nuevos Soles** y por daño a la persona la cantidad de **Cincuenta Mil Nuevos Soles**, además del pago de intereses legales respectivos con costas y costos.

Argumenta que el 18 de febrero del 2011, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, su menor hijo **Luis Fernando Bustamante Ríos** de 07 años de edad fue objeto de un accidente de tránsito, atropellado por parte del vehículo de placa rodaje N° PD-9874 Pick Up, conducido por el ahora demandado, hecho que ocurrió en la intersección de las calles Unión y Tarapacá. Como consecuencia del accidente el menor sufrió hematomas parenquimales frontales, hematoma laminar yuxtadural o cortical bifrontal, fisuras frontales, hematomas de parte blandas de la región frontal derecha según las conclusiones de las tomografías que se adjuntan agrega que desde ocurrido el accidente los demandados se desentendieron de su obligación, haciéndose cargo de todos los gastos irrogados los recurrentes [demandantes], ello ha ocasionado que se hayan quedado sin trabajo para atender la pronta recuperación de su menor hijo.

2.-Por resolución dos de fecha 09 de marzo del 2012, que obra de folios 33 a 35 fue admitida a trámite la demanda en la vía proceso abreviado, confiriéndose traslado a

los demandados para que la contesten dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes en caso de no hacerlo.

3.- Mediante escrito que obra de folios 75 a 86, el demandado **Milton Marín Sánchez**, contesta la demanda, solicitando que se declare infundada la demanda; argumentando, que como conductor de la camioneta de placa de rodaje N° PD-9874 el día que ocurrió el accidente se encontraba desplazándose por el Jirón Unión, circulando a una velocidad de 15Km/h velocidad prudente, cuando en forma inesperada aparecieron dos menores conduciendo bicicletas trasladándose en dirección contraria -al sentido de la vía- sin contar con casco de seguridad ni con la supervisión de un adulto responsable, motivo por el cual opere el claxon para que, los menores tomen sus precauciones, al no hacer caso detuvo la camioneta para que los menores puedan desplazarse, cuando transitaba el menor **Luis Fernando Bustamante Ríos** a bordo de su bicicleta perdió el equilibrio e impacto sobre la puerta lateral derecha de la camioneta.

4.- La empresa demandada Servicios Generales Laguna El Perol S.R.L. debidamente representada por su apoderado **Wilmer Sánchez Marín** cumple con contestar la demanda, solicitando se la declare infundada; argumentando, que es falso que el menor **Luis Fernando Bustamante Ríos** haya sido atropellado por la camioneta de propiedad de propiedad de su representada, pues tal como se ha determinado a través de la investigación realizada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Cajamarca el accidente no ha sido atropello sino un impacto por parte del menor y su bicicleta contra el costado derecho de la camioneta específicamente por topetazo, hecho que se produce por una serie de factores de negligencia humana [víctima]; en consecuencia debe declararse infundada la demanda.

5.- Con resolución número tres de fecha 02 de mayo del 2012, que obra en folios 137 a 138, se tiene por contestada la demanda por parte de los demandados, por ofrecidos los medios probatorios, se declara saneado el proceso y se requiere a las partes procesales para que dentro del tercer día propongan su puntos controvertidos, de conformidad con lo señalado en el artículo 468° del Código Procesal Civil. En la misma resolución se admite la ampliación de la cuantía de la pretensión, presentado por los demandantes mediante escrito que obra en folio 136.

6.- El demandado con escrito de folios 144 a 146, la empresa demandada deduce nulidad de la resolución número tres, únicamente en el extremo que dispone la ampliación de la cuantía; nulidad que fuese resuelta mediante resolución número seis de fecha 14 de agosto del 2012, que obra en folios 162 a 165, declarando fundada, es decir, se declarar nulo el extremo de dicha resolución que ampliaba la

cuantía de la pretensión, en la misma resolución se fijan los puntos controvertidos, se admitieron los medios probatorios de las partes, y apreciándose de los medios probatorios ofrecidos se limitaban a documentales se prescindió de la audiencia de pruebas y se dispuso el juzgamiento anticipado del proceso; habiendo las partes presentado sus alegatos, el estado del proceso es el de emitir sentencia, la que se hace del siguiente modo.

II.- CONSIDERACIONES:

PRIMERA: En la resolución seis de fecha 14 de agosto del 2012, que obra de folios 162 a 165, se fijan los puntos controvertidos siguientes:

1. Determinar la responsabilidad civil extracontractual de los demandados con los hechos que se le atribuyen.
2. Determinar la existencia del daño emergente, lucro cesante y daño a la persona como consecuencia del accidente vehicular que sufriera el menor Luis Fernando Bustamante Ríos por parte de los demandados, y si le corresponde a los demandados el pago de ochenta mil nuevos soles a favor de la parte demandante por concepto de indemnización.

SEGUNDA: Antes de entrar en el análisis concreto de los puntos controvertidos se analiza brevemente los elementos de la estructura de la responsabilidad civil⁵¹.

La antijuricidad: para **Pantaleón** citado por **La Cruz Berdejo**⁵², consiste en la violación de la norma jurídica que protege el derecho subjetivo o el bien jurídico lesionado; es decir, será antijurídica la conducta si atenta contra cualquier norma del sistema jurídico, o en valores o principios sobre los cuales ha sido construido, de allí que dicho elemento esté centrado en el desvalor del resultado, la mera causación del daño a menos que concurra una causa de justificación.

daño causado: para **Larenz** es el menoscabo, que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, ya sea en su propiedad o en su patrimonio. En ese mismo sentido **Walsmann** teniendo en cuenta el concepto real-concreto del daño, lo define como el perjuicio específico sufrido por la víctima en su persona o en su patrimonio en forma de pérdida o menoscabo de determinados bienes⁵³. El daño puede ser de carácter patrimonial [daño emergente y lucro cesante], y extrapatrimonial [daño a la persona

⁵¹ bajo la estructura unitaria de la responsabilidad civil extracontractual y contractual [inejecución de obligaciones]

⁵² La Cruz Berdejo, José Luis. Elementos del derecho civil-derechos de obligaciones II. P. 468.

⁵³ Ambos autores son citados por La Cruz Berdejo, José Luis. En Elementos del derecho civil-derechos de obligaciones II. P. 477

y moral]. El daño emergente -el daño demandado- es aquél que genera un egreso en el patrimonio de la víctima. El lucro cesante -concepto no demandado- es lo que la víctima deja de percibir por efecto del daño en determinado bien, es decir, que por efectos del daño no ha ingresado cierto bien a su patrimonio. El daño moral ⁵⁴ es la lesión a los sentimientos de la víctima y que le produce un gran dolor, aflicción o sufrimiento. Evidentemente con el daño moral se afecta la esfera subjetiva e íntima de la persona. Por su parte, el daño a la persona es aquél que recae sobre la persona del sujeto que le impide realizar su actividad habitual, que es la que efectuaba para proveerse de los bienes indispensables para su sustento, así como también en la que estaban plasmadas las metas que le permitirían su realización personal.

El nexo de causalidad: aquí opera la teoría de la causalidad adecuada, supone que el daño debe ser reconducido a aquellos antecedentes apropiados para producirlo, según el curso natural de las cosas, adecuada es la causa que, normalmente, lleva consigo un daño de la especie considerada; significa que el daño causado debe ser consecuencia de la conducta antijurídica del autor para que se configure el supuesto de la responsabilidad civil contractual, no habrá nexo causal si el daño es consecuencia de un evento extraño no imputable al demandado.

Los factores de atribución: En lo que respecta a éste elemento, en la responsabilidad extracontractual en el ámbito objetivo únicamente se analizará el riesgo creado, aquí se abstrae el análisis de los factores de atribución dolo y culpa.

TERCERA: Corresponde analizar la antijuricidad en la conducta del demandado, en el accidente de tránsito causado con un vehículo automotor; según el informe Técnico de accidente de tránsito N° 11-11-XIV- DITERPOL/RPMP-DIVTRAN-DEPIAT-C que obra de 61 a 72, el día 18 de febrero aproximadamente a las 11:00 am ocurrió un accidente de tránsito en el Jirón La Unión a la altura de la intersección con el Jirón Tarapacá de esta ciudad, donde el señor Milton Marín Sánchez -demandado- se encontraba conduciendo el vehículo de placa PD-9874 en dirección de norte a sur, donde se aparecieron dos menores de edad conduciendo bicicletas uno de ellos el menor Luis Fernando Bustamante Ríos -supuesto agraviado- el mismo que choco en la puerta derecha de la camioneta, cuya conclusión indica que fue la actitud negligente e imprudente del menor el cual causo el accidente; por lo tanto, se puede concluir que el demandado no se encuentra enmarcado dentro de una conducta antijurídica.

⁵⁴ Sólo se define para efectos ilustrativos

La antijuricidad en la responsabilidad objetiva [como en el presente caso], se genera de modo específico si hay alguna afectación al artículo 1970° del Código Civil, es decir, si como consecuencia de la utilización de un bien riesgoso o peligroso o el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa se causa daño a otra persona, el daño concreto debe ser consecuencia directa de la utilización del bien riesgoso o peligroso, no cabe duda que un vehículo automotor -camioneta- tiene la naturaleza de un bien riesgoso o peligroso; sin embargo, tal y como se ha explicado en el párrafo anterior el daño ha sido consecuencia de una conducta antijurídica e imprudente de la propia víctima, al haber actuado de manera negligente, circulando en la vía contraria, sin los elementos de seguridad y más aún sin la supervisión de una persona mayor de edad. Conclusión que es arribada por la fiscalía en su disposición que obra en folios 50 a 55 y disposición del fiscal superior que obra en folios 56 a 60.

En consecuencia, no se puede afirmar que el demandado ha actuado de manera antijurídica, conducta que tampoco es atribuible a la empresa demandada -propietaria del vehículo-, únicamente se extenderían los elementos de la responsabilidad civil a responsable solidario, si los presupuestos [elementos] fuesen concurrentes al autor directo del daño.

CUARTA: Al no cumplirse con el primer presupuesto [antijuricidad], sería suficiente para desestimar la demandada; sin embargo, considero apropiado analizar otro presupuesto de la responsabilidad civil **-la relación causal-** que tampoco se presenta y que hace aún más evidente la ausencia de responsabilidad de los demandados, consecuentemente infundada la pretensión demandada.

En conceptos del profesor **Lizardo Taboada** por relación causal, se entiende que debe existir una relación de causa – efecto; es decir, antecedente – consecuente entre la conducta antijurídica del autor [conducta inicial] y el daño causado a la víctima.

Existen circunstancias, en las cuales el daño es causado por una causa ajena a la conducta antijurídica del demandado, es un mecanismo, para establecer que no existe responsabilidad civil a cargo del autor de la causa inicial [conducta jurídica del demandado], estos supuestos de fractura causal son: **Caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o de la propia víctima.**

En el caso en concreto, según se advierte del informe policial que obra de folios 61 a 72, -concretamente en folios 71-, en las conclusiones se determinó que el factor predominante en el accidente de tránsito fue:

[El operativo del conductor de la UT2⁵⁵ participante de dicho evento, al desplazarse con exceso de confianza, dado circular por una vía en sentido contrario, sin adoptar las medidas de seguridad y precaución en previsión de accidentes no teniendo en cuenta los riesgos presentes]

La actitud antes indicada fue identificada en la Disposición N° 400-2011-TFSP-C, que obra de folios 56 a 60 -ver fundamentación fáctica quinto-, que señala: [... que de manera negligente se encontraban manejando sus vehículos menores -bicicletas- sin contar con las medidas de seguridad, protección y cuidado debidos- no contaban con cascos reglamentarios, transitar en una vía designada para el tránsito automotor, transitar en sentido contrario a la dirección a la calle ...]

Lo dicho nos permite concluir, que no ha sido la causa inicial [antijurídica del demandado – que en el caso tampoco la haya] la que origino el daño, sino fue la propia conducta de la víctima -en el caso el menor *Luis Fernando Bustamante Ríos*- la que origino el propio accidente, debido a que utilizo la vía exclusiva para vehículos automotores y en sentido contrario, menos contaba con las medidas de seguridad y protección; además, que no contaba con la presencia de un adulto a su cuidado.

Como vemos, la conducta que originó el daño es el hecho propio de la víctima; por lo tanto, no puede atribuirse responsabilidad al demandado por un evento dañoso que fue causado por la propia víctima, tal y como lo establece el artículo 1972° del Código Civil:

[En los casos del artículo 1970°, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero de la imprudencia de quien padece el daño].

Siendo así, existen motivos fundados para desestimar la demanda, en todos sus extremos.

QUINTA: Finalmente, el suscrito considera prudente y equitativo exonerar a los demandantes del reembolso de costas y costos, al amparo del artículo 412° del Código adjetivo, debido a que sí bien es cierto la demanda es desestimada para ello ha requerido de un análisis exhaustivo y complejo.

⁵⁵ Vehículo no motorizado (bicicleta) conducido por el menor Luis Fernando Bustamante Ríos (víctima)

Por tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 121°, 122°, 188°, 196° y 197° y 200° del Código Procesal Civil, con la facultad concedida por el artículo 57° de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ADMINISTRANDO JUSTICIA A NOMBRE DEL PUEBLO:

III.-DECISIÓN:

DECLÁRESE INFUNDADA LA DEMANDA interpuesta por **Vitelio Bustamante Quintana y Luz Isabel Ríos Sánchez** en representación de su menor hijo *Luis Fernando Bustamante Ríos*, sobre **indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito**, contra **Milton Marín Sánchez y La Empresa Servicios Generales Laguna el Perol SRL**; en la vía del proceso abreviado; **CONSENTIDA O EJECUTORIADA** que sea el presente proceso **ARCHÍVESE** el proceso en forma definitiva. **Sin costas ni costos.**
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
MÓDULO CORPORATIVO LABORAL
SEPTIMO JUZGADO DE PAZ LETRADO – ESPECIALIDAD LABORAL

EXPEDIENTE: 00741-2016-0-0601-JP-LA-01

DEMANDANTE : JAVIER TAFUR FLORES

DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES

JUEZ : YOLANDA BEATRIZ MONTENEGRO ALVARADO

ESPEC. LEGAL : LUZ ALEJANDRINA SALDAÑA DE CARRANZA

SENTENCIA N° 09 – 2016-L

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO

Cajamarca, veintiséis de septiembre
del año dos mil dieciséis.-

VISTOS Y OIDA, la presente causa en audiencia pública.

I. ASUNTO

Se trata de expedir sentencia en el presente proceso, incoado a través de la demanda de folios 01 a 04, por Javier Tafur Flores contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca, sobre pago de beneficios sociales.

1. Delimitación del Petitorio

Conforme al escrito postulatorio, se peticiona el pago de gratificaciones de julio y diciembre, vacaciones no gozadas y compensación por tiempo de servicios (CTS) en la suma total de S/ 13,857.54.

II. ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticos de la demanda

Sostiene el demandante que la entidad edil desde el inicio de su relación laboral ha evadido su obligación de concederle vacaciones anuales, gratificaciones de julio y diciembre así como la CTS.

2. Fundamentos fácticos de la contestación de la demanda

Asevera el Procurador Público de la Municipalidad demandada que sí han efectuado el pago de aguinaldo de julio y diciembre de 2014, así como la CTS en los meses de mayo y noviembre de los años 2013, 2014 y 2015. Agrega que a los obreros de las municipalidades no les corresponde las gratificaciones del régimen laboral de actividad privada, debido a que aquellas

se rigen por las normas del presupuesto del Estado, las que establecen anualmente el aguinaldo que corresponde a los obreros ediles sujetos al régimen de la actividad privada.

3. Actividad procesal

- ✓ La demanda fue admitida a trámite en la vía del proceso abreviado laboral, mediante resolución número 01, de fecha 16 de mayo del año en curso (folios 32 a 34), se puso en conocimiento de la parte demandada el escrito de demanda y sus recaudos y, se le concedió el plazo de diez días hábiles para que cumpla con absolverla conforme a su derecho. Además, en dicha resolución se fijó día y hora para la realización de la audiencia única, siendo fijada para el día 13 de junio de 2016, fecha en la que no se llevó a cabo, y con resolución número 03 se reprogramó para el día 19 de septiembre de 2016 a las 11:00 horas de la mañana.
- ✓ La entidad edil demandada, representada por su Procurador Público Municipal, mediante escrito de folios 40 a 44, contesta la demanda; por lo que, mediante resolución número 02 se tiene por apersonado al citado procuradores público y se tiene por admitida la contestación.
- ✓ El 19 de septiembre del año en curso, se realizó la Audiencia Única, y según acta de registro que antecede, se advierte que solamente compareció la parte demandante por lo que la Municipalidad demandada ha incurrido en rebeldía, consecuentemente se procedió a precisar las pretensiones materia del proceso:
 - Pago de beneficios sociales consistentes en: gratificaciones de julio y diciembre, vacaciones no gozadas y compensación por tiempo de servicios (CTS) en el periodo comprendido entre el 28 de agosto de 2013 a la fecha de interposición de la demanda.

En este estado debemos puntualizar que la inasistencia de la demandada a la audiencia única ha hecho que incurra en rebeldía; sin embargo, ha contestado la demanda, y esta debe ser merituada (más aún si con anterioridad a la audiencia fue calificada), toda vez que es diferente el hecho de comparecer a la audiencia y el acto de contestar la demanda, debiéndose de privilegiar el derecho de defensa, el principio de contradicción y el principio de veracidad, en tutela del derecho al debido

proceso, tal como ha quedado sentado en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, llevado a cabo en la ciudad de Lima los días 08 y 09 de mayo de 2014.

Se prosiguió con el desarrollo de la audiencia única, pasando las etapas de: confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos finales y finalmente se emitió el fallo de la sentencia; etapas que han quedado registradas en audio y video. Siendo ello así, se procede a efectuar por escrito la debida motivación fáctica y jurídica del fallo dictado, en los siguientes términos.

III. CONSIDERANDOS

➤ *De la tutela jurisdiccional efectiva*

PRIMERO: Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, tal como lo determina el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, el mismo que concuerda con el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado.

➤ *Del vínculo laboral*

SEGUNDO: Conforme al artículo 23°, 23.2 de la NLPT “*Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.*” Con dicho dispositivo normativo la nueva norma procesal laboral, solamente exige la acreditación de la prestación personal de servicios, para suponer la presencia de una relación de trabajo, presumiendo el cumplimiento de los otros elementos del vínculo laboral (remuneración y subordinación), correspondiendo al empleador (inversión de la carga de la prueba) demostrar la inexistencia de éstos, a fin de desvanecer la introducida presunción de laboralidad. En el caso de autos, es un hecho afirmado por el demandante y aceptado tácitamente por la parte demandada la prestación efectiva de servicios como obrero y acreditado fehacientemente con el contrato de trabajo por orden judicial de folios 06 y 07, del que se desprende además ser un contrato laboral a plazo indeterminado dentro del régimen laboral de la actividad privada.

➤ *De la fecha de inicio de la relación laboral y el record laboral demandado*

TERCERO: Queda acreditado también con el contrato de trabajo antes mencionado, que el actor inició sus labores a favor de la Comuna demandada el 01 de julio de 2011. Sin embargo, el periodo demandado inicia el 28 de agosto de 2013 (ya que el periodo que antecede fue cancelado en el proceso judicial N 1397-2013, como se demuestra con la sentencia de folios 18 a 30) hasta la fecha de interposición de la demanda.

En el segundo otrosí de la demanda, repetido en la audiencia única; el actor solicita que el cálculo de los beneficios sociales sea actualizado hasta la fecha de emisión de la sentencia. Al respecto, hay que tener en cuenta que la interposición de la demanda implica una interrupción en el tiempo para el reclamo de derechos económicos que no puede alterarse durante el proceso, ello en salvaguarda del derecho de contradicción de la parte demandada, y es que la Comuna demandada, en este caso, solamente ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa respecto del periodo inicialmente demandado, sin estar constreñida a hacerlo hasta la fecha de emisión de la sentencia. A mayor abundamiento, el recurrente mantiene a la fecha vínculo laboral vigente con la demandada, por tanto tiene a salvo su derecho para hacerlo valer conforme a ley. Siendo ello así la fecha límite del record laboral demandado será la interposición de la demanda.

➤ ***De la remuneración computable y el cálculo de la remuneración y beneficios sociales***

CUARTO: Estando a lo considerado precedentemente, corresponde fijar la **remuneración computable**, la misma que está conformada por la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea su denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición del empleador, conforme a lo determina el artículo 6° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, concordado con el artículo 9° del Decreto Supremo N° 001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Para el caso de autos, se verifica fehacientemente del contrato de trabajo de folios 06 y 07 que la remuneración mensual asciende a S/ 750.00 (setecientos cincuenta con 00/100 soles), la misma que permaneció hasta el mes de noviembre de 2015 ya que de las boletas de pago de folios 08 a 16 se acredita que a partir de diciembre de ese mismo la remuneración es de S/ 1,133.00 (un mil ciento treinta y tres con 00/100 soles); lo cual además no ha sido desvirtuado por la parte demandada. Consecuentemente, la **remuneración mensual y computable** de la accionante

asciende a **S/. 750.00 hasta noviembre de 2015 y S/ 1,133.00** desde diciembre del mismo año, no existiendo otro concepto que la incremente (verbigracia, asignación familiar). Dichos montos se tomarán en cuenta para la determinación de los beneficios laborales demandados. A renglón seguido corresponde pronunciarse sobre cada uno de los pedidos demandados, su periodo y su monto:

QUINTO: Gratificaciones. En primer lugar diremos que las gratificaciones legales por Fiestas Patrias y Navidad, están reguladas por la Ley N° 27735, Ley que Regula el Otorgamiento de Gratificaciones para Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad y su Reglamento (Decreto Supremo N° 005-2002-TR), y son aquellas sumas de dinero que el empleador debe otorgar al trabajador en forma adicional a la remuneración mensual abonándolas en la primera quincena de julio y de diciembre, sea cual fuere la modalidad del contrato laboral a la que se encuentre sujeto y el tiempo que haya prestado servicios el trabajador.

Para acceder a la **gratificación ordinaria** (completa), el trabajador debe encontrarse efectivamente laborando en el mes que corresponda percibir el beneficio o estar en uso del descanso vacacional, de licencias con goce de haber o percibiendo subsidios de la seguridad social o por accidentes de trabajo y en aquellos casos dispuestos por norma expresa (suspensión imperfecta del contrato de trabajo), en cuyo caso tales días se consideran como efectivamente laborados; si el trabajador cuenta con menos de seis meses, percibirá la gratificación en forma proporcional (**gratificación proporcional**) a los meses laborados; y en caso el trabajador cese antes de la oportunidad de pago de las gratificaciones, podrá percibir una **gratificación trunca** que será proporcional al tiempo laborado hasta el cese.

El artículo 2° de la Ley N° 27735, estipula que “[e]l monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio” (subrayado agregado) y el artículo 3° numeral 3.1 del Decreto Supremo N° 005-2002-TR, prescribe que “[l]a remuneración computable para las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad es la vigente al 30 de junio y 30 de noviembre, respectivamente” (subrayado agregado).

En la presente causa, arguye la Municipalidad demandada que a los obreros de las municipalidades no les corresponde las gratificaciones del régimen laboral de actividad privada, ya que por ser una entidad pública se rigen por las normas del

presupuesto del Estado, las que establecen anualmente el aguinaldo que corresponde a los obreros ediles sujetos al régimen de la actividad privada.

Sobre el particular, cierto es que las municipalidades están facultadas para contratar bajo los tres regímenes laborales existentes en nuestro país (público, privado y CAS), pero ello no implica que las normas laborales sean aplicables indiscriminadamente, sino que se hará teniendo en cuenta precisamente el régimen laboral. En este orden de ideas, las gratificaciones son el beneficio que tienen los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, a percibir con motivo de fiestas patrias y la navidad (artículo 1º de la Ley N° 27735), mientras que el aguinaldo es el beneficio que se otorga a los funcionarios y servidores públicos, así como a los pensionistas a cargo del Estado, en fiestas patrias y navidad (artículo 54º del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público).

Ahora bien, cuando la Quinta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece: “*Las Entidades del Sector Público, independientemente del régimen laboral que las regule, otorgan a sus funcionarios, servidores y/o pensionistas, únicamente, hasta doce remuneraciones y/o pensiones anuales, una Bonificación por Escolaridad, un aguinaldo o gratificación por Fiestas Patrias y un aguinaldo o gratificación por Navidad, según corresponda...*”, debemos entender que se está refiriendo al número de los conceptos allí descritos (remuneraciones, bonificaciones por escolaridad, aguinaldo y gratificaciones) que reciben los trabajadores del sector público anualmente, independientemente del régimen laboral que las regule. No obstante, en lo que ahora corresponde, para hacer la diferenciación de conceptos en los regímenes laborales público o privado señala expresamente que recibirán “*un aguinaldo o gratificación por Fiestas Patrias y un aguinaldo o gratificación por Navidad, según corresponda...*”, entendiéndose que el aguinaldo corresponde a los trabajadores sujetos al régimen de la actividad pública, mientras que las gratificaciones les corresponde a los trabajadores que laboran bajo el régimen de la actividad privada, al margen de si la entidad contratante es una perteneciente al sector público.

Comprendido ello, se aprecia que las gratificaciones demandadas son las ordinarias ya que se solicita por semestres completos, salvo la primera (que va del 28-08-2013 al 31-12-2013)⁵⁶ y la última (que va del 01-01-2016 al 05-05-

⁵⁶ Porque el periodo que va del 01-07-2013 al 27-08-2013, fue cancelado en el proceso N° 1397-2013.

2016)⁵⁷, calculándose así y teniendo en cuenta además lo dispuesto por las Leyes N° 29351 y N° 29714⁵⁸, salvo para el periodo que va del 01 de enero de 2015 a mayo de 2016, dado que la inafectación a la que se refieren dichas leyes solamente es hasta diciembre de 2014. Por tanto, calculando el beneficio con la remuneración vigente al momento en que corresponde cancelarse, le corresponde al actor:

Periodo	Gratific.	Remuneración computable	Operación	Monto
Del 28-08-2013 al 31-12-2013 (04 meses y 03 días)	Dic. 2013	S/ 750.00	$[750+9\%(750)]/6 \times 4$ 136.25/30x3	S/ 545.00 S/ 13.63
Del 01-01-2014 al 30-06-2014 (06 meses)	Jul. 2014	S/ 750.00	$750+9\%(750)$	S/ 817.50
Del 01-07-2014 al 31-12-2014 (06 meses)	Dic. 2014	S/ 750.00	$750+9\%(750)$	S/ 817.50
Del 01-01-2015 al 30-06-2015 (06 meses)	Jul. 2015	S/ 750.00	750.00	S/ 750.00
Del 01-07-2015 al 31-12-2015 (06 meses)	Dic. 2015	S/ 750.00	750.00	S/ 750.00
Del 01-01-2016 al 05-05-2016 (04 meses y 05 días)	Jul. 2016	S/ 1, 133.00	$1, 133.00/6 \times 4$ 188.83/30x5	S/ 755.33 S/ 31.47
Total				S/. 4,480.43

Es preciso puntualizar que no se toma en cuenta el documento de folio 50, para sustraer los montos allí detallados, debido a que el mismo no sólo no ha sido reconocido por el demandante en la audiencia única, sino que no aparece firma de recepción del actor o algún indicio que supongan el pago efectivo, además el

⁵⁷ Porque solamente se calculará hasta la fecha de interposición de la demanda, pero el vínculo laboral continúa vigente.

⁵⁸ En mérito a estas leyes, se redujo los costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y navidad, al haberse decretado una inafectación temporal a tales gratificaciones dentro del régimen laboral de la actividad privada y pública hasta diciembre del 2014 y por tanto, corresponde que el monto que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al seguro social de salud – Essalud (9% de la remuneración), sean abonados a los trabajadores, bajo la modalidad de bonificación extraordinaria de carácter temporal no remunerativo ni pensionable.

demandante refirió desconocer que la demandada le haya aperturado una cuenta para el depósito de las gratificaciones.

SEXTO: Compensación por tiempo de servicios – CTS. La CTS es un beneficio social de previsión a las contingencias que origina el cese en el trabajo para el trabajador y su familia, regulado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR y el Decreto Supremo N° 004-97-TR; la perciben los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que cumplan cuando menos en promedio una jornada ordinaria de cuatro horas diarias o veinte horas a la semana como mínimo.

Para el cálculo de este beneficio se considera remuneración computable a la que se ha hecho referencia en el cuarto considerando, precisando que se incluye el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada por el empleador (directamente o por intermedio de terceros) con o sin rendición de cuentas excluyendo a la alimentación principal proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de los servicios o cuando se derive de mandato legal y al refrigerio de mediodía que sustituya al almuerzo. Se incorporan a la remuneración computable las remuneraciones periódicas como la semestral (gratificaciones) a razón de un sexto de lo percibido en el semestre respectivo, las que se abonan por un periodo mayor se incorporan a la remuneración computable a razón de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo, las remuneraciones que se abonen en periodos superiores a un año no son computables.

Además, el artículo 10° del Decreto Supremo N° 001-97-TR que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, establece que “[l]a remuneración computable para establecer la compensación por tiempo de servicios de los trabajadores empleados y obreros, se determina en base al sueldo o treinta jornales que perciba el trabajador según el caso, en los meses de abril y octubre de cada año,...” (subrayado agregado); es decir, que se calcula por periodos semestrales y según la evolución de la remuneración.

La prueba aportada demuestra que la demandada no ha cumplido con depositar en su totalidad la CTS a favor del demandante. Así, tenemos que el **periodo demandado val del 28 de agosto de 2013 al 05 de mayo de 2016**, pero teniendo en cuenta que el demandante ha reconocido en la audiencia única el documento de folio 49, solicitando se descuenta del monto a sentenciar; se coteja que se le ha depositado en noviembre de 2013, mayo y noviembre de 2014 y mayo y

noviembre de 2015, por lo que esos montos deben ser deducidos. Consecuentemente se le adeuda los periodos y montos siguientes:

Periodo	Record	Remuneración computable	Operación	Monto
Del 28-08-2013 al 31-10-2013	02 meses 03 días	S/. 750.00	$750/12 \times 2$ $62.5/30 \times 3 -$ 373.96^{59}	- S/. 242.71
Del 01-11-2013 al 30-04-2014	06 meses	S/. 750.00 + 1/6(558.63)	$843.11/12 \times 6 -$ 375^{60}	S/. 46.56
Del 01-05-2014 al 31-10-2014	06 meses	S/. 750.00 + 1/6(817.50)	$886.25/12 \times 6 -$ 375^{61}	S/. 68.13
Del 01-11-2014 al 30-04-2015	06 meses	S/. 750.00 + 1/6(817.50)	$886.25/12 \times 6 -$ 375^{62}	S/. 68.13
Del 01-05-2015 al 31-10-2015	06 meses	S/. 750.00 + 1/6(750)	$875.00/12 \times 6 - 63^{63}$	S/. 374.50
Del 01-11-2015 al 30-04-2016	06 meses	S/. 1133.00 + 1/6(750)	$1258.00/12 \times 6$	S/. 629.00
Del 01-05-2016 al 05-05-2016	05 días	S/. 1133.00	$(1133.00/12)/30 \times 5$	S/. 15.74
Total				S/.959.35

SÉPTIMO: El **derecho a descanso físico remunerado o vacaciones anuales**, regulado por el Decreto Legislativo N° 713 y su reglamento Decreto Supremo N° 012-92-TR, es de carácter ininterrumpido en su duración y tiene como finalidad el permitir que el trabajador reponga sus energías por la prestación personal del servicio y dedique tiempo para sí mismo y su familia. Se debe tener en cuenta que existen tres clases de vacaciones: las simples, las no gozadas y no pagadas y las truncas. **Las vacaciones simples** son aquellas que adquiere el trabajador por tener más de un año laborando, pero cesa antes de que venza el año de plazo que tiene a su vez el empleador para concederle el goce efectivo (primer párrafo del artículo 22° del Decreto Legislativo N° 713); es decir, no disfruta de su descanso y equivale a una remuneración íntegra a ser cancelada con la liquidación por cese, vale decir, con la última remuneración. **Las vacaciones**

⁵⁹ Monto cancelado.

⁶⁰ Monto cancelado.

⁶¹ Monto cancelado.

⁶² Monto cancelado.

⁶³ Monto cancelado.

ganadas y no gozadas, son aquellas que adquiridas, no fueron disfrutadas por el trabajador dentro del año que el empleador tuvo para efectivizarlas y sigue laborando, o lo que es lo mismo, las no gozadas dentro del año siguiente al de acumulación del record vacacional (artículo 23° del D. Leg. 713⁶⁴), éstas traen consigo que el trabajador perciba la “triple remuneración”; esto es: 1) por el trabajo realizado en el mes de descanso vacacional (esta remuneración generalmente es cancelada durante el mes laborado); 2) por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y, 3) una indemnización (no es propiamente una remuneración) por la falta de descanso vacacional, equivalente a una remuneración. En tercer lugar, **las vacaciones truncas**, se configuran cuando el trabajador cesa antes de cumplir un año de labores o antes de que cumpla un nuevo año de trabajo; éstas equivalen a una remuneración vacacional, pero de manera proporcional a los meses y días laborados (artículo 22° del D. Leg. 713⁶⁵), entendiéndose que la remuneración base de cálculo es la establecida al momento del cese.

En el caso de autos sólo corresponde el pago de las vacaciones ganadas y no gozadas, del periodo que van del 28-08-2013 al 27-08-2014 ya que del periodo que va del 28-08-2015 al 05-05-2016, la empleadora, por la fecha de interposición de la demanda, se encontraba aún posibilitada para otorgar vacaciones al demandante.

Periodo	Remuneración computable	Operación	Monto
Del 28-08-2013 al 27-08-2014	S/. 1133.00	1133.00 x 2	S/. 2266.00
TOTAL			S/. 2266.00

➤ **De los intereses laborales, costas y costos del proceso y multa**

OCTAVO: Teniendo en cuenta la naturaleza económica de los conceptos demandados y su falta de pago oportuno, corresponde al actor el pago de

⁶⁴ Artículo 23: “Los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán lo siguiente:

- a) Una remuneración por el trabajo realizado;
- b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y,
- c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo.

El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.”

⁶⁵ Artículo 22: “... El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.”

intereses legales de carácter laboral, los mismos que no requieren ser demandados (pretensión accesoria legal), tal como lo dispone el último párrafo del artículo 31° de la NLPT, y deben ser calculados en ejecución de sentencia y con arreglo a lo establecido en el Decreto Ley N° 25920.

NOVENO: Debe tenerse en cuenta que según el artículo 31°, parte *in fine*, de la NLPT, el pago de las costas y costos no requieren ser demandados, pero su cuantía o modo de liquidación es de expreso pronunciamiento en la sentencia. Respecto a las **costas del proceso**, obviamente al tramitarse la demanda ante un Juzgado de Paz Letrado, el monto del petitorio no ha superado las 70 URP, por tanto el demandante no ha pagado los aranceles judiciales correspondientes; consiguientemente, no se fija costas del proceso.

DÉCIMO: Sobre los **costos procesales**. Conforme a la Séptima Disposición Complementaria de la NLPT: *“En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos.”* Y según la parte *in fine* del artículo 31° de la misma ley procesal, su cuantía o modo de liquidación es de expreso pronunciamiento en la sentencia. Siendo ello así, en este proceso se tiene que el demandante ha requerido necesariamente de la asesoría de un abogado; el letrado ha participado de la audiencia única; se ha emitido un juicio de fundabilidad sobre las pretensiones formuladas y se ha observado una conducta orientada a colaborar con una correcta impartición de justicia, lejos de actuar con temeridad; no se trata de un caso complejo. Siendo ello así, se fijan los costos procesales en el 18% del monto sentenciado, más el 5% de dicho monto destinado al Colegio de Abogados de Cajamarca.

Por último, no se ha configurado supuesto alguno que merezca la imposición de **multa** a cualquiera de las partes.

IV. FALLO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con la normatividad invocada, además con el artículo 31° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo y el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e impartiendo Justicia a Nombre de la Nación, se resuelve:

- A.** Declárese **FUNDADA EN PARTE** la demanda formulada por Javier Tafur Flores, contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca, sobre pago de beneficios sociales, consistentes en gratificaciones, vacaciones no gozadas y CTS; en consecuencia;
- B. ORDENO** que la entidad edil demandada pague a favor del demandante la suma de **S/ 6, 746.43 (seis mil setecientos cuarenta y seis con 43/100**

soles), conforme a la liquidación practicada y a lo detallado en la parte considerativa de la presente resolución; así mismo, **CUMPLA** con depositar a favor del demandante la suma de **S/ 959.35 (novecientos cincuenta y nueve con 35/100 soles)** en la entidad financiera que él indique, por CTS; más los intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia; **SIN COSTAS, CON COSTOS Y SIN MULTA.**

- C. Al escrito del 21-0-2016: TÉNGASE** por delegadas las facultades a que hace mención el Procurador Público Municipal, a favor del letrado que allí indica.
- D. Interviniendo** en la presente causa la secretaria judicial que autoriza por licencia de la secretaria de la causa.
- E. NOTIFIQUESE** con las formalidades establecidas por ley. -

POWER, JUDICIAL
(THE FORD)

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
JUZGADO MIXTO TRANSITORIO DE CAJAMARCA

CLIMATE INFORMATION ON
CLIMATE
Brought to you by the
National
Climate Change
Program
CLIMATE
CLIMATE
CLIMATE

EXPEDIENTE N° : 0173-2010-0-601-JR-LA-01

DEMANDANTE : ADOLFO LIÑAN HUACCHA RONCAL

DEMANDADO : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
INIA

MATERIA : RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES E
INDEMNIZACION

JUEZ : MARIA JESUS AMAYA VALDERRAMA

ESPEC. JUD. : JOSE LUIS CERDAN VASQUEZ

SENTENCIA 21-2016-L

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISIETE.

Cajamarca, catorce de noviembre
del dos mil dieciséis.-

VISTOS.- La presente causa de materia laboral seguida por **ADOLFO LIÑAN HUACCHA RONCAL** contra el **INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA**, se expide la siguiente sentencia:

ANTECEDENTES

1. **Demanda:** Con fecha 17 de setiembre del 2010 Adolfo Liñán Huaccha Roncal interpone demanda contra el **Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA** solicitando se reconozca la existencia de una relación laboral de carácter indefinido, en condición de obrero, bajo el régimen común de la actividad privada, desde inicio de la prestación del servicio, en consecuencia se disponga su inclusión en planillas, y como pretensiones accesorias, la declaración de nulidad de los contratos

Administrativos de Servicios CAS suscritos con la entidad, a partir enero del 2009, en consecuencia sin efecto legal ninguno de dicho contratos; se ordene a la entidad demandada cumpla con el pago de los beneficios sociales dejados de percibir consistentes en gratificaciones legales por el monto de S/. 17,229.50 y vacaciones por la suma de S/16,150.00, desde el inicio de la prestación de servicio hasta el año 2010, y que la entidad cumpla con efectuar el depósito de sus compensación por tiempo de servicios CTS por la suma de S/ 10,247.11.

Precisa que su fecha de ingreso a es el 01 de enero del 2000, con un tiempo de servicios de 10 año, 07 meses y 14 días, con vínculo laboral vigente en condición de obrero, siendo su última remuneración S/ 850.00.

Precisa que ha venido prestando servicios al INIA desde el 01 de enero del 2000, en la condición de obrero, inicialmente con contratos de locación de servicio hasta 31 de diciembre del 2008, luego de lo cual fue sustituido por contratos CAS, existiendo una relación laboral encubierta anterior a la suscripción de contrato administrativo por cuanto realizó una prestación personal, remunerada, y con relación de subordinación, siendo su labor de naturaleza permanente, solicitando aplicar control difuso para que inaplique dicha contratación en salvaguarda del principio de irrenunciabilidad de derechos.

Indica que le ha correspondido ostentar un contrato de trabajo a plazo indeterminado, sujeto a régimen laboral, de la actividad privada, toda vez el persona del INIA está comprendido dentro del régimen laboral de actividad privada, regido por Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728. Asimismo señala que se debe declara la nulidad de los contratos CAS que ha suscrito por contravención a la Constitución y a las leyes.

Respecto a las gratificaciones adeudadas indica que la entidad desde el inicio de su relación laboral nunca le ha pagado dicho derecho, así como las vacaciones y CTS.

2. **Resolución Número Uno.-** De fecha 30 de setiembre del 2010, obrante de folios 108 a 109 se resuelve admitir a trámite la demanda en vía y se corre el traslado para que la parte demandada cumpla con contestar la demanda.
3. **Contestación:** Con fecha 15 de noviembre del 2010, el Procurador Público a cargo de asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura presenta escrito apersonándose

y contestando demanda. Al respecto dice que el accionante solicita el pago de S/ 46,626.61 nuevos soles por concepto de Pago de Beneficios Sociales más los interés correspondientes, sin embargo no acredita haber mantenido vínculo contractual con la demanda durante todo el periodo que indica, asimismo precisa que la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento es aplicable a todas las instituciones públicas que deseen contratar los servicios de terceros, que no tengan relación de subordinación y que su trabajo se mide por resultados, lo cual no genera vínculo laboral, por lo que niega la existencia vínculo laboral entre su defendida y la demandante, niega la existencia de subordinación, por tanto el pago de beneficio sociales deviene en improcedente. Respecto de los contratos Administrativos de Servicios indica que el decreto Legislativo No. 1057 establece claramente cuáles son los beneficios que se otorgan, no encontrándose entre ellos el pago de CTS, vacaciones, ni gratificaciones por lo que cual no se reconocer estos beneficios. Agrega que el Tribunal Constitucional ya se manifestado indicado que el contrato CAS no vulnera la Constitución, por lo cual dichos contratos al no ser inconstitucionales, tampoco son nulos, no procediendo lo solicitado por el actor.

4. Con resolución tres de fecha 16 de diciembre del 2010 que corre a folios 129 a 130 se tiene por apersonado a al Procurados Público a cargo de los asunto jurídicos del Ministerio de Agricultura, y absuelto el traslado de la demanda.
5. **Audiencia Única:** Conforme acta de fecha 24 de marzo del 2011, se lleva a cabo audiencia única, en la que se emite resolución número seis se declarada saneado el proceso, se deja constancia que no se puede arribar a una conciliación, y se fijan como puntos controvertidos: 1. Determinar la existencia de una relación laboral a plazo indefinido del actor en su condición de obrero en el régimen común de la actividad privada, así como el periodo correspondiente, 2. Determinar si le corresponde el pago de beneficio sociales solicitados por el actor, 3,. Determinar si procede declarar la nulidad de los contratos CAS, a partir de enero del dos mil nueve y como consecuencias su nulidad, 5. Determinar si el corresponde efectuar el depósito de la CTS, en el periodo solicitado; con resolución número siete se resuelve declara infundada las oposiciones formuladas por la demandada, se admiten como medios probatorios de fondo.

6. Con resolución ocho de fecha 06 de abril del 2011, se concede apelación contra resolución siete la que se concede sin efecto suspensivo u con calidad de diferida.
7. De folios 177 a 177 aparece el informe revisorio y pericial.
8. Mediante Resolución diez de fecha cuatro de mayo del 2012, se tiene por desistido al demandante de las pretensiones de nulidad de contratos administrativos de servicio y declaración de existencia de relación laboral dentro del régimen privado, pago de beneficios sociales.
9. **Sentencia:** con fecha 06 de enero del 2014, se emite resolución quince, sentencia 001-2014-L, en la cual se declara fundada en parte dela demanda, por ende la existencia de una relación jurídica laboral entre la parte conforme al Régimen Laboral de la Actividad Privada que regular el Texto único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, funda la pretensión de pago de beneficios sociales y otros derechos y ordena el pago de 38, 876.53, sin pago de costas ni costos.
10. Con escrito de fecha 16 de enero del 2014, la demandada presente apelación, contra la sentencia expedida, la que es concedida con resolución dieciséis.
11. **Sentencia de Vista:** con resolución veintiuno de fecha 03 de marzo del 2015, Sentencia No. 060-2015, contenida en resolución veintiuno, se declara nula la Sentencia No. 001-2014-L.
12. Con resolución veintitrés de fecha 14 de setiembre del 2015, se resuelve declarar improcedentes el pedido de desistimiento interpuesto por Adolfo Liñán Huaccha Roncal, y se concede nuevo plazo para emisión de alegatos.
13. Con resolución veintiséis de fecha 16 de mayo del 2016, se dispone dar cuenta con los autos para sentenciar.

CONSIDERACIONES

Pretensión Materia de Juicio

1. Con relación a la materia de controversia que ha traído el demandante Adolfo Liñán Huaccha Roncal ante este despacho judicial, es el reconocimiento de la existencia de una relación laboral de carácter indefinido entre su persona y el Instituto de Investigación Agraria en condición de obrero, bajo el régimen

común de la actividad privada, se disponga su inclusión en planillas, y como pretensiones accesorias, la declaración de nulidad de los contratos Administrativos de Servicios CAS suscritos con la entidad, a partir enero del 2009, y el pago de los beneficios sociales dejados de percibir desde inicio de la relación, consistentes en gratificaciones, vacaciones y compensación por tiempo de servicios CTS.

2. Para emitir un pronunciamiento adecuado sobre el fondo de la pretensión puesta a juicio, analizaremos :

Fecha de ingreso y cese de contratación del demandante por la demandada, independientemente de su naturaleza

3. De conformidad con lo actuado la demandante, habría celebrado dos modalidades de contratación con la demandada esto son un primer periodo por locación de servicios comprendido entre 01.01.2000 al 31.12.2008, y un segundo tramo por contratación administrativa de servicios comprendido desde 02.01.2009 al 17.10.10 (fecha de interposición de demanda).

Con relación al primer tramo (01.01.2000 al 31.12.2008) obran en autos copias de los contratos de locación de servicios, enmiendas y adendas, suscritos entre la demandante y demandada los que obran de folios 02 a 07 y 11 a 26, donde se lo contrata para diversas labores agropecuarias; y si bien no se tiene acreditado el periodo completo de la prestación la demandada al haber sido requerida en la presentación de los contratos originales de locación de servicio del recurrente, los duplicados de las boletas de pago en audiencia de folios 155, no cumplió con hacerlo por lo que se meritúa su conducta, favoreciendo ésta a la alegación del demandante respecto del cumplimiento de este extremo.

Con relación al segundo tramo a partir de 02.01.2009 al 17.10.10 se cambia la modalidad de contratación por la de Contrato Administrativos de Servicios, apareciendo de folios 27 a 46 , los contratos, adendas y renovaciones, debiendo aplicarse la misma valoración de la conducta de la demandada para los periodos que el demandante no ha podido acreditar.

Naturaleza de la prestación de servicios comprendida en primer tramo

4. Partiendo un análisis de los criterios expuestos en la Recomendación sobre la Relación de Trabajo 2006 de la OIT (15 de junio del 2006) según la cual dada las dificultades que supone determinar la existencia de una relación de trabajo, cuando no resultan claros los derechos y obligaciones respectivos de las partes interesadas, cuando se ha intentado encubrir la relación de trabajo, o cuando hay insuficiencias o limitaciones en la legislación, en su interpretación o en su aplicación, así como la incertidumbre acerca de la existencia de una relación de trabajo tiene que resolverse de modo que garantice una competencia leal y la protección efectiva de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo de una manera conforme con la legislación o la práctica nacionales. En tal sentido se esgrimieron como recomendaciones para facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo: a) admitir una amplia variedad de medios para determinar la existencia de una relación de trabajo; b) consagrar una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios. Entre estos indicios se cuenta el hecho de que el trabajo se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajo en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo; el hecho de que se pague una remuneración periódica al trabajador, de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derecho como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existan riesgos financieros para el trabajador; entre otros.

5. En concordancia con lo antes indicado, nuestra legislación nacional, artículo 4 del Decreto Supremo No. 003-97-TR, en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado.
6. Al caso de autos, es controversia la naturaleza de la prestación de servicios sujeta a contratación por servicios no personales, a fin de determinar si esta ha ocultado en su trasfondo una relación contractual de naturaleza laboral. En su orden la parte demandante ha acreditado la prestación personal de servicios para la demandada en el periodo 01.01.2000 al 31.12.2008 tanto con los contratos de locación de servicios, enmiendas y adendas, suscritos entre la demandante y demandada los que obran de folios 02 a 07 y 11 a 26, de los que aparece que la empleadora mes a mes ha requerido de la prestación de los servicios de la demandante, asimismo ha acreditado con las copias del Acta de Actuación Inspectiva por Denuncia que obra de folios 10 a 12, la labor que desarrollaban el demandante estaba sujeta a subordinación con reconocimiento del propio jefe inmediato, tal como ha quedado descrito en dichos documento.
7. Otras razones importante para estimar la existencia de una relación laboral encubierta es que ha existido de por medio una remuneración, la que al caso analizado está plenamente acreditado con los montos por los cuales se habría estado contratando a la demandante, las que ha sido desde los cuatrocientos nuevos soles, hasta los seiscientos soles (esto dentro del periodo bajo análisis)
8. Con lo expuesto es posible concluir que al haberse acreditado adicional a la existencia de su prestación personal del servicios, el cumplimiento de otros elementos que denotan la existencia de una contrato de naturaleza laboral como el exigido por el artículo 4° del D.S. 003-97-TR, podemos concluir que la relación contractual entre la demandante y la demandado en periodo 01.01.2000 al 31.12.2008 ha sido de naturaleza laboral, sujeta a plazo indefinido, habiéndose producido una desnaturalización y que dada las circunstancias expuestas la demandada ha pretendido ocultar la relación laboral existente, simulando una prestación de servicios de naturaleza civil, existiendo el en

fondo una relación laboral sujeta al Régimen de la Actividad Privada Decreto Legislativo No. 728.

De la disociación del Contrato Administrativo de Servicios del periodo 02.01.2009 al 17.10.10 al de contratación por locación de servicios comprendido en el periodo 01.01.2000 al 31.12.2008

9. Para resolver este extremo debe tenerse en consideración que la jurisprudencia nacional ha establecido que, *"sin poner en discusión la constitucionalidad de la contratación administrativa de servicios, esta no puede reemplazar o sustituir, cuando no media interrupción de los servicios personales a un contrato de trabajo a plazo indeterminado pre -existente, establecido jurisdiccionalmente por la desnaturalización de un contratación civil de locación de servicios, en tanto dicho contrato posee una menor entidad protectora, es decir otorga menores derechos y beneficios laborales que el contrato de trabajo tipo o a plazo indeterminado, por lo tanto, no es posible jurídicamente admitir la desmejora o modificación in pejus del estatus jurídico del trabajador que ya ha incorporado a su patrimonio derechos, merced al contrato realidad que ha iniciado con la demandada, y que ha mantenido sin interrupción alguna"* (Casación 007-2012, 11 de mayo del 2012).
10. Esta interpretación guarda relación con el principio de condición más beneficiosa para el trabajador, según el cual la cual no cabe desmejorar la situación del trabajador, obtenida previamente de una fuente no normativa (por ejemplo el contrato de trabajo)¹; lo cual ocurre en el presente caso, porque el patrimonio de derechos adquiridos por el demandante, proviene del contrato de trabajo habido entre las partes desde el inicio de sus servicios, conclusión ineludible al establecerse la invalidez de la contratación civil a la que indebidamente fue sometido el accionante. Sin duda uno de esos derechos es el de la estabilidad en el empleo, reconocido por la ley (artículo 22 de la Ley de

¹ Américo Plá señala: *"La regla de la condición más beneficiosa supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determinada que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que ha de aplicarse"* (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. *"Los Principios del Derecho del Trabajo"*. Ediciones Depalma, Buenos Aires, Año 1978, página 60).

Productividad y Competitividad Laboral²), por lo tanto, es nulo el acto jurídico de disposición del derecho a la estabilidad laboral, mediante la suscripción de un contrato de trabajo que desmejore el derecho a la estabilidad laboral. Recordemos que en el contrato administrativo de servicios, la estabilidad laboral se limita al plazo de duración del contrato, mientras que en el Régimen Laboral 728 –aplicable al demandante– la estabilidad laboral equivale a la indeterminación del plazo. De igual manera, el contrato administrativo de servicios, aun teniendo naturaleza laboral, no otorga a los trabajadores beneficios como la CTS, por ejemplo, lo cual lo hace menos beneficioso que el régimen general.

11. Por lo expuesto en este caso en particular, no puede desasociarse el contrato administrativo de servicios al periodo anterior (contratación civil, declarado según fundamentos anteriores de naturaleza laboral), pues colisiona con el estatus contractual ya adquirido previamente, el cual se encuentra además protegido por el artículo 62 de la Constitución³; se afectaría además, el contenido esencial del derecho al trabajo consagrado en el artículo 22 de la Constitución, que consagra el derecho a acceder a un empleo, a *permanecer* en él mientras no se incurra en causa justa de despido y a la *protección* contra el despido arbitrario⁴.

² Artículo 22 Ley de Productividad y Competitividad Laboral: Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad, que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador. La demostración de la causa corresponde al empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido.

³ Artículo 62 Constitución: La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.

⁴ El Tribunal Constitucional – Expediente número 1124-2001-AA/TC, seguido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y FETRATEL, Caso FETRATEL, en el fundamento 12, ha señalado, respecto al contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, que: “El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22º de la Constitución. Este Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Aunque no resulta relevante para resolver la causa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho es el que resulta relevante para resolver la causa. Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa”.

Sobre el pago de beneficios sociales demandados y determinación de la remuneración computable para su pago

12. Ahora bien, establecida la relación laboral entre la demandada y la demandante debemos establecer si la primera ha cumplido con el pago de sus obligaciones laborales y al respecto debemos señalar que la Ley Procesal de Trabajo No. 26636 ha establecido específicamente en el artículo 27 inciso 3 que incumbe al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo; al caso analizado la demandada no ha acreditado haber cumplido con cancelar los beneficios sociales que le corresponderían al demandado.

Compensación por Tiempo de Servicios

13. Este beneficio tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese del trabajo y de promoción del trabajador y de su familia, el mismo que se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral. En el caso de autos, el demandante está reclamando el pago de Compensación por Tiempo de Servicios de todo el periodo laborado, esto es, del 01.01.2000 al 17.10.2010 y para el cálculo de dicho beneficio social se deberá de tener en cuenta, como remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, conforme lo disponen los artículos 9º, 16º, y 18º del Decreto Supremo Nº 001-97-TR, en tal sentido la remuneración se toma en cuenta dependiendo del periodo a liquidarse y se determina en base al sueldo o treinta jornales que perciba el trabajador según sea el caso, en los meses de abril y octubre de cada año según corresponda⁶. Debemos dejar anotado que al no contar con datos precisos respecto a la remuneración que ha correspondido al demandante debemos estar a las presunciones previstas en el artículo 40 de ley Procesal del Trabajo No. 26636, en tanto contamos con información referencial del ingreso que tenía el demandante en las fechas cercanas a la que debía hacerse el aporte, así como el

⁶ Artículo 10º Decreto Supremo Nº 001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios.

incumplimiento de la exhibición de las planillas y boletas del pago de la entidad demandada.

Cálculo de los Depósitos: Del periodo comprendido entre 01.01.2000 al 17.10.2010, corresponde dicha forma de depósito y ha acumulado los siguientes periodos:

- Periodo liquidado del 01.01.00 al 30.04.00 (periodo incompleto), la remuneración computable asciende a la suma de: S/ 466.67 (400.00 + 66.67) esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, que da como resultado por CTS la suma de: S/ 155.55 (466.67/12 x 04 meses).
- Periodo liquidado del 01.05.00 al 30.10.00 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/ 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/ 350.00 (700.00/12 x 06 meses).
- Periodo liquidado del 01.11.00 al 30.04.01 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/ 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/ 350.00 (700.00/12 x 06 meses).
- Periodo liquidado del 01.05.01 al 30.10.01 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/ 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/ 350.00 (700.00/12 x 06 meses).
- Periodo liquidado del 01.11.01 al 30.04.02 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/ 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos:

1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00
(700.00/12 x 06 meses).

- Periodo liquidado del 01.05.02 al 30.10.02 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00 (700.00/12 x 06 meses).
- Periodo liquidado del 01.11.02 al 30.04.03 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00 (700.00/12 x 06 meses).
- Periodo liquidado del 01.05.03 al 30.10.03 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00 (700.00/12 x 06 meses).
- Periodo liquidado del 01.11.03 al 30.04.04 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00 (700.00/12 x 06 meses).
- Periodo liquidado del 01.05.04 al 30.10.04 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00 (700.00/12 x 06 meses).
- Periodo liquidado del 01.11.04 al 30.04.05 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 700.00 (600.00 +

100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00 ($700.00/12 \times 06$ meses).

- Periodo liquidado del 01.05.05 al 30.10.05 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00 ($700.00/12 \times 06$ meses).
- Periodo liquidado del 01.11.05 al 30.04.06 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00 ($700.00/12 \times 06$ meses).
- Periodo liquidado del 01.05.06 al 30.10.06 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 700.00 (600.00 + 100.00), esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 350.00 ($700.00/12 \times 06$ meses).
- Periodo liquidado del 01.11.06 al 30.04.07 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 816.66 (700 + 116.66) esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 408.33 ($816.66/12 \times 06$ meses).
- Periodo liquidado del 01.05.07 al 30.10.07 (semestre completo), la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 816.66 (700 + 116.66) esto es la remuneración básica y los complementos remunerativos: 1/6 de gratificaciones, por lo que le corresponde la suma de: S/. 408.33 ($816.66/12 \times 06$ meses)

(991.66/12 x 05 meses) más S/ 44.07 (991.66/12)/30 = 2.75 por día x 16 días; lo que daría un total S/ 457.26.

Monto a pagar por concepto de CTS: Al no haberse acreditado los depósitos respectivos o el pago directo a la demandante, de acuerdo a lo calculado al demandante se le adeuda por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios la cantidad de S/ 8,108.62.

VACACIONES:

14. Este beneficio social es el derecho del trabajador a suspender la prestación del servicio en la oportunidad señalada por la ley, sin la pérdida de su remuneración habitual; con el fin de atender a los deberes de restauración orgánica y de las disposiciones legales. Las vacaciones, están reguladas por el Decreto Legislativo N° 713 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-92-TR, y se debe tener en cuenta que para este concepto existe tres clases de vacaciones, como son: las no gozadas y no pagadas, las simples y las truncas.

Las **vacaciones no gozadas y no pagadas**, es aquella cuando no se gozó del descanso físico durante el año siguiente al año trabajado, en esos supuestos se pierde el derecho al descanso; pero se gana la triple remuneración vacacional (artículo 23° del Decreto Legislativo No. 713); las **vacaciones simples**, es aquella cuando ya se cumplió con el año de servicio y además con el requisito de asistencia, (primer párrafo del artículo 22° del Decreto Legislativo N° 713); y, las **vacaciones truncas**, es aquella cuando se produce el cese del trabajador antes del cumplimiento del año de servicio (segundo párrafo de artículo 22° Decreto Legislativo N° 713).

15. En cuanto a este beneficio laboral, y según el escrito de demanda se petitiona le pago por descanso vacacional adquirido y no gozado esto es vacaciones no gozadas y vacaciones truncas, así tenemos:

a) **Vacaciones adquiridas y no pagadas:** En el presente caso, la pretensión del actor corresponde a las vacaciones adquiridas y no pagadas, conforme a su

seguir laborando-, por lo que se deberá pagar la cantidad de S/. 416.66 que corresponde a S/. 708.33 (850/12 x 10 meses) sumado 37.77 (850/12/30x 16 días).

En resumen por concepto de vacaciones se adeuda: S/. 10 554.43

GRATIFICACIONES

16. Sobre el extremo demandado por gratificaciones, conforme a la Ley N° 27735 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2002-TR, se debe tener en cuenta que para este concepto existe tres clases de gratificaciones como son las ordinarias, las proporcionales y las truncas.

Las gratificaciones ordinarias o completas: Son aquellas que se originan como consecuencia de que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponde percibir este beneficio (*periodo completo enero-junio o julio-diciembre*), estar en uso del descanso vacacional, de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo subsidio de la seguridad social o por accidente de trabajo. Además, de laborar el periodo completo enero - junio o julio - diciembre, y estar con vínculo laboral vigente en la oportunidad de su otorgamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Ley, concordado con el numeral 3.3 del artículo 3° del D.S. N° 005-2002-TR; **La gratificación proporcional:** Es aquella que se configura cuando el trabajador ha venido laborando un tiempo menor a los seis meses en cualquiera de los periodos enero-junio o julio-diciembre y cuyo pago será proporcional a los meses laborados, siempre que haya laborado como mínimo un mes en el semestre correspondiente, con la deducción de los días que no se consideren tiempo efectivamente laborado, a razón de un treintavo de la fracción correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° segundo párrafo de la Ley, concordado con el numeral 3.4 del artículo 3° del D.S. N° 005-2002-TR; en tanto que **La gratificación trunca:** Es aquel derecho que se origina al momento del cese del trabajador, siempre que tenga cuando menos un mes íntegro de servicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 5° del mencionado del D.S. N° 005-2002-TR.

17. En el caso de autos, la demandante ha demandado las gratificaciones por fiestas patrias y navidad y gratificaciones truncas por el periodo de tiempo laborado tanto mediante contrato de locación de servicios como por contratos administrativos de servicios esto es desde 01.01.2000 al 17.09.2010. Analizando el primer este pedido, y lo probado en el proceso, encontramos que de acuerdo al periodo de tiempo laborado la demandante le corresponde tanto gratificaciones ordinarias y gratificaciones truncas como pasaremos analizar seguidamente.

- Gratificaciones Ordinarias o completas:** Para el caso de autos, el periodo que comprende el récord laboral del demandante (01.01.2000 hasta el 17.09.2010), y de acuerdo a la Ley N° 27735 en su artículo 1° prescribe que: *“La presente Ley establece el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de fiestas patrias y la otra con ocasión de la navidad”*, asimismo en el artículo 2° de la misma norma señala: *“El monto de cada una de las gratificaciones será equivalente a la remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponda otorgar el beneficio (...)”*, por lo que, a la demandante le corresponde percibir:

Gratificación	Remuneración	Cálculo	Monto
FP y Nav 2000	400.00	400.00x2	800.00
FP y Nav 2001	600.00	600.00x2	1,200.00
FP y Nav 2002	600.00	600.00x2	1,200.00
FP y Nav 2003	600.00	600.00x2	1,200.00
FP y Nav 2004	600.00	600.00x2	1,200.00
FP y Nav 2005	600.00	600.00x2	1,200.00
FP y Nav 2006	600.00	600.00x2	1,200.00
FP y Nav 2007	700.00	700.00 x2	1,400.00
FP y Nav 2008	700.00	700.00 x2	1,400.00

récord laboral, del 01.01.2000 al 17.09.2010. Cabe indicar que ello trae como consecuencia sólo el pago de una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso físico, de conformidad con lo previsto en los literales b) y c) del artículo 23º del Decreto Legislativo N° 713, más no el literal a), por lo que se sobreentiende que ha sido pagada en su oportunidad y, el monto de la remuneración es aquella que hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando, tal y como se lo ha establecido expresamente en el primer párrafo del artículo 15 del D. Leg N° 713*.

Para el caso en concreto tenemos:

PERIODOS	REMUNERACION	CALCULO	MONTO
2000-2001	400.00	400x2	800.00
2001-2002	600.00	600x2	1200.00
2002-2003	600.00	600x2	1200.00
2003-2004	600.00	600x2	1200.00
2004-2005	600.00	600x2	1200.00
2006-2007	700.00	700x2	1400.00
2007-2008	700.00	700x2	1400.00
2009-2010 (hasta 01.01.2010	850.00	850x2	1700.00
TOTAL	S/. 10,100.00		

- b) **Vacaciones Truncas:** En el presente caso comprende el periodo desde el 01.01.10 al 17.09.10 (10 meses y 16 días), en tal sentido, para este concepto y para el presente caso, la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 850,00 -remuneración percibida habitual y regularmente en caso de

* Art. 15 del D. Leg N° 713 "La remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando".

FP y Nav 2009	700.00	700.00 x2	1,400.00
FP 2010	850.00	850.00x1	850.00
TOTAL			13,050.00

- **Gratificaciones Truncas:** Del mismo modo se verifica un periodo trunco comprendido del 01.07.10 al 17.09.10 (03 meses y 16 días) en tal sentido, para este concepto, la remuneración computable asciende a la suma de: S/. 850.00-remuneración percibida habitual y regularmente en caso de seguir laborando-, por lo que siendo ello así, se manda que se pague la cantidad de S/. 425 $(850.00/6 \times 3 \text{ mes})$ más $(850/6)/(30) \times 16 =$ S/. 75.55.
- En consecuencia, haciendo una sumatoria de las gratificaciones ordinarias adeudadas más las gratificaciones truncas se debe cancelar S/. 13, 550.55.

Monto total a liquidar por concepto de beneficios sociales demandados

18. Haciendo una sumatoria total de los montos calculados por conceptos de los beneficios sociales demandados, tenemos:

CONCEPTOS	MONTOS
C.T.S.	8,108.62
Vacaciones	10,554.55
Gratificaciones	13,550.55
TOTAL	32,213.72

Esto es TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE SOLES CON 72/100 CENTIMOS (S/. 32,213.72), monto al cual corresponde adicionar los **intereses legales** a liquidarse en ejecución de sentencia.

DECISIÓN

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, concordante con los artículo 1°, 26°, 138° y 139° de la Constitución Política del Perú, Ley Procesal del Trabajo No.

26636; así como artículo 57° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Administrando Justicia a Nombre de la Nación:

FALLO:

1. Declarando **FUNDADA EN PARTE** la demanda instaurada por ADOLFO LIÑAN HUACCHA RONCAL contra el INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA, en consecuencia: DECLARO LA EXISTENCIA de una relación de naturaleza laboral a plazo indefinido entre la demandada y el demandante, sujeta al régimen común de la actividad privada, desde el 01.01.2000, en consecuencia dispongo su inclusión en Planillas; DECLARO la nulidad de los Contratos Administrativos de Servicios CAS, suscritos por la entidad demandada a partir de enero del 2009, y sin efecto legal; FUNDADA la pretensión de pago de beneficio sociales, por lo que ORDENO el pago a favor del demandante de los beneficio dejados de percibir desde el inicio de la relación laboral, consistentes en gratificaciones ordinarias por 13,050.00, gratificaciones trucas por S/.500.55; así como vacaciones no gozadas por S/. 10,100.00 y vacaciones trucas por S/. 746.1; además del pago de la compensación por tiempo de servicios por S/ 8,108.62; ascendiendo todo ello a una total de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE SOLES CON 72/100 CENTIMOS (S/. 32,213.72); a los que debe añadirse los interese legales correspondientes a calcularse en ejecución de sentencia.
2. Sin costas ni costos.
3. Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de ley. Interviene el secretario judicial que autoriza por disposición Superior.
4. **TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.**



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CAJAMARCA-Sede Qhapac Ñan

EXPEDIENTE : 00155-2016-0-0601-JP-FC-02
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : HEINER E. CASTREJON SANGAY
ESPECIALISTA : NELLI ALIAGA PORRAS
DEMANDADO : CRISTHIAN DAMIAN BRICEÑO QUISPE
DEMANDANTE : KARLA ISABEL INGA SAMANIEGO

SENTENCIA N° 228 – 2017 – F

RESOLUCION NÚMERO NUEVE:

Cajamarca, veinticuatro de julio
del dos mil diecisiete.-

VISTO, el presente proceso de familia, para sentenciar, se procede a efectuarlo en los siguientes términos;

A.- PARTE EXPOSITIVA - ANTECEDENTES:

a) De la demanda.

De la revisión del escrito de demanda, de folios 18 a la 23, se advierte que la señora Karla Isabel Inga Samaniego, interpone demanda de alimentos, a fin de que el demandado Cristhian Damián Briceño Quispe, cumpla con pasar una pensión alimenticia mensual por el monto de S/ 500. 00 (quinientos y 00/100 nuevos soles) a favor de su hijo Cristhian Jhair Briceño Inga; sustentando su demanda con los fundamentos expuestos en su escrito de demanda.

b) Auto admisorio.

La demanda es admitida a trámite en la vía del proceso único mediante resolución número uno, de folios 24 a la 27, confiriéndose traslado al demandado para que la conteste dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.

c) De la rebeldía – Incorporación al proceso.

Mediante resolución número dos, de fecha veintuno de abril del dos mil dieciséis, de folios 33, se declara rebelde al demandado; en consecuencia, se fija fecha de audiencia única para el día diecinueve de julio del año dos mil dieciséis, a horas tres de la tarde en el local del Juzgado.

d) Audiencia Única.

La Audiencia Única se lleva a cabo con la parte demandante y su abogada, y el demandado, en la cual se declara saneado el proceso, se indica lo pertinente respecto de la

conciliación, se fijan los puntos controvertidos, se admite y actúa los medios probatorios, se ordena la actuación de los medios probatorios de oficio; siendo que respecto de los alegatos dijeron que lo presentarían por escrito, y se comunica que se emitirá sentencia cuando llegue el Informe y el acta de nacimiento requerida, por lo que siendo el estado del proceso el de emitir sentencia; se viene a emitir la que corresponde en los términos que se está exponiendo:

De los puntos controvertidos

Es preciso señalar que, en la Audiencia Única, se han fijado como puntos controvertidos los siguientes:

- 1) *Determinar si le asiste la obligación al demandado de acudir con una pensión de alimentos a favor del menor Cristhian Jhain Briceño Inga.*
- 2) *Determinar las necesidades que tiene el menor antes mencionado.*
- 3) *Determinar las posibilidades económicas del demandado.*

B.- PARTE CONSIDERATIVA:

CONSIDERACIONES NORMATIVAS Y JURISPRUDENCIALES QUE SUSTENTAN LA DECISIÓN.

De la tutela jurisdiccional efectiva.

2. 1.- En virtud de lo prescrito en el artículo 139° núm. 3 de la Constitución Política del Perú, artículo 7° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, de aplicación al presente proceso, *toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso.*

De la valoración de los medios probatorios.

2. 2.- El presente proceso, se viene tramitando conforme a la normatividad que regula el proceso único, establecido en el Código de los Niños y Adolescentes, norma especial que no regula lo pertinente respecto de la valoración de la prueba, razón por la cual en virtud de lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del referido Código, es de aplicación supletoria el Código Procesal Civil.

2. 3.- El Código Procesal Civil en el artículo 197° prescribe que los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.

Al respecto en la Casación Nro. 2601-98/Lima¹, se indica "... La función jurisdiccional básica de un Juez es la de resolver un conflicto, solución que debidamente fundamentada es plasmada en una sentencia, en la que en su parte considerativa el Juez expone las valoraciones esenciales y determinantes de los medios probatorios actuados en el proceso, teniendo como mecanismo de valoración su apreciación razonada, lo cual no es otra cosa que una manifestación de su independencia jurisdiccional". Asimismo, en la Casación Nro. 3323-

¹ CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Explicado en su Doctrina y Jurisprudencia; TOMO I, GACETA JURÍDICA; Primera Edición; Lima - agosto 2014. Pág. 801.

2007/Lambayeque², se señala: "... La valoración del caudal probatorio previamente aceptado al proceso, es una actividad mental atribuida única y exclusivamente la juez, quien con reglas de la lógica, la ciencia, la técnica o de su experiencia compone los hechos, otorgándole jurídicamente el carácter de cierto. En tal sentido, en nuestro ordenamiento jurídico -artículo 197 del Código Procesal Civil- se ha incorporado la libre valoración de la prueba por parte del juez; actividad mental que debe realizarse coherente y razonablemente, ya que allí radica el límite a la libertad de valoración; pues de lo contrario la decisión se tomaría en una arbitraria...". Complementado, se tiene que la Casación Nro. 1207-2008/Uma³, indica: "... En nuestro ordenamiento jurídico -artículo 197 del Código Procesal Civil- se ha incorporado la libre valoración de la prueba por parte del juez; actividad mental [que] debe realizarse coherente y razonablemente, con el objetivo de emitirse una sentencia materialmente justa, ya que allí radica el límite a la libertad de valoración...".

2. 4.- En tal sentido, el Juez, tiene la libertad de apreciar las pruebas actuadas de conformidad con las reglas de la lógica, la ciencia y de la experiencia, lo que conlleva a que la valoración de la prueba sea válida y los argumentos sean convincentes, sólidos, racionales, y alejados de la arbitrariedad.

Del principio del interés superior del niño y adolescente.

Normatividad de rango constitucional respecto del Interés Superior del Niño y Adolescente.

2. 5.- Nuestra norma fundamental -Constitución Política del Perú-, en su artículo 6° prescribe que: "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono (...)" (el énfasis es nuestro).

Normatividad Internacional respecto del Interés Superior del Niño y Adolescente.

2. 6.- La Convención Sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3°, establece que " 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño y adolescente (...)" (el énfasis es nuestro). Es preciso señalar, que la Convención entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

2. 7.- El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General N° 14, sobre el derecho del niño a que su Interés superior sea una consideración primordial, desarrolla la naturaleza jurídica, la relación con los demás principios, la evaluación y determinación, así como las garantías procesales para velar por la observancia del Interés superior del niño.

En la indicada observación, el párrafo número cuatro y cinco señala: "(...) 4. El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. El Comité ya ha señalado que "lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención".

² Ibidem. Pág. 801-802.

³ Ibidem. Pág. 802.

Estado”. Por dicha razón, este principio también impone que la elaboración, interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los niños, así como las políticas públicas y programas sociales, deban estar dirigidas al pleno, armonioso e integral desarrollo de su personalidad en condiciones de libertad, bienestar y dignidad (...).”

2. 12.- De las fuentes del derecho que regulan el principio del Interés superior de la niña antes señalada, se concluye que en toda decisión que se adopte, deberá observarse el principio del Interés superior del niño y adolescente, desde sus tres ámbitos: como derecho sustantivo, como principio jurídico interpretativo fundamental, y como norma de procedimiento, buscando en todo momento la optimización del ejercicio de sus derechos fundamentales para lograr su pleno bienestar.

De los alimentos.

2. 13.- Nuestra norma fundamental en su artículo 6° establece que: “(...) Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (...).” y la Convención sobre los derechos del niño, de la que nuestro Estado forma parte, en su artículo 27° núm. 2 y 4, prescribe: “(...) 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. (...) 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero (...).”

2. 14.- El artículo 92° del Código de los Niños y Adolescentes, prescribe que “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica y recreación del niño o del adolescente (...).” y el artículo 472° del Código Civil, prescribe que: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia (...).” los mismos que se regulan por el Juez, conforme lo prescrito en el artículo 481° del Código Civil, modificado por Ley N° 30550: “ Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor. El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”.

2. 15.- De lo antes indicado se tiene que los alimentos constituyen un derecho fundamental en tanto son inherentes a la naturaleza humana; encontrándose destinados a garantizar el derecho que tiene toda persona a la subsistencia, por ello, su importancia radica en la finalidad que persigue, la cual responde a cubrir el estado de necesidad de quien lo solicita; y para su otorgamiento se tiene en cuenta tanto las necesidades del acreedor alimentario, como las posibilidades económicas del obligado.

Al respecto, en la Casación Nro. 1652-06/Lima⁵, se ha establecido que: “(...) Son condiciones para ejercer el derecho a pedir alimentos: 1) La existencia de un estado de

⁵ CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Explicado en su Doctrina y Jurisprudencia, TOMO III, GACETA JURÍDICA, Primera Edición, Lima - agosto 2014. Pág.48.

necesidad de quien los pida, 2) La posibilidad económica de quien debe prestarlos, y 3) La existencia de una norma legal que establezca dicha obligación (...)].

ANÁLISIS DEL PROCESO.

2. 16.- La pretensión demandada en el presente proceso, es una de fijación de alimentos, mediante la cual la parte demandante pretende que el demandado *Cristhian Damián Briceño Qulspe* acuda con una pensión de alimentos a favor de su hijo *Cristhian Jhair Briceño Inga*.

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA PRETENSION DE ALIMENTOS

2. 17.- En cuanto a la obligación alimentaria del demandado, con la respectiva Acta de Nacimiento del niño *Cristhian Jhair Briceño Inga*, que obra a folios 04, se acredita de forma Indubitable el vínculo paterno - filial existente entre el demandado y el Indicado niño; por lo que, dicho demandado se encuentra en la obligación de proveer a su sostenimiento, conforme lo prescriben artículo 93° del Código de los Niños y Adolescentes, y los artículos 423° Inciso 1, 474° Inciso 2 del Código Civil.

2. 18.- En lo que respecta a las necesidades de la niña alimentista, están acreditadas las necesidades del niño *Cristhian Jhair Briceño Inga*, quien se encuentra en una edad donde le es imposible proveer a su propia subsistencia y satisfacer sus más elementales necesidades, no sólo por carecer de medios propios sino también por la imposibilidad de procurárselos el mismo, pues conforme a su Acta de Nacimiento de folios 04, cuenta en la actualidad con diez años de edad aproximadamente; así mismo al ser menor de edad conforme lo señala Mosquera Vásquez "se presume que está en estado de necesidad por la imposibilidad que tiene para satisfacer sus necesidades, por lo que sus progenitores están en la obligación de acudirles con una pensión de alimentos"⁶.

El alimentista, se encuentra en edad donde necesita improrrogablemente el sustento alimentario que permita su desarrollo integral, no sólo en su aspecto físico, sino también en el aspecto psíquico; por ello, además de lo indispensable para su sustento (propriadamente los alimentos), requiere de vestido, vivienda, educación - recreación, hecho que se tendrá en cuenta al momento de fijarse el monto de la pensión; pues como es de verse de las documentales de folios 05, 06 a la 13, el niño se encuentra estudiando e incurre gastos económicos; así como, de asistencia médica al que tienen derecho los menores y el cual forma parte del derecho a la salud, reconocido en la Constitución Política del Estado en su artículo 7°, en los siguientes términos, "todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar [...]", y el cual es entendido como el funcionamiento armónico del organismo tanto del aspecto físico como psicológico del ser humano⁷. De allí que se tiene en cuenta también la asistencia médica y psicológica que debe recibir el niño acreedor alimentario.

2. 19.- Respecto a determinar las posibilidades económicas del demandado; la demandante ha alegado que el demandado trabaja como vigilante de seguridad en la Empresa *Komatsu* percibiendo mensualmente la suma de mil quinientos nuevos soles aproximadamente; argumento que si bien no es sustentado con ningún medio probatorio, empero el demandado tiene la situación jurídica procesal de rebelde, y de conformidad con lo establecido en el artículo 461° del Código Procesal Civil, la rebeldía del demandado, causa presunción relativa de verdad de los hechos expuestos en la demanda, lo cual será valorado con las reservas del caso y de manera objetiva, razonable y prudente; y de conformidad con lo señalado por la parte

⁶ En Diálogo con la Jurisprudencia, N° 134, Noviembre de 2009, Año 15, págs. 17 a 18.

⁷ Expediente N.° 03330-2004-PA/TC, Fundamento 44.

pertinente del artículo 481* del Código Civil, no es necesario investigar rigurosamente los ingresos del que debe prestar los alimentos.

Asimismo, con la documental consistente en las Actas de Nacimiento de folios 52, se acredita que el demandado Cristhian Damián Briceño Quispe, es padre del niño Giordano Alexander Briceño Barboza, nacido el siete de diciembre del dos mil quince, con el cual tiene obligación familiar del mismo rango prioritario que su hijo para el cual se solicita alimentos en el presente proceso; no obstante, en virtud del *principio de paternidad responsable*, la responsabilidad alimentaria que pueda tener con su indicado hijo no puede limitar ni restringir el derecho alimentario y el interés superior de su hijo Cristhian Jhair Briceño Inga, empero, la carga familiar adicional, será valorado al momento de fijarse el monto de la pensión de alimentos.

De igual modo es necesario precisar que si bien no se ha llegado a acreditar el centro laboral del demandado ni el monto de sus ingresos, pues conforme se advierte de la resolución número siete de folios 70, se ha prescindido del medio probatorio de oficio, consistente en el Informe que deberá remitir la Empresa Prosegur SRL; empero el demandado en la audiencia única, al momento de brindar sus datos afirmó que ha trabajado como vigilante, pero que le han sacado del trabajo, y que percibía un aproximado de setecientos cincuenta soles como sueldo mínimo pero que no tenía trabajo y estaba viviendo de su liquidación, afirmaciones que se valoran como declaración asimilada de conformidad con lo establecido en el artículo 221* del Código Procesal Civil; Por lo que el demandado tiene condiciones para laborar (no se encuentra incapacitado para el trabajo y afirma que ha laborado como vigilante) y en virtud del principio de *paternidad responsable*, al tener experiencia laboral y no haber acreditado sufrir de alguna incapacidad, está en condiciones de laborar y proveerse de la mayor cantidad de recursos para cumplir con la obligación alimentaria de sus hijos.

2. 20.- De todo ello se concluye, que el demandado es una persona de veintinueve años de edad (nació el 17/11/1987), que está en condiciones de proveerse de los recursos que sean necesarios, para poder otorgar una pensión alimenticia razonable y digna a su hijo *Cristhian Jhair Briceño Inga*, pues tiene la condición de rebelde, no se ha acreditado en el presente proceso que el demandado sufra de alguna incapacidad física o mental que le impida trabajar, y si bien ha acreditado que cuenta con carga familiar que será valorado al momento de fijarse la pensión de alimentos, pero ello no puede perjudicar los derechos y el interés superior del alimentista para el que se solicita alimentos en el presente proceso.

2. 21.- Teniendo en cuenta las necesidades del niño alimentista, las posibilidades económicas del demandado, así como la obligación que tiene la progenitora del niño alimentista, señora Karla Isabel Inga Samanlego, de contribuir a la manutención de su hijo⁸ *la misma que realiza labor en el hogar para que su hijo satisfaga sus necesidades, pues la edad del alimentista así lo requiere*, sin que ello signifique que se esté valorando las condiciones económicas de la demandante, por cuanto ello de conformidad a lo predicho en la Casación N° 3874-2007-Tacna⁹ es indebido al no haber sido materia de prueba en el presente proceso de alimentos, criterio que se comparte; el Juzgador considera fijar prudencial y razonablemente la pensión alimenticia con la que deberá acudir el demandado Cristhian Damián Briceño Quispe a favor de la alimentista de autos en la suma mensual ascendente a doscientos ochenta soles para el niño *Cristhian Jhair Briceño Inga* y para fijarse la pensión se ha valorado de manera conjunta y

⁸ A raíz de la coparentalidad, entendida como el ejercicio conjunto y activo de los roles parentales por parte de ambos progenitores, quienes se comprometen a compartir la crianza de sus hijos, ambos padres en igualdad de condiciones deben contribuir en la formación, manutención y cuidados de sus hijos.

⁹ Emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República.

razonada los medios probatorios que obran en el expediente, por lo que los medios probatorios se los valora teniendo en cuenta el medio familiar, y la edad de la alimentista (se encuentra en edad escolar) y la carga familiar adicional del demandado, y el hecho que no se ha acreditado que el demandado sufra de alguna incapacidad física o mental que le impida laborar, y el monto fijado se considera razonable para satisfacer en lo mínimo las necesidades primordiales del alimentista y no vulneraría derechos fundamentales del demandado.

Comunicación a las partes procesales.

2. 22.- Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica y los actos procesales, del presente proceso, se cumple con informar a las partes procesales, la demandante Karla Isabel Inga Samaniego [madre y representante legal del alimentista Cristhian Jhair Briceño Inga], y al demandado Cristhian Damián Briceño Quispe, lo siguiente: a) La pensión de alimentos será depositada en la cuenta de ahorros exclusiva para el pago y cobro de alimentos que deberá ser apertura; y el modo de acreditar el pago de la pensión de alimentos, serán los depósitos en la cuenta bancaria, depósitos judiciales, y excepcionalmente el medio de pago idóneo que de manera expresa e indubitable acredite el pago de la pensión de alimentos; b) El plazo de prescripción de la acción que proviene de la pensión alimenticia, es de quince años de conformidad con lo establecido en el artículo 2001°, núm. 5 del Código Civil; y las causales de suspensión e interrupción de la prescripción están establecidas en el artículo 1994° y 1996° del referido Código; c) El incumplimiento de las pensiones alimenticias fijadas pueden conllevar a que se remita copias certificadas al Fiscal Provincial de Tumo, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones de conformidad con lo establecido en el artículo 566-A del Código Procesal Civil; e inscribirse en el Registro de deudores alimentarios morosos, de conformidad con el trámite establecido en la Ley N° 28970, y su Reglamento; c) Siendo la variabilidad, una característica de los alimentos, las partes procesales ante el surgimiento de un hecho objetivo que justifique su variación (aumento, reducción, variación en la forma de prestar alimentos, exoneración, extinción, etc.) tienen la facultad de solicitar tutela jurisdiccional, ejercer su derecho de acción y proceder conforme a lo establecido por nuestro Ordenamiento Jurídico.

De las costas y costos del proceso.

2. 23.- Finalmente, se debe indicar que, por mandato legal, la actora está exonerada del pago de tasas judiciales por lo que es del caso exonerar al demandado el pago de costas. Además, resulta prudente y equitativo exonerar de la condena de costos al demandado, por cuanto la demanda es declarada fundada únicamente en parte y el demandado ha tenido razones para ejercer su derecho de defensa (ejemplo, alega carga familiar), y la demandante ha sido asesorada por abogado del MINJUS, y goza de gratuidad del proceso.

C.- PARTE RESOLUTIVA:

Por los considerandos antes expuestos y en mérito a lo previsto en el artículo 6° de la Constitución Política del Perú, artículo II del Título Preliminar y artículos 92° y 93° del Código de los Niños y Adolescentes; impartiendo Justicia a Nombre de la Nación, **SE FALLA:** Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por KARLA ISABEL INGA SAMANIEGO, en representación de su hijo Cristhian Jhair Briceño Inga, contra CRISTHIAN DAMIÁN BRICEÑO QUISPE, sobre alimentos; en consecuencia, **ORDENO:**

- 1) Que el demandado Cristhian Damián Briceño Quispe acuda con una pensión alimenticia equivalente a DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES (S/ 280. 00) a favor de su hijo Cristhian Jhair Briceño Inga, en forma mensual y por adelantada.

Pensión que empezará a correr desde el día siguiente de notificada la demanda que diera origen al presente proceso.

Monto que en mérito a lo señalado en el artículo 566° del Código Procesal Civil, deberá ser depositado en una cuenta de ahorros del Banco de la Nación que será aperturada a nombre de la demandante, la cual servirá exclusivamente para el pago y cobro de la pensión alimenticia ordenada, con tal fin OFICIESE en su oportunidad a dicha Institución financiera para los fines expuestos.

- 2) COMUNIQUESE a las partes que la presente sentencia se ejecutará aunque se interponga recurso de apelación, debiéndose formar el cuaderno de ejecución respectivo de ser necesario, de conformidad con lo previsto en el artículo 566° del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 28439; así mismo, se comunica que por Ley N° 28970 se ha creado el Registro de deudores alimentarios morosos, en el que se registrará a los obligados que adeuden tres cuotas sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencia judicial consentida o ejecutoriada, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada.
- 3) EXONÉRESE al demandado del pago de las COSTAS Y COSTOS del proceso.
- 4) MANDO que consentida o ejecutoriada que sea la presente; se practique la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, previa propuesta de cualquiera de las partes procesales. Se resuelve en la fecha debido a las recargadas labores del Juzgado.

NOTIFIQUESE a las partes procesales, con las formalidades y garantías de ley.-

PROCESO FAMILIA N° : 00058-2015-0-0601-SP-FC-01.
VÍA PROCEDIMENTAL : ÚNICO.
DEMANDANTE : FLOR MICAELA RIVASPLATA SUAREZ.
DEMANDADO : ANCELMO CARRIÓN TORRES.
PRETENSIÓN : ALIMENTOS.
JUZGADO DE PROCEDENCIA : SEGUNDO JUZGADO MIXTO DE LA FLORIDA.

SENTENCIA N° 069 - 2016

RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE.

Cajamarca, treinta y uno de octubre

del dos mil dieciséis.

I. MATERIA:

Es de conocimiento del Colegiado la apelación interpuesta por el demandado Ancelmo Carrión Torres (folios 45 a 47), contra la sentencia N° 010-2015, contenida en la resolución N° 05, de fecha 09 de junio de 2015 (folios 36 a 40), que declaró **fundada en parte** la demanda de alimentos, interpuesta por Flor Micaela Rivasplata Suárez, contra Ancelmo Carrión Torres; en consecuencia ordena al emplazado cumpla con asistir a su menor hijo Fabián Carrión Rivasplata, con ciento ochenta con 00/100 nuevos soles (S/.180.00) mensuales.

La apelación contiene los siguientes argumentos medulares:

- a) La sentencia apelada no contiene un razonamiento lógico e imparcial en la valoración de los medios probatorios para acreditar la pretensión planteada.
- b) Para establecer el monto de la pensión alimenticia se debe tener en cuenta las posibilidades económicas del obligado y las necesidades del alimentista, puntos que no se han tomado en cuenta, pues no se ha considerado que como agricultor percibe la suma diaria de S/. 8.00, siendo imposible que el apelante puede asumir el pago mensual de S/.180.00; por ello es que los demás juzgados de los pueblos y caseríos como el presente caso, imponen un monto no mayor de S/.100.00 por pensión de alimentos.

- c) Asimismo, no se ha advertido que la actora es una persona joven que se dedica a la venta de cosméticos y como tal está en la obligación legal de contribuir con la manutención de su menor hijo.

II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO: Mediante escrito postulatorio de demanda (folios 06 a 08) la accionante solicita que el demandado cumpla con pasar a su menor hijo, la suma de trescientos con 00/100 nuevos soles (S/.300.00) por pensión de alimentos.

SEGUNDO: Debe comprenderse por alimentos en su significado amplio, consistente en todo lo que nos ayuda a protegernos para poder vivir y desarrollarnos en forma digna, como lo prevén los artículos 472^{o(66)} del Código Civil y 92^{o(67)} del Código de los Niños y Adolescentes; cuya trascendencia y vigencia encuentra sustento en la propia dignidad de la persona humana; inclusive nuestra Constitución Política, en su artículo 6^{o(68)}, los ha contemplado de manera expresa como un derecho constitucional. Asimismo, la Constitución Política dispone que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1^o) y que tanto la comunidad como el Estado protegen especialmente al niño (artículo 4^o). Mientras que, el Código de los Niños y Adolescentes, artículo IX⁽⁶⁹⁾ del Título Preliminar, prescribe que en toda medida que adopte el Estado concerniente al niño se considerará el interés superior de éste y el respeto a sus derechos; en este entendido, tal como lo ha definido la Corte Suprema de Justicia, los alimentos son un derecho humano fundamental de atención prioritaria por cuanto se encuentra estrechamente ligado a la subsistencia y desarrollo de la persona, por tanto goza de protección⁽⁷⁰⁾.

⁶⁶ **Artículo 472°:** Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”.

⁶⁷ **Artículo 92°:** Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”.

⁶⁸ **Artículo 6°:** Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.

⁶⁹ **Artículo IX:** En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.

⁷⁰ Casación N° 2190-2003-Santa, considerando quinto.

TERCERO: Ahora bien, para fijar los alimentos se deben tener ciertos parámetros, los cuales han sido precisados en el artículo 481^{o(71)} del Código Civil, concernientes a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del obligado, atendiendo también a las circunstancias personales de ambos y básicamente verificando si el que debe prestarlos tiene otras obligaciones semejantes. Entonces, según se aprecia de autos, no está en discusión el entroncamiento familiar entre el demandado y su menor hijo, pues él no está negando su condición de padre de dicho menor, sino más bien sostiene que está pasando por una situación económica difícil y que no es posible acudir con el monto que peticiona la demandante (ver contestación de demanda de folios 21 a 24).

CUARTO: En tal sentido, para verificar las necesidades del menor de edad, se valora el hecho de que está cursando estudios de nivel primario en la Institución Educativa Primaria N° 821046, caserío Pampa de Séquez, distrito de la Florida, tal como se acredita con la constancia de folio 03, y como es natural en nuestro medio, llevar estudios en cualquier nivel genera gastos; asimismo, es evidente que el menor necesita asistencia para su alimentación, además de su vestimenta, medicina, entre otros, no siendo necesario hacer una investigación exhaustiva sobre dichas necesidades dada la edad del menor, que a la fecha cuenta con 07 años, pues ha nacido el 01 de octubre de 2008, según se verifica del acta de nacimiento de folio 02, y es lógico que estas necesidades se presumen, en tanto su minoría de edad hace entrever que requiere de alimentación, educación, vestido, medicina, momentos de recreación y demás necesidades básicas, para lograr el desarrollo integral de su persona. De igual manera, el artículo 235^{o(72)} del Código Civil, manda que ambos padres tienen la obligación de velar por el sostenimiento de los hijos, empero cuando uno de los padres se dedica al cuidado del menor, la norma obliga a que el otro sostenga a la familia, aunque sin desconocer la colaboración mutua en las labores, tal como lo prescribe el artículo 291^{o(73)} del mismo Código.

QUINTO: En el caso de autos, el apelante alega que se dedica a la labor de agricultor y percibe un pago diario de S/.8.00, o lo que es lo mismo S/.240.00 mensuales, no

⁷¹ **Artículo 481°:** Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos.

⁷² **Artículo 235°:** "Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. (...)"

⁷³ **Artículo 291°:** Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y otro campo.

obstante no lo acredita con ningún medio probatorio, incumplimiento la carga probatoria impuesta por el artículo 196° del Código Procesal Civil, que prescribe: *“Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”* Por el contrario, en autos está acreditado que la demandante es quien está cargo del menor de edad, inclusive el emplazado no lo ha negado, es decir, no es un punto que esté en discusión; por lo tanto al ser la madre quien se ocupa del cuidado de su menor hijo, corresponde al padre brindar el debido sustento, quien además no tiene otra obligación familiar que cumplir (por lo menos no lo ha demostrado en el proceso). Siendo así, el monto impuesto de S/.180.00 resulta justo y razonable, no siendo justificación alguna para pretender pasar solamente S/.80.00 mensuales (conforme lo propone el demandado en su contestación de demanda) el argumento de que está atravesando por una situación económica difícil, sustentado solamente en una declaración jurada de ingresos (folio 16), que bien sabido es, se elabora de manera unilateral según los intereses del propio emplazado, admitir el argumento del apelante implicaría colocar al menor de edad en una situación desfavorable a sus derechos constitucionales, los que más bien deben ser optimizados y resguardos por los padres, la sociedad y el Estado.

SEXTO: Abundando más, se toma en cuenta también el hecho de que el emplazado es una persona joven (26 años – ver DNI de folio 15) y como tal se encuentra en una etapa que perfectamente le posibilita tener un buen trabajo o desplegar mayor esfuerzo para realizarlo, tampoco ha demostrado tener alguna incapacidad física o mental que le imposibilite laborar con normalidad; por lo tanto, si él alega que está en una situación difícil, tanto más será complicada la situación de su menor hijo, quien únicamente debe recibir asistencia y no mayores barreras para su desarrollo. Por otro lado, no puede perderse de vista que además de estar al cuidado de su menor hijo, la actora seguramente también asumirá algunos gastos, puesto que los S/.180.00 mensuales no aseguran para nada la satisfacción de las necesidades del menor de edad, pero atendiendo a que la madre también debe colaborar en la manutención, se juzga razonable el monto establecido. Así las cosas, la venida en grado debe confirmarse por estar acorde a derecho.

III. DECISIÓN:

1. **CONFIRMAR** la sentencia N° 010-2015, contenida en la resolución N° 05, de fecha 09 de junio de 2015 (folios 36 a 40), que declaró **fundada en parte** la

demanda de alimentos, interpuesta por Flor Micaela Rivasplata Suárez, contra Ancelmo Carrión Torres; en consecuencia ordena al emplazado cumpla con asistir a su menor hijo Fabián Carrión Rivasplata, con ciento ochenta con 00/100 nuevos soles (S/.180.00) mensuales; con lo demás que contiene.

2. Al escrito que antecede: **ESTESE** a lo resuelto.
3. **NOTIFICAR** a las partes y **DEVOLVER** el expediente a su juzgado de origen para los fines de su competencia.

Juez Superior Ponente: señor **Álvarez Trujillo**.

SS.

ÁLVAREZ TRUJILLO.

MERCADO CALDERÓN.

ARAUJO ZELADA.

Expediente penal N° 00260-2014-0-0601-JP-PE-04

Procesado : Romer Javier Cieza Castañeda
Agravada : Socorro Violeta Zambrano Linares
Materia : Falta contra el patrimonio (daños)
Juez : Mario Lohonel Abanto Quevedo
Secretaria : Rosángela del Carmen Merino Yzquierdo

Sentencia número veintinueve

Resolución número tres

Cajamarca, dos de diciembre de 2014

Habiéndose estudiado los documentos que componen este expediente penal n.º 00260-2014-0-0601-JP-PE-04, seguido contra Romer Javier Cieza Castañeda por la comisión de faltas contra el patrimonio, en su modalidad de daños, se realizó el día 27 de noviembre de 2014 la audiencia señalada con antelación, según los términos del acta de la pág. 34 del expediente.

En ese acto se escucharon las versiones del procesado y de la agraviada así como los alegatos orales de los abogados defensores. Luego se pronunció el fallo del caso, declarándose la culpabilidad del procesado. Por eso, corresponde protocolizar la sentencia, de conformidad con el art. 484.6 del Código Procesal Penal y es la siguiente:

I. Antecedentes del caso

§1. Hechos denunciados

Primera.- Socorro Violeta Zambrano Linares denunció que el ocho de setiembre de 2014, aproximadamente a las 23:06 horas, Romer Javier Cieza Castañeda le ocasionó daños materiales a su vehículo automóvil de placa de rodaje C7A-254, marca Chevrolet, al propinarle un golpe de puño sobre el capó. Los daños fueron verificados con el peritaje de constatación policial (pág. 14 por el cual la agraviada pagó la tasa de S/. 141.10 nuevos soles) y valorizados por la agraviada en S/. 354.00 nuevos soles, según cotización (pág. 18).

§2. Actividades probatorias preprocesales

Segunda.- Antes de que el caso sea conocido por el Juez, en el expediente se aparejó el informe policial n.º 495-14-FRENPOL/I-COMIS-SIDF-C que contiene el acta de la denuncia policial, el peritaje policial de daños, las actas de declaración policial de la agraviada y del procesado, los vídeos contenidos en el disco DVD ofrecido por la agraviada, las dos impresiones del vídeo (capturas de pantalla), el recibo por pago de tasa para realizar peritaje policial y la cotización de reparación de daños, con los que se demuestra la producción de los daños que han sido objeto de la denuncia.

El 11 de noviembre de 2014 se dictó la resolución judicial con la que se citó a juicio a las personas litigantes (pág. 22). Desde entonces y hasta el día en que se realizó la audiencia, estas personas no han incorporado ningún elemento de prueba adicional.

II. Consideraciones jurisdiccionales

§3. Calificación jurídica de los hechos

Tercera.- Al instaurarse este proceso penal, se consideró que los hechos denunciados calificaban jurídicamente como un caso de falta contra el patrimonio, en la modalidad de daños. Así se estimó en el segundo párrafo considerativo de la resolución número uno.

De acuerdo a los elementos de prueba con los que se cuenta y lo actuado en la audiencia, ha quedado establecido que dicha calificación es la que corresponde al caso. La única pretensión de la denunciante, ratificada en la audiencia, es la reparación de los daños materiales sufridos y la defensa del procesado solo ha cubierto dicho extremo.

Cuarta.- El Código Penal ha establecido como bases de punibilidad sancionar delitos y faltas, esto es, comportamientos antijurídicos, dolosos o culposos, que realizados por comisión u omisión, tienen asignada una sanción penal con anticipación a su realización. Se requiere pues de prueba suficiente para vincular a un ciudadano con el hecho que se le atribuye, prueba que puede extraerse a partir de indicios que considerados en conjunto y evaluados a través de un juicio lógico, por máximas de experiencia generalmente, establezcan un hecho indiciado con suficiencia.

§4. Valoraciones probatorias

Quinta.- Las declaraciones de las personas litigantes son coincidentes respecto a la ubicación del procesado en el lugar y momento en que se produjeron los daños, así como los elementos de prueba que inciden en su responsabilidad (actuó solo, su conducta fue innecesaria). De la admisión de responsabilidad implícita en la intención de arribar a un acuerdo conciliatorio (frustrado por la cuantía de lo pretendido respecto a lo ofrecido), así como de la identificación positiva del procesado sobre su persona y su conducta en los vídeos y capturas de pantalla que como medios de prueba fueron actuados en la audiencia (él fue el único que ingresó de último y sin camisa), se puede vincular al procesado con la conducta que explicaría el resultado típico de daños. Así se explicó en el acta (pág. 36).

Sexta.- Pese a esta evidencia, interrogado el procesado Romer Javier Cieza Castañeda sobre si admitía su responsabilidad, dijo que no y sostuvo que no recuerda qué sucedió después de que ingresó con personas a las que denominó «amigos» al área común que da acceso a su vivienda, en la que estaba estacionado el vehículo de placa de rodaje C7A-254, marca Chevrolet. En su defensa no añadió ningún dato más ni ofreció declaraciones testimoniales de sus «amigos».

Sétima.- La agraviada Socorro Zambrano Linares reafirmó su versión inculpativa, dada ante la Policía Nacional cuando denunció (pág. 5) y cuando declaró (pág. 6), indicando que el procesado reconoció su responsabilidad ante la Policía cuando declaró (pág. 9).

La agraviada Socorro Violeta Zambrano Linares pretende el pago de S/. 695.10 nuevos soles, que comprende el pago de la reparación de los daños, la devolución del costo de la tasa por el peritaje y el pago de los servicios de su abogado.

De los elementos de prueba que obran en el expediente, así como los actuados en la audiencia y los alegatos de los defensores, se aprecia que existen concurrentes indicios que contribuyen a sostener la imputación contra el procesado. En primer lugar, se tiene la propia declaración de esta persona ante la Policía, en la que expresó «le di una puñada en dicho vehículo debe haber sido por el efecto del alcohol», luego, los cuatro vídeos ofrecidos y actuados en audiencia, en los que se aprecia que el procesado toca el vehículo sobre su borde superior derecho (desde la perspectiva del conductor) y la descripción de la zona dañada sobre el mismo lado del vehículo pero en el capó.

Octava.- La admisión de responsabilidad revela que el procesado Romer Javier Cieza Castañeda recuerda con detalle la acción que se le atribuye, pese a manifestar que estuvo en estado de ebriedad. Esta afirmación lamentablemente no ha sido corroborada con el peritaje respectivo, pero incluso en caso de ser cierta, no enerva de por sí la capacidad de imputabilidad del procesado (merced al nivel de intoxicación alcohólica y su eventual efecto sobre la libre determinación de la voluntad e inclusive en casos de *actio libera in causa* en los que el sujeto deliberadamente se coloca en tal situación para favorecer la comisión del acto ilícito).

Luego, los cuatro vídeos presentados ubican secuencialmente al grupo de personas que ingresaron al área común de la vivienda y al procesado ingresando último, sin camisa, reconociéndose él mismo y viéndose claramente que propina un golpe a la parte superior derecha del vehículo (lado del techo o marco de las puertas), para luego tornarse borrosa la imagen (por efecto de la luz superior) y no apreciarse con claridad si es que el procesado da un segundo golpe en el capó del vehículo. Sin embargo, ya se cuenta con un elemento de prueba que aporta dos indicios reveladores: el procesado fue quien golpeó el vehículo y lo hizo en su lado derecho (desde la perspectiva del conductor).

Por último, el peritaje policial de constatación de daños (pág. 14) contiene dos tomas fotográficas en las que se aprecia la zona del capó del vehículo en la que se ubica la hendidura (hundimiento), producida por un golpe, específicamente «en su tercio superior derecho (...) con una orientación de arriba hacia abajo». Esta información sobre el daño es crucial porque concatenada con los dos indicios previos, permite colegir que este hundimiento es compatible con la acción contundente del golpe dado con el puño, pues se trata de un hundimiento y está ubicado en la misma zona derecha del vehículo por la que se desplazaba el procesado Romer Javier Cieza Castañeda y por la que ya había dado un primer golpe, claramente apreciable en los vídeos actuados. Finalmente, la orientación de la hendidura, de arriba hacia abajo, corrobora la atribución de la causa del daño, que es el golpe del puño, dado precisamente, desde arriba hacia abajo, teniendo en cuenta la inclinación del capó sobre el motor del vehículo.

Novena.- Estos indicios objetivos y acreditados permiten inferir que solo la actividad dolosa del procesado Romer Javier Cieza Castañeda podría ocasionar los daños denunciados. Hay pues móvil actual, cercanía domiciliaria, acreditado antecedente de violencia física por parte del procesado (el primer golpe sobre el lado superior derecho del vehículo), expresa admisión de haber causado los daños, cuatro videos y dos

capturas de pantalla que identifican al procesado como autor. Por todo ello, concluyo en que Romer Javier Cieza Castañeda es responsable penalmente de los daños denunciados por Socorro Violeta Zambrano Linares.

Para obtener esta conclusión se han observado los requisitos materiales legitimadores según el Acuerdo Plenario n.º 1-2006/ESV-22 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias), del 13 de octubre de 2006, publicado en el diario oficial «El Peruano», el 29 de diciembre de 2006, que estableció como principio jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para todas las instancias judiciales (*jurisprudencia vinculante*) el fundamento cuarto de la Ejecutoria Suprema emitida a propósito del recurso de nulidad n.º 1912-2005, del 6 de setiembre de 2005.

Este fundamento impone seguir un procedimiento lógico en función al indicio en sí mismo (en nuestro caso, tres indicios: la ubicación del primer golpe que se ve en los vídeos, la ubicación del golpe que no se ve en los vídeos pero que se describe en el peritaje policial y la ubicación física del autor respecto al vehículo en la zona donde se presentó el daño) como a la deducción o inferencia (en nuestro caso, de la autoría del golpe con el puño, sobre el capó del vehículo), pues el objeto de la prueba indiciaria no es directamente el hecho constitutivo de la falta, sino los indicios que permiten llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar.

§5. Sobre la responsabilidad penal, la pena y su individualización

Décima.- En cuanto a la responsabilidad penal de Romer Javier Cieza Castañeda, este Juzgador tiene en cuenta que además de la sindicación directa de la agraviada Socorro Violeta Zambrano Linares y del juicio sobre su responsabilidad ya efectuado, debe estimarse que se comportó lesivamente de modo inexcusable. Juzgo que el procesado pudo abstenerse de causar los daños pues nada lo obligaba a realizarlos, ni por defender su integridad ni por salir en defensa de otro bien jurídico penal ajeno de mayor entidad. Al no hacerlo, es responsable penalmente de su producción.

Acreditada la responsabilidad penal de Romer Javier Cieza Castañeda, es menester determinar si su comportamiento merece la sanción penal prevista y por lo tanto, es responsable también de la reparación civil. Sobre el primer punto, es necesario recurrir

al examen de los elementos del art. 46 del Código Penal (aplicable en virtud a la prescripción del art. 440 del mismo código).

Para el caso resultan aplicables: i) la naturaleza de la acción, que es un acto dañoso ilegítimo, por lo que su comportamiento es socialmente reprochable; ii) la importancia de los deberes infringidos, pues en una situación de vecindad, el respeto mutuo debe mantenerse; iii) la extensión del daño o peligro causados, que según ha demostrado la agraviada, se requerirá de un servicio especializado para reparar su vehículo y se la causó perjuicio económico; iv) las circunstancias de lugar, modo y ocasión, que en este caso vienen determinadas por la ausencia de la agraviada, que a esa hora descansaba y por la confianza de esta en la indemnidad de su patrimonio, ubicado al interior de una zona común frecuentada por sus vecinos; y por último, v) la edad, educación y situación económica del procesado, que es un ciudadano de 19 años de edad, estudiante de operación de maquinaria pesada en CENFOMIN, soltero, sin hijos, esto es, que ingresa recién a la mayoría de edad, asumiendo sus derechos pero también de sus deberes, entre los que se halla la capacidad para ser motivado por la norma penal.

§6. Sobre la responsabilidad civil

Décimo primera. - Así mismo, se deberá fijar una reparación civil a favor de la agraviada, la cual debe circunscribirse a la sustentación de su pretensión civil, según el art. 108 del Código Procesal Penal, formulada en concordancia con lo prescrito por los arts. 92 y 93 del Código Penal.

En el caso que nos ocupa, para fijar el monto de la reparación civil, debemos tener en cuenta el pago de la reparación de los daños (daño emergente), la devolución del costo de la tasa por el peritaje y el pago de los servicios de su abogado, conforme ella sustentó en audiencia.

III. Resolución del caso

Apreciando hechos y pruebas con la objetividad y el criterio de conciencia que la Constitución Política y la ley exigen e impartiendo justicia a nombre del pueblo con imparcialidad e independencia, condeno a Romer Javier Cieza Castañeda (identificado con DNI n.º 76880003, de 19 años de edad, estudiante de operación de maquinaria pesada en CENFOMIN, soltero, sin hijos, domiciliado en el Jr. Amazonas 1020, barrio San Sebastián, Cajamarca) como autor de falta contra el patrimonio en la modalidad de

daños, prevista en el primer párrafo del art. 444 del Código Penal, en agravio de Socorro Violeta Zambrano Linares a cincuenta jornadas de prestación de servicio comunitario y al pago de S/. 700.00 (setecientos y 00/100) nuevos soles por reparación civil a favor de la persona agraviada. El pago se efectuará mediante depósito judicial electrónico en el Banco de la Nación, a más tardar luego del tercer día hábil posterior a la fecha en que esta sentencia quede firme por consentida o ejecutoriada.

La pena principal que deberá cumplir el sentenciado Romer Javier Cieza Castañeda se ejecutará de preferencia los días sábados y domingos de cada mes, para no perjudicar sus actividades habituales, en el lugar que determine el Director del Instituto Nacional Penitenciario de esta ciudad, a quien se oficiará con copia certificada de esta sentencia, una vez que quede firme, para su supervisión y efectivo cumplimiento.

Se le informa al sentenciado Romer Javier Cieza Castañeda que para cumplir con la sanción impuesta deberá presentarse ante el Jefe de la Oficina de Medio Libre y Ejecución de Penas Limitativas de Derechos del Inpe, señor Onofré Hernández Hernández, cuya oficina está ubicada en el primer piso de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Jr. del Comercio 680, Cajamarca. En caso de no cumplir con la sanción impuesta, establezco el apercibimiento de convertirla, de acuerdo al art. 55 del Código Penal, en días de cárcel (pena privativa de la libertad efectiva) por cada jornada de servicio comunitario incumplida, hasta un máximo de cincuenta días de cárcel.

Consentida o ejecutoriada que sea esta sentencia, cúmplase su mandato ejecutándose la pena, luego de lo cual se anularán los antecedentes policiales y penales generados contra el ciudadano condenado, oficiándose al Jefe del Departamento de Anulación de Antecedentes Policiales de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la Av. Aramburú 550-Surquillo, Lima.

Luego, archívese definitivamente el expediente enviándose con oficio al Jefe del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, conforme al instructivo para la remisión de expedientes fenecidos (oficio circular n.º 006-2013-USJ-GAD-CSJCA-PJ).

Notifíquese y ofíciase oportunamente.

EXPEDIENTE N° : 1596-2015-1-0601-JR-PE-01
DELITO : HURTO AGRAVADO
ACUSADO : ALEJANDRO RICARDO RAMOS AGUILAR Y OTRO
AGRAVIADO : EDWIN GILBERTO BRINGAS RUMAY
JUEZ : DOMINGO C. ALVARADO LUIS
ESPEC. DE CAUSAS : LORENA IBETH CARRIÓN ROJAS
ESPEC. AUDIENCIAS : JHOANA CINDY PAOLA LÓPEZ ZEGARRA

SENTENCIA DE CONFORMIDAD

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO

Cajamarca, diez de febrero del año dos mil diecisiete.-

1.- Encabezado.

VISTOS, OÍDOS y ATENDIENDO:

Que ante el Juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, magistrado **Domingo C. Alvarado Luis**, se realizó la audiencia de juicio oral contra el **acusado ALEJANDRO RICARDO RAMOS AGUILAR**, con DNI N° 46459491, natural del distrito, provincia y departamento de Cajamarca, nacido el 21/02/1990, de 26 años de edad, peruano, hijo de Justiniano y Adela, soltero, sin hijos, con secundaria completa, de ocupación trabaja en construcción, con ingresos de ochocientos cuarenta soles mensuales, con celular movistar N° 958737926, domiciliado actualmente entre el Jr. Emancipadores y la Vía de Evitamiento Sur - Cajamarca, condenado a pena privativa de libertad suspendida por el mismo delito en el 2014; **por el delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Hurto Agravado en grado de Tentativa**, en agravio de **Edwin Gilberto Bringas Rumay**; audiencia realizada con intervención del **Ministerio Público, representado por el abogado José Luis Chávez Sánchez**, Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca; y de otro lado la **defensa del acusado, representado por la defensora pública Rosa Elena Nicolás Rodríguez**.

2.- Antecedentes procesales.

Propuesta de conclusión anticipada del juicio.

2.1.- Fiscalía refirió que al amparo del principio acusatorio y dentro del marco de legalidad, como lo previsto en el artículo 372° inc. 2) del Código Procesal Penal [en adelante CPP], con el abogado defensor del acusado y con ésta, han arribado a un **acuerdo total** consistente en:

2.2.- Imputación fáctica: El acusado **Alejandro Ricardo Ramos Aguilar**, acepta que el 22 de agosto de 2015, a las 07:00 horas, en compañía de su coacusado

Emersón Cristhian Ruiz Valencia, sustrajo un perol de fierro fundido, que se encontraba en el interior de la tienda del agraviado Edwin Gilberto Bringas Rumay, para luego pretender darse a la fuga; sin embargo, con el apoyo de personal de Serenazgo fue intervenido en la intersección del Jr. 11 de Febrero y Jr. Apurímac, teniendo en su poder el bien sustraído.

2.3.- Calificación jurídico-penal: Los hechos descritos configuran el delito tipificado en el artículo 185° -tipo base-, con la agravante prevista en el artículo 186° -primer párrafo inc. 5)-, del Código Penal [en adelante CP].

2.4.- Pena: Se imponga dos años nueve meses de pena privativa de libertad, en tanto el delito quedó en grado de tentativa (art. 16° CP), la misma que en aplicación del artículo 52°⁷⁴ del CP se convirtió a prestación de servicios a la comunidad de 141 jornadas, que reducida en un sétimo (20 jornadas) por haberse acogido a la conclusión anticipada del juicio oral, da una pena concreta final de **121 jornadas de prestación de servicios comunitarios**.

2.5.- Reparación Civil: Es por la suma de S/.200.00 soles, que será cancelada solidariamente con su coacusado, debiendo cancelar el hoy acusado la suma de **S/.100.00 soles** en el plazo de **24 horas**, mediante depósito judicial.

3.- Trámite de la conformidad.

Información al acusado de sus derechos y efectos de la conclusión anticipada.

3.1.- En el caso concreto, el juzgador informó al acusado **Alejandro Ricardo Ramos Aguilar**, sus derechos, los efectos y consecuencias -ventajas y desventajas- de la conclusión anticipada del juicio oral, quien luego de consultar con su defensa técnica, manifestó libremente su voluntad de acogerse a la conclusión anticipada del juicio oral, solicitando la suspensión de la audiencia para negociar los términos del acuerdo con Fiscalía, luego se procedió a sustentar el mismo, solicitándose su aprobación.

Regulación de la conclusión anticipada del juicio oral.

3.2.- Conforme a lo establecido en el inciso 2) del artículo 372° del Código Procesal Penal, la institución de la “**conformidad premiada**”, constituye un acto unilateral de

⁷⁴ Artículo 52° CP: “En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de prestación de servicios a la comunidad, o limitación de días libres, a razón de un día de privación de libertad por un día de multa, siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres.”

disposición de la pretensión, claramente formalizado, efectuado por el acusado y su defensa, de doble garantía, que importa una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público, que a su vez genera una expectativa de sentencia conformada, por lo que no se puede alegar posteriormente la vulneración de la “**presunción de inocencia**”, pues la conformidad exime a la acusación de la carga de la prueba de los hechos constitutivos, siéndole de aplicación el principio de que “**nadie puede ir contra de sus propios actos**”, de tal suerte que, reconocido un hecho, no puede posteriormente el acusado negar o modificar ese relato fáctico.

Naturaleza de la conclusión anticipada del juicio oral.

3.3.- De conformidad con el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116 (18/07/2008), cuando el acusado se acoge a la figura de la Conclusión Anticipada del Juicio Oral, efectúa un acto unilateral de disposición de su pretensión, lo que implica la **renuncia a su derecho a la actuación de pruebas y a un Juicio Público**; siendo así, “...**los hechos no se configuran a partir de la actividad probatoria de las partes...**”, sino que “...**vienen definidos... por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa**”. Por tanto, la sentencia de conformidad, no puede apreciar ningún medio de prueba, no sólo por no haberse actuado, sino porque el allanamiento del acusado no autoriza a valorar tampoco los actos de investigación, existiendo así una “**predeterminación de la sentencia**”.

4.- Homologación del acuerdo propuesto.

4.1.- Al haber sido aceptados los hechos imputados, pena y reparación civil materia de éste juicio oral, por parte del acusado **Alejandro Ricardo Ramos Aguilar**, *en plena capacidad de ejercicio de sus derechos y debidamente asistido por su defensa técnica*, tales extremos deben tenerse como existentes y ciertos, tal y conforme se precisan en la acusación fiscal, lo que genera la vinculación absoluta de los hechos imputados, así como la antijuridicidad y responsabilidad penal del acusado, al no existir causa de justificación o eximente alguna, previa verificación mínima de la imputación.

4.2.- Respecto a la norma penal y elementos del delito.

El artículo 185°, del CP, prescribe: “**El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra**, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años”; asimismo, el

artículo 186° –primer párrafo, inciso 5)– del CP, prescribe: “El agente **será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años** si el hurto es cometido: 5. **Mediante el concurso de dos o más personas.**”

A. Elementos del tipo penal.

i) Acción:

Consiste en **apoderarse de un bien mueble ajeno**, mediante destreza, ardid o treta, sin usar la violencia o amenaza sobre la víctima, siempre que para el logro de su cometido, se haga efectivo el rompimiento de obstáculos. En el presente caso el acusado aceptó -vía conformidad-, haber intentado sustraer un perol de fierro fundido, de propiedad del agraviado Edwin Gilberto Bringas Rumay.

ii) Tipicidad⁷⁵:

- Tipo objetivo: *Los hechos descritos y atribuidos al acusado se subsumen en el artículo 185° del CP, en concordancia con el inciso 5) del primer párrafo del artículo 186° del CP.*
- Tipo subjetivo: *El **dolo**, esto es, que el agente actúa con **conciencia y voluntad** de que está cometiendo un injusto, a sabiendas que está prohibido por Ley (Arts. 185° y 186° CP).*

iii) Antijuricidad⁷⁶:

La conducta atribuida al acusado, contraviene lo establecido en el artículo 185° del CP, concordado con el inciso 5) del primer párrafo del artículo 186° del CP, afectando el derecho al patrimonio del agraviado Edwin Gilberto Bringas Rumay, sin causa justificada -sin autorización normativa-, y no existiendo causa de justificación alguna, como las previstas en el artículo 20° del CP, tal conducta deviene en antijurídica.

iv) Culpabilidad:

El acusado, al momento de los hechos, era persona capaz, mayor de edad, con educación secundaria completa, no ha sufrido anomalía psíquica que afecte su

⁷⁵ TIPICIDAD: Aquellos elementos que han de concurrir para que un hecho tenga relevancia penal, sea subsumible en la descripción de algún tipo delictivo.

⁷⁶ LA ANTIJURIDICIDAD: Es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del Derecho en general (no sólo al ordenamiento penal). Es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no protegida por causas de justificación.

capacidad de comprender sus actos, por ende fue capaz de internalizar la norma penal y respetarla, sin embargo no lo hizo y por el contrario la quebrantó; por lo que, no existiendo causa de inculpabilidad, su conducta resulta culpable y por ende reprochable penalmente.

B. Grado de participación del agente: Autoría (Art. 23° CP).

C. Estado de desarrollo del delito: Tentativa (Art. 16° CP).

5.- Control de legalidad de la pena concreta.

Conforme a los principios de Legalidad, Lesividad, Culpabilidad, Proporcionalidad y Humanización, y en aplicación de lo prescrito en los artículos I, II, IV, VI, VII, VIII, IX del T.P., 45°, 45°-A, 46°, 185° y 186° del CP; considerando además de las condiciones personales del acusado, indicadas en sus generales de ley, los principios y normas reguladoras de la pena, se tiene:

5.1.- Pena abstracta: Es la prevista en el primer párrafo del artículo 186° del CP, esto es no menor de 03 ni mayor de 06 años de privación de libertad.

5.2.- Tipo de pena solicitada-acordada: La pena solicitada fue de dos años y nueve meses de privación de libertad, la misma que de conformidad con lo prescrito en el artículo 52° del Código Penal puede convertirse a una de **prestación de servicios a la comunidad**, por lo que resulta atendible aprobar la pena solicitada, por ser legal y adecuada al caso concreto, máxime si se trata de un delito en grado de tentativa.

5.3.- Determinación judicial de la pena: Prestación de servicio comunitario.

En el caso concreto, la pena fijada por fiscalía parte de dos años nueve meses, la misma que convertida a la pena de prestación de servicios a la comunidad (7 días x 1 jornada) y reducida hasta en un sétimo (20 jornadas) como beneficio premial por haberse acogido el acusado a la conclusión anticipada del juzgamiento queda una pena concreta final de **ciento veintiuno [121] jornadas de prestación de servicios comunitarios**, que deberán realizarse en forma gratuita en la institución pública que disponga el Área de Medio Libre del INPE; la misma resulta legal (D. Leg. N° 1191) y proporcional a la conducta típica desplegada, por lo que éste extremo debe aprobarse por haberse fijado dentro de los parámetros legales, tal como lo establece el artículo 397°.3 del CPP.

5.4.- De la pena de prestación de servicios a la comunidad:

Conforme al artículo 34° del CP (modificado por D. Leg. N° 1191, 21/08/2015) y artículo 119° del Código de Ejecución Penal [CEP], **ésta pena obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras, siempre que sean públicos.** Además, en aplicación del artículo 121° del Código citado, y artículos 243°, 244° y 245° del Reglamento del CEP; el organismo responsable (INPE), designa la entidad, supervisa su cumplimiento e informa al Poder Judicial y Ministerio Público sobre su ejecución; y, se encarga de la organización y administración del Registro Nacional de Entidades Receptoras - RNER, poniendo en conocimiento del Poder Judicial las entidades receptoras debidamente inscritas.

Asimismo, el artículo 254° del indicado Reglamento del CEP, establece que: “El sentenciado tiene la obligación de concurrir por sus propios medios a la entidad receptora correspondiente, a no ser que su costo no lo permita o la distancia que medie entre su domicilio y el centro dificulte sustancialmente su concurrencia. En este caso, la administración penitenciaria podrá convenir con las entidades receptoras asuman, en la medida de lo posible, los gastos de transporte”.

Reparación civil.

6.- Conforme lo sostiene Asencio Mellado, “la reparación civil nace porque el hecho produce daño o porque implica un menoscabo patrimonial a la víctima, lo que interesa al actor civil es que exista daño reparable, no que el hecho del que deriva sea delito”. La reparación civil puede solicitarse en el proceso penal, tal como se establece en el Capítulo I del Título VI (arts. 92°–101°) del Código Penal. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la L.O.M.P. y artículo 11° del CPP, corresponde al Ministerio Público, salvo que exista actor civil legítimamente constituido.

En el caso concreto, de conformidad a lo prescrito en los artículo 92° y 93° del Código Penal y en atención al principio de dañosidad y proporcionalidad, corresponde al acusado reparar el daño causado con su accionar ilícito, por lo que, considerando que el monto acordado de **doscientos soles**, solidarios con su coacusado, de los que el hoy acusado cancelará **cien soles [S/.100.00]**, en el plazo de **24 horas** de emitida la presente sentencia, guarda congruencia con el principio de dañosidad y resulta proporcional al daño causado al bien jurídico protegido, que en este caso lo constituye el patrimonio del agraviado Edwin Gilberto Bringas Rumay, y no habiendo

actor civil válidamente constituido para que observe dicho monto, tal extremo también debe aprobarse.

Costas procesales.

7.- Finalmente conforme lo prevé el artículo 500° inciso 1) del CPP, toda decisión que pone fin al proceso debe pronunciarse sobre las costas -serán impuestas al acusado declarado culpable-. Siendo así, en el presente caso, correspondería imponer al sentenciado -además de la reparación civil- el pago de las costas procesales; sin embargo, atendiendo a que el acusado se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio oral, lo que genera un costo beneficio favorable al sistema, al proceso y a las partes, en atención del principio *favor in persona* y en aplicación extensiva del artículo 497° (3) y (5) del CPP, ésta judicatura, exonera de tales costas al acusado por haberse conformado con la acusación fiscal.

8.- PARTE RESOLUTIVA:

Decisión.

Por tales consideraciones, apreciando los hechos, la aceptación de cargos y la pretensión punitiva, como la pretensión económica, este Juzgado considera que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma necesarios para la procedencia de la Conclusión Anticipada del Juicio Oral que se solicita, debiendo aprobarse el acuerdo de conformidad presentado a este Juzgado en la audiencia pública de Juicio Oral de la fecha; y, con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú, en sus artículos 38°, 51°, 138° y 139° incisos 1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14), y en aplicación de los artículos II, IV, VII y VIII del T.P., 1°, 6°, 11°, 12°, 16°, 23°, 28°, 34°, 45°, 45°-A, 46°, 52°, 92°, 93°, 185° y 186° -inciso 5) del primer párrafo- del Código Penal (D. Leg. N° 635), modificado por Ley N° 30076; y de los artículos 356°, 372°, 394°, 399°, 402° y 403° del Código Procesal Penal (D. Leg. N° 957), administrando justicia a nombre de la Nación, el Juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, **RESUELVE:**

- 1.- APROBAR el acuerdo de conclusión anticipada arribado por las partes;**
- 2.- CONDENAR al acusado ALEJANDRO RICARDO RAMOS AGUILAR, como autor del delito contra El Patrimonio, en la modalidad de HURTO AGRAVADO en grado de TENTATIVA, en agravio de Edwin Gilberto Bringas Rumay; en consecuencia, le IMPONGO CIENTO VEINTIÚN [121] JORNADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO -en jornadas no mayores a diez [10] horas semanales-; que deberá cumplir en forma gratuita, los días sábados,**

domingos y/o feriados, en entidades asistenciales que disponga el área de tratamiento libre del INPE; **bajo apercibimiento**, de convertir o revocar, según corresponda de conformidad con lo establecido en los artículos 53° y 55° del Código Penal, las penas limitativas de derecho por una pena privativa de la libertad, frente al abandono o incumplimiento injustificado de la pena impuesta; utilizando los apremios que la ley faculta.

3.- DISPONER que la condenada se apersona dentro de los cinco (05) días hábiles de leída la presente sentencia, a la Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces, que tengan jurisdicción geográfica del domicilio real donde resida el sentenciado, o donde ejerza su actividad laboral permanentemente; en el caso concreto deberá concurrir al **Jr. Apurímac N° 683– Cajamarca**, interior, Dirección de Medio Libre del INPE Cajamarca y coordinar la ejecución de su pena con el **señor César Campos Salazar**, encargado de dicha área. **REMÍTASE** copia certificada de la sentencia dentro de las veinticuatro horas de consentida la misma para su cumplimiento, bajo responsabilidad. Sin perjuicio de ello, se entrega copias certificadas de esta sentencia al mismo sentenciado, para con ella, acuda a la Dirección de Medio Libre del INPE-Cajamarca e inicie el cumplimiento de su pena.

4.- FIJAR una **REPARACIÓN CIVIL** de **DOSCIENTOS SOLES**, que será solidaria con su coacusado, debiendo cancelar el hoy sentenciado la suma de **CIEN SOLES [S/.100.00]**, en el plazo de **24 horas**, computados a partir de la emisión de la presente sentencia.

5.- EXONERAR de las **COSTAS PROCESALES** al sentenciado.

6.- CONSENTIDA o EJECUTORIADA que sea la presente sentencia, se la **INSCRIBA** en el Registro Central de Condenas, se **GIRE Y REMITA** a quienes corresponda el boletín y testimonio de condena; y se **REMITA** el presente proceso al Juzgado de Investigación Preparatoria respectivo para la ejecución de la sentencia, conforme lo prevé el artículo 489° del Código Procesal Penal. **ORDENÁNDOSE**, levantar las órdenes de captura que existan en contra del sentenciado por éste proceso, y se **DISPONE** su inmediata libertad, siempre que no exista otro mandato que restrinja su libertad, en cuyo caso deberá ponerse a disposición de la autoridad judicial competente.

7.- DÁNDOSE LECTURA en audiencia pública.-